



REPÚBLICA ARGENTINA
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
(PROVISIONAL)
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Período 131°

7° Reunión - 4° Sesión especial – 8 de mayo de 2013

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, D. **Amado Boudou**, y
de la señora presidenta provisional del H. Senado, senadora **Beatriz Rojkes de Alperovich**
Secretarios: señor D. **Juan Héctor Estrada** y señor D. **Juan Horacio Zabaleta**
Prosecretarios: señor D. **Luis Borsani**, señor D. **Mario Daniele** y
señor D. **Santiago Eduardo Révora**

PRESENTES:

AGUIRRE DE SORIA, Hilda Clelia
ARTAZA, Eugenio J.
BARRIONUEVO, Walter Basilio
BASUALDO, Roberto G.
BERMEJO, Rolando A.
BIANCALANI, Fabio D.
BLAS, Inés Imelda
BONGIORNO, María José
BORELLO, Marta Teresita
CABANCHIK, Samuel M.
CA BRAL ARRECHEA, Salvador
CANO, José M.
CASTILLO, Oscar A.
CIMADEVILLA, Mario J.
COLAZO, Mario J.
CORRADI DE BELTRÁN, Ana María
CORREGIDO, Elena M.
DE LA ROSA, María Graciela
DI PERNA, Graciela A.
DÍAZ, María Rosa
ESCUDERO, Sonia M.
FELLNER, Liliana B.
FERNÁNDEZ, Aníbal D.
FILMUS, Daniel F.
FUENTES, Marcelo J.
GIMÉNEZ, Sandra D.
GIUSTINIANI, Rubén H.
GODOY, Ruperto Eduardo
GONZÁLEZ, Pablo G.
GUASTAVINO, Pedro G.
GUINLE, Marcelo A.
HIGONET, María de los Ángeles
IRRAZABAL, Juan Manuel
ITURREZ DE CAPELLINI, Ada del Valle
JUEZ, Luis A.
LABADO, María Esther
LATORRE, Roxana I.
LEGUIZAMON, María Laura
LINARES, Jaime
LÓPEZ, Osvaldo R.

LORES, Horacio
LUNA, Mirtha María T.
MANSILLA, Sergio F.
MARINO, Juan C.
MARTÍNEZ, Alfredo A.
MAYANS, José M.
MEABE, Josefina A.
MONLLAU, Blanca M.
MONTERO, Laura G.
MORALES, Gerardo R.
MORANDINI, Norma E.
NEGRE DE ALONSO, Liliana T.
NIKISCH, Roy A.
PARRILLI, Nanci M.
PÉREZ ALSINA, Juan A.
PÉRSICO, Daniel R.
PETCOFF NAIDENOFF, Luis C.
PICHETTO, Miguel Á.
RACHED, Emilio A.
REUTEMANN, Carlos A.
RÍOFRÍO, Marina R.
RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
ROJKE de ALPEROVICH, Beatriz L.
ROLDAN, José M.
ROMERO, Juan C.
RUIZ DÍAZ, Elsa Beatriz
SANZ, Ernesto R.
VERA, Arturo
VERANI, Pablo
VERNA, Carlos A.

AUSENTES, CON AVISO:

ESTENSSORO, María Eugenia
MENEM, Carlos S.

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional.
2. Convocatoria a sesión especial.
3. Designación de conueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. (O.D. N° 134/13.)
4. Creación de instrumentos financieros para promover inversiones. (P.E.-28/13.)
5. Repudio a amenazas sufridas por un fiscal nacional.
6. Homenaje a Julio Mahárbiz.
7. Modificación de la ley de creación del Consejo de la Magistratura. (O.D. N° 136/13.)
8. Repudio a amenazas sufridas por un fiscal nacional. (Continuación.)
9. Modificación de la ley de creación del Consejo de la Magistratura. (O.D. N° 136/13.) (Continuación.)
10. Ingreso democrático al Poder Judicial. (O.D. N° 135/13.)
Publicación en internet de decisiones de la Corte Suprema. (O.D. N° 124/13.)
Carácter público de declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos. (O.D. N° 123/13.)
11. Creación de instrumentos financieros para promover inversiones. (P.E.-28/13.) (Continuación.)
12. Ingreso democrático al Poder Judicial. (O.D. N° 135/13.)
Publicación en Internet de decisiones de la Corte Suprema. (O.D. N° 124/13.)
Carácter público de declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos. (O.D. N° 123/13.) (Continuación.)
13. Creación de instrumentos financieros para promover inversiones. (P.E.-28/13.) (Continuación.)
14. Ingreso democrático al Poder Judicial. (O.D. N° 135/13.)
Publicación en internet de decisiones de la Corte Suprema. (O.D. N° 124/13.)
Carácter público de declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos. (O.D. N° 123/13.) (Continuación.)
15. Creación de instrumentos financieros para promover inversiones. (P.E.-28/13.) (Continuación.)
16. Apéndice
 - I. Convocatoria a sesión especial.
 - II. Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.
 - III. Actas de votación.
 - IV. Inserciones.

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13 y 24 del miércoles 8 de mayo de 2013:

Sr. Presidente. – Como hay quórum, la sesión especial queda abierta.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora por Corrientes, Josefina A. Meabe, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Meabe procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2

CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Sr. Presidente. – Se incorporarán en el Diario de Sesiones de esta sesión la nota de varios senadores solicitando la convocatoria a sesión especial y el respectivo decreto dictado por la Presidencia.¹

(...)

¹ Ver el Apéndice.

7

O.D. N° 136/13
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la ley 24.937, Creación del Consejo de la Magistratura.

Antes de avanzar en el debate, quiero hacer una propuesta. Este proyecto va a tener su debate y su votación. Después, tenemos tres proyectos para continuar. Sobre ellos, propongo que se haga un único debate con tres votaciones separadas en los tres proyectos de ley.

Si no hay objeción, utilizaríamos este mecanismo ya acordado.

Sr. Pichetto. – Ya lo habíamos acordado en la reunión de labor parlamentaria.

Sr. Presidente. – Sí, senador; pero lo indico para que quede aquí acordado.

– *Asentimiento.*

Sr. Pichetto. – También, si hay acuerdo, solicito que se dé lectura a la lista de oradores que tiene la Secretaría para ver si se va a anotar algún colega más y fijar una hora estimativa de la votación.

Sr. Presidente. – Ya tenemos confeccionada la lista de oradores para el proyecto sobre el Consejo de la Magistratura y estamos confeccionando la lista para el segundo debate.

Por favor, señor secretario: dé lectura a la lista de oradores.

Sr. Secretario (Estrada). – Como miembros informantes están los siguientes senadores: Fuentes; comparten el tiempo Sanz y Morales, Negre de Alonso y Juez. Luego continúan los senadores Artaza, Romero, Borello, Escudero, López, Morandini, PettcoffNaidenoff, Basualdo, Vera, Cabanchik, Linares, Di Perna, Cimadevilla y Fernández. Para el cierre, están los senadores Giustiniani, Rodríguez Saá, Cano y Pichetto.

Sr. Presidente. – Entonces, ponemos a votación esta lista. Se suma a la lista de oradores el senador Mansilla.

– *Se practica la votación.*

¹ Ver el Apéndice

Sr. Presidente. – Aprobado.

Sr. Pichetto. – Apliquemos el Reglamento para el caso de los miembros informantes.

Sr. Presidente. – Así es.

Les comento que esta votación terminaría alrededor de las nueve de la noche, a las 21.

(...)

9

O.D. N° 136/13

**MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA**

(Continuación)

Sr. Pichetto. – Habría que aprobar las inserciones.

Sr. Presidente. – Siempre las autorizamos al final del debate. Así que no hay problema.

Para comenzar con la lista de oradores sobre el tema del Consejo de la Magistratura, tiene la palabra el miembro informante, señor senador Fuentes.

Sr. Fuentes. – Muy amable, señor presidente: voy a informar el dictamen sobre las

¹ Ver el Apéndice

modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley de reforma al Consejo de la Magistratura. Voy a ser muy breve, atento al particular pedido siempre vigente del jefe del bloque.

En realidad, este debate ya se ha dado con intensidad y se discutió en profundidad en la sesión anterior. ¿Por qué digo esto? Porque es evidente...

– *Murmullos en el recinto.*

Sr. Fuentes. – Señor presidente, por favor pida silencio.

Sr. Presidente. – Por favor, a los senadores de su bloque, silencio.

Sr. Fuentes. – Gracias.

Se han dado fundamentos jurídicos y fundamentos políticos, pero básicamente se ha creado un debate mediático.

A fuer de ser sinceros, esto ha impresionado en una escala decreciente. Precisamente, ello motiva los cuestionamientos titulares cambiantes en los diarios a esta serie de reformas que ya, desde su simple enunciación, sin conocimiento alguno del texto, motivó oposiciones, desgarraduras de vestiduras, vírgenes vestales que caen de sus pedestales, atento a que vamos por la República.

Esta construcción mediática, a lo largo del transcurso del tiempo, ha ido cambiando. En un momento, hasta estuvo la tentación por parte de nuestra respetable oposición parlamentaria de transformarse en extraparlamentaria atento a no querer participar del debate en comisiones y sí encabezar marchas en las calles. Vimos también el llamado a acercar el Consejo al Congreso: el llamado a evitarnos votar; las presiones sobre los diputados conciliadores con la acusación de “infames traidores a la patria”. Todo este marco de dramatismo, a medida que el tiempo transcurre, decanta.

Y como decía siempre mi abuela, “pegale al chanco que viene el dueño”, estaba viendo el fallo de ayer. Resulta evidente, lo venimos reiterando y repitiendo, toda vez que se extienden derechos y se ponen cotos o límites a privilegios, la capacidad de abroquelamiento de esos sectores permanentes –poderes fácticos permanentes en la Argentina– es muy grande. En este caso, se suman estos elementos centrales: el aparato de concentración, en este caso mediático, del grupo que confronta con el gobierno principalmente, en torno a la aplicación de la Ley de Medios; las conductas corporativas afectadas por esta medida; y, fundamentalmente, la cercanía del acto electoral. Es decir, la velocidad con la cual distintas agrupaciones políticas tienen que conformar una agenda que parezca autónoma. De hecho, creo que ese es el principal déficit de nuestro debate.

La democracia presupone alternancia. La alternancia presupone proyectos superadores. Es en la dialéctica de esos supuestos proyectos superadores donde la propia fuerza se ve obligada también a mejorar. Es decir, el carecer de propuesta alternativa no solo es perjudicial para esa fuerza política sino para el conjunto, porque debilita la democracia.

A lo largo de varios debates, me he manifestado respecto de este concepto –que todavía anida y es añorado– de democracia tutelada; es decir, el ejercicio de la democracia por parte del pueblo en momentos en los cuales se afectan privilegios e intereses. Hablo de esa reacción, de ese abroquelamiento que es despiadado y que normalmente constituye un esquema que funciona igual: exacerbar odios, exacerbar prejuicios, etcétera.

Hay algo constante. Cuando observamos, siempre decimos con los compañeros que si hubieran existido técnicas de medición, ¿quién hubiera previsto en 1952, con un 56 por ciento del producto bruto interno en manos de los trabajadores, con el 40 por ciento de la población en condiciones de ejercer el turismo social, con el gran desarrollo autónomo y

científico que había y con lo que eran los proyectos culturales de las universidades tecnológicas y obreras, que dos o tres años después lo iban a derrocar? Era imposible preverlo.

Es evidente, que esa creación de condiciones a los efectos del mantenimiento de esos privilegios que tienen que ver con este tema, tienen una línea argumental muy clara, que es la derogación –por el golpe de la llamada revolución libertadora y fusiladora del 55– de la Constitución de 1949, Constitución que expresaba el grado de conciencia más elevado del conjunto del pueblo argentino en sus distintas etapas históricas.

Es decir, esta Constitución, dictada sobre las bases materiales de expansión de una sociedad camino a los logros igualitarios de la justicia social, de la solidaridad económica, de la independencia del proceso económico, de la soberanía política, es decir, esta construcción jurídica o el universo jurídico sostenido con los datos de la realidad presuponía el dictado de una norma constitucional con vigencia en el tiempo. Pero fueron seis años. Y no fue precisamente por el tema del debate técnico jurídico o científico de la misma que se convencieron los constituyentes que debía ser reformada. Simplemente, ocurrió el hecho brutal de la fuerza, el hecho de una revolución avalada posteriormente por nuestro sistema, por nuestros tribunales, etcétera.

¿Qué quiero decir con esto? Este debate hubiera presupuesto, básicamente, el entendimiento de esta cuestión. Y ante una propuesta política que entiende que la centralidad de la cuestión política, social, económica y cultural de la Argentina es la protección del trabajo en medio de una crisis de la magnitud que existe, el dictado de las normas consecuentes y, fundamentalmente, desde el interés común, la reglamentación de la apropiación de la renta –debate que comenzamos a dar con la Resolución 125–, es evidente que al sólo análisis de las dificultades, de las escasas dificultades jurídicas, vuelvo a insistir que no ha habido un debate en profundidad al respecto, ninguna de las argumentaciones dadas desde el punto de vista jurídico conmueven la validez constitucional del texto que hoy pretendemos aprobar.

¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago esta introducción? Porque estamos ante un escenario inédito en la historia institucional y política del país, que es que aquellos presupuestos fácticos materiales que determinaron el dictado de una norma legal de rango constitucional como fue la reforma del 94, presupuestos fácticos que arrancaban sobre la base de un escenario político ideológico que estaba dado por el consenso de Washington y, en consecuencia, sobre la subsidiariedad del Estado y la prevalencia de la protección de la renta –en continuidad con esa política que había derogado la Constitución del 49, es decir, los mecanismos de seguridad de la renta y no los mecanismos de seguridad y protección del trabajo, con una economía integradora, social e igualitaria–, esos esquemas jurídicos que traen en esa ingeniería, que a fuer de ser sincero es de una pobreza franciscana –y lo digo haciéndome cargo de lo que expreso–, cuando hemos pretendido incorporar en un texto de las características del reimplantado en el 57, hemos tratado de introducir una serie de cuestiones que son ajenas al sistema presidencialista y que vienen del derecho parlamentario. En concreto, el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, donde directamente la claridad del artículo 114 establece que son atribuciones de dicho Consejo la administración de los recursos del Poder Judicial, pero justamente a través de la propia petición de cámaras y magistrados judiciales, la Cámara de Diputados se anoticia de la imposibilidad de continuar administrando, a través de la superintendencia los recursos, en caso de darle validez y vigencia a esa norma.

Entonces, hay un contrasentido. Es decir, los extremos fácticos sobre los cuales se

definió ese texto constitucional se pulverizaron con la crisis de 2001 y 2002: el bipartidismo, la alternancia, este escenario desde el punto de vista teórico lo estoy planteando, porque debería estar siendo discutido en la reforma constitucional. Pero bien me hubiera gustado que esta discusión que hoy tenemos sobre el Consejo de la Magistratura y sobre las causas de su inmovilidad y su crisis, junto con otra serie de crisis institucionales, se diese en el marco de la honestidad intelectual de un debate, donde dijéramos que lo que hoy está conmovido son esos presupuestos en donde dictamos la norma rectora, y esos presupuestos hoy no verifican. Por eso, las ingenierías que se hacen.

Pero ateniéndonos al texto estricto de la norma y a su relación con el ordenamiento constitucional nada de lo dicho fuera de la construcción mediática conmueve los presupuestos de validez constitucional.

El primero de ellos, el Consejo de la Magistratura, es un órgano de la Constitución, de modo que todos los consejeros que lo conforman son consejeros electos. Nuestro sistema constitucional es clarísimo en torno a cómo debe ser un sistema de elección de representantes públicos. La fuente del mandato se modifica por ley, que es atribución de este cuerpo, con la mayoría calificada que la Constitución establece. Mientras que al momento de la sanción de esta ley, es simplemente por elección de estamentos o corporaciones, y venimos en el marco de las atribuciones que nos son propias, a establecer que la elección debe ser en los términos de la armonía de los artículos 33, 34 y 38 de la Constitución. Es decir, electos por voluntad del pueblo, porque ese es el mandato que legitima con absoluta claridad y comienza a compensar ese profundo déficit de democratización que ese poder tiene y al cual no voy a hacer referencia, porque ha sido motivo de largo debate anterior.

Es decir, en vez de ser electo por una colegiación o por una asociación de magistrados cuyo reconocimiento es discutible y conversable, fundamentalmente porque no tiene rango constitucional, en función de esas atribuciones constitucionales establecemos que la fuente del mandato electoral de los consejeros es la totalidad del padrón electoral, o sea, 22 millones de electores al día de hoy, contra 300 magistrados de una lista ganadora, y 5000 abogados de otra lista ganadora. Simplemente, señores, en el ejercicio de las atribuciones y en la correcta interpretación del texto constitucional, planteamos esto. Esa expresión técnica de soberanía popular electoral es el padrón de electores nacional.

Por eso, señores, en la reforma se introduce el distrito único de igual manera a como se elige presidente y vicepresidente. La ley dice que en el momento en que se eligen presidente y vicepresidente, se procederá a la elección de los consejeros propuestos. ¿Qué significa esto? No me voy a extender, porque como ya dije, fue motivo de debate anterior. Toda fuerza política, todo partido político con capacidad –conforme a la armonía de nuestro sistema de legislación electoral– de presentar candidato a presidente y a vicepresidente, puede presentar candidatos a consejeros nacionales.

En nuestro sistema constitucional, para una elección en donde se postulan cargos electivos con jurisdicción nacional, la armonización de las normas establece con absoluta claridad la preeminencia del artículo 38 de la Constitución, que prevé que esa representación o ese monopolio de la representación lo tienen los partidos políticos.

Por eso, no agravia, no conmueve nuestro texto constitucional el hecho que se esté decidiendo que la propuesta a consulta electoral, el sometimiento al voto popular, se realice a través del mecanismo que la Constitución consagra para todos los supuestos de convocatoria del voto popular, a través de los partidos políticos, quienes tienen, por estructura constitucional, expresamente definida esa capacidad y representación.

Se trata de una elección de distrito único; ergo, estamos hablando del principio general de distrito único. Cualquier fuerza política, cualquier partido político con reconocimiento en cinco distritos presenta candidatos, lo cual contesta sobradamente las afirmaciones a la necesidad de otros requisitos superiores a la presentación de candidatos a presidente y a vicepresidente.

La autoridad de aplicación, Juzgado Federal de la Capital Federal con Competencia Electoral; tribunal de alzada, la Cámara Nacional Electoral.

La normativa aplicable es la que establece la ley: el Código Electoral Nacional, la ley 23.298, la ley 26.571; es decir, reforma política y ley orgánica de partidos políticos. Nada nuevo, ningún drama. La discusión en torno a su politización o no politización es materia altamente opinable. O sea, subsanar el déficit de origen democrático de un poder con la posibilidad que nuestra estructura constitucional no brinda en dar y mantener lo que con toda claridad la Constitución establece: que esas representaciones estamentarias, en vez de surgir de la elección corporativa, reducida, pequeña, surja del consenso y de la compulsa de la totalidad de los ciudadanos.

Esta cuestión manejada... Recuerdo falsedades sometidas –y no voy a imputar personalmente a nadie– para postular consejeros del Consejo de la Magistratura: se exige de las agrupaciones requisitos superiores que para postular candidato a presidente. Inexacto.

Los partidos políticos de alianza sólo pueden participar en la elección si están reconocidos en dieciocho distritos. Absolutamente inexacto.

La ley establece en una cláusula de alcance transitorio –atento la elección intermedia– un mecanismo de adhesión de boletas, que es otra cosa. No establece ni agrava ningún requisito a ninguna fuerza política para poder presentar candidatos a consejeros.

Vemos, entonces, el porqué de algo que podría ser motivo de discusión, opinable; ¿por qué tal número de consejeros?, ¿por qué no más?, ¿por qué no menos?, ¿por qué este sistema? Eso directamente ni se discutió. Directamente, el alarido fue: agravian, vienen por la Justicia; y de ahí el abroquelamiento dramático de todos estos actores.

Es más, algo que comienza a ser ya aburrido: ante cada debate parlamentario que se pierde, ante cada debate político que se pierde, ante cada votación que se pierde o ante cada elección que se pierde: vamos a ir a la justicia, la inconstitucionalidad; “viene la espada de Damocles que pende sobre los violadores seriales de la Constitución que, según el consejero Cimadevilla, somos nosotros.

¿Por qué esta reacción? Miraba el fallo de ayer, por ejemplo. Anunciaron avalanchas de demandas contra la ley de las medidas cautelares. En efecto, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal presentó una –y no voy a entrar en su riqueza o en su pobreza– que motivó el rechazo *in limine* de la acción declarativa de inconstitucionalidad y la entrada en autos. Las razones de la jueza son constantes y consecuentes con lo que ya ha establecido la Corte: casos concretos para discutir inconstitucionalidad, no abstractos.

Fundamentalmente, hay un párrafo que, a mi modo de ver, no tiene desperdicio, a fin de poder entender qué se está discutiendo, entre otras cosas, y por qué tanta conmoción y agravio.

Cuando la magistrada relata el libelo interpuesto por el presidente del Colegio dice que, además de dicha ley ha atribuido al Colegio la debida legitimación procesal para ejercer la acción pública. Resulta ineludible –dice el presidente del Colegio– que asuma la defensa de los profesionales cuando se encuentran amenazados en sus legítimos derechos,

ya que si se aplicara plenamente la norma impugnada, los abogados matriculados en el Colegio Público se verían imposibilitados de ofrecerles a sus clientes un servicio jurídico que antes podían ofrecer en toda su dimensión y eficacia: el de presentar y obtener medidas cautelares contra el Estado nacional. Esto lo dice el presidente del Colegio Público de Abogados. Dice también que evidentemente la ley en crisis ataca el interés del abogado como trabajador. ¡Está claro!

¡Ante la denuncia que hiciera la señora presidenta del montaje de una industria de juicios con las medidas cautelares, por un lado...!, porque las complicidades económicas y políticas se articulan en un ir y venir. Es decir, no es casualidad que los mismos que son serviciales a los intereses oligopólicos, por otro lado tengan los negocios de las medidas cautelares en connivencia con los estudios jurídicos, porque una cosa va tomada de la mano con la otra.

Entonces, es evidente que hay una industria floreciente que es obtener a través de medidas cautelares, dejándolas morir en el tiempo, toda la serie de cuestiones que ya han sido denunciadas y que, si bien escapan al tema del Consejo de la Magistratura, tienen que ver con cuál es el marco de conflicto en el que hablamos de estas cuestiones.

La segunda cuestión: el agravio de las fuerzas políticas por cuanto no podían ni entendían que la norma era proscriptiva. ¡Si sabremos de proscripciones en el peronismo! ¡Y sabremos también del acompañamiento que el resto de las fuerzas políticas hicieron durante dieciocho años a lo que era la causa de expresión del voto popular!

Hay otro tema que se introduce casualmente ante la meridiana claridad del artículo 114 que dice que corresponde al Consejo de la Magistratura la administración del presupuesto, de los recursos del Poder Judicial. La Cámara de Diputados introduce una serie de correcciones y modificaciones que comienzan en el artículo 1°.

La primera parte del artículo 1° permanece igual. En la segunda parte, permítaseme leer señor presidente: Tiene a su cargo seleccionar mediante concursos públicos postulantes a las magistraturas inferiores a través de la emisión de propuestas en ternas vinculantes, administrar los recursos que le corresponden al Consejo –acá se marca la diferencia–, de conformidad con la ley 11.672 permanente de presupuesto de la Nación, con la ley 24.156 de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional y con la ley 23.853 de autarquía judicial; y sus leyes complementarias, modificatorias y vinculantes, y ejecutar el presupuesto que la ley le asigne a su servicio administrativo financiero.

Por lo tanto, la presente reforma no recorta las facultades de administración y de independencia de la Corte Suprema de Justicia obtenidas mediante leyes especiales y acordadas, dictadas en función del entendimiento –que podríamos discutir largo y tendido– de que esas atribuciones hacen a la eficaz prestación del servicio de justicia.

Por lo tanto, se mantiene, y leo punto por punto: el Consejo de la Magistratura toma conocimiento –lo mismo vigente hasta antes de la sanción– del anteproyecto anual del Poder Judicial y realiza las observaciones estimadas como pertinentes para que la Corte las considere. Es decir que la revisión del anteproyecto del presupuesto es realizada por la Corte Suprema. Segundo. La Corte prepara el Presupuesto del Poder Judicial de la Nación y lo remite al Ejecutivo. Tercero. El presidente de la Corte conserva las facultades para reajustar las partidas presupuestarias, debiendo comunicarlo al Jefe de Gabinete. Cuarto. La Corte Suprema está facultada para reestructurar o hacer compensaciones dentro de la suma total del presupuesto, también puede pedir anticipo de fondos. Quinto. La Corte Suprema conserva las facultades para establecer aranceles, disponer de su patrimonio y determinar el

régimen de percepción, administración y contralor de sus recursos, y ejecución. Sexto. La Corte conserva la facultad para cubrir los cargos de secretario y el personal auxiliar de los tribunales nacionales, mediante la redistribución o traslado de los agentes que se desempeñan en cualquiera de los fueros, etcétera. La Corte también mantiene la facultad de fijar la dotación de personal. Las reglamentaciones en materia de administración financiera son realizadas por la Corte y el Poder Judicial de la Nación.

Ahora, ¿qué es lo que sigue? Cabe aclarar, no se modifica la Ley de Autarquía Financiera. El artículo 2° de la ley 23.853 permanece intacto. Cuando los recursos asignados superan las partidas presupuestarias, la Corte conserva la facultad de utilizarlas en los restantes programas y actividades, etcétera. Entonces, ¿qué cambia? El Consejo va a tener las facultades, por un lado, de dotar, de fijar las dotaciones de su personal, adjudicar la cantidad de cargos y categorías, fijar los procedimientos para habilitar y cubrir los nuevos cargos, habilitar dichos cargos. Estas facultades son propias de un órgano con autarquía financiera. Hasta el momento, el Consejo dependía de la Corte, de un sistema perverso, donde hasta las horas extras debían ser aprobadas por la Corte.

El Consejo tendrá a su cargo la Superintendencia de su personal, el resto queda en manos de la Corte. Y se dispone expresamente, en esto sí es lo que la ley introduce, el control externo, que debe adecuarse al artículo 85 de la Constitución. O sea que la intervención del Congreso es sobre la base de los dictámenes de la Auditoría General de la Nación, lo cual favorece un control democrático de la administración del Poder Judicial de la Nación.

En conclusión, no se le asigna más poder administrativo de Superintendencia a la Corte que el que ha mantenido y que está vigente. Y sí se restablecen las atribuciones del Consejo para su propia y eficaz administración.

Es decir, esta es la gravedad, este es el huevo de la serpiente que desvela, que asusta: simplemente el establecimiento de un sistema electoral coherente para elegir, con el único resorte que determina la soberanía popular, que es el voto, a los señores consejeros y, fundamentalmente, la modificación introducida por la Cámara de Diputados en torno al pedido efectuado por los presidentes de cámaras, y elevado por la Corte al presidente de la Cámara, en cuanto a que quitar la administración de los recursos a la Corte implicaba someter a una grave crisis el sistema judicial.

Esto, vuelvo a decir, nos lleva a la consideración, por lo menos personal, de la necesidad de rever con un sentido crítico, acorde a los tiempos, a las demandas de nuestro pueblo, que eclosionan en una crisis terminal como la que hemos vivido, demandas para las cuales son necesarias respuestas de cara a esa sociedad. Y esa es la discusión, entonces, de cómo generar esa ingeniería legal que preserve, como elemento central, conductivo, en la etapa histórica que nuestro pueblo atraviesa, la protección del trabajo; el entendimiento de que tanto la producción como la cultura y el conjunto de interrelaciones que la Nación espera de sus miembros, estén edificadas alrededor de un concepto constructivo y abarcativo de trabajo dignificante y no de un concepto de garantía únicamente de renta.

Desgraciadamente, estas cuestiones nunca se resuelven a partir del debate o de la inteligencia. No existe, en la historia de la humanidad un solo derecho, una sola concesión de los poderosos que haya sido objeto de la reflexión de los sabios. La obtención de los derechos se logra a través de la constante lucha popular. Esto es fundamentalmente el entendimiento. Está en nuestra inteligencia y en nuestra capacidad entender, visualizar y percibir el momento en que esos sectores populares demandan un camino sin retroceso en torno a consolidar aquello que llamamos la década ganada, cómo se aseguran en una

estructura político institucional, y en el sinceramiento del debate. Vienen elecciones. Qué mejor oportunidad para cotejar, sin locura, sin dramatismo, para que las distintas fuerzas políticas nos planteen qué van a hacer con la Asignación Universal por Hijo; que nos planteen si quieren devaluar y que le expliquen a la gente qué implica devaluar en su poder adquisitivo diario; que se explique lo que implica devaluar para quienes sacan la ganancia en la renta; que se explique eso, alguna vez; que se pongan de cara a la sociedad a discutirlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver al sistema privado de jubilaciones? ¿Vamos a hacer quebrar, como se pedía en este mismo Congreso, a Aerolíneas Argentinas para favorecer a líneas aéreas de otra bandera? Respecto de todo ese conjunto de medidas, quiero recordar lo difícil que fue ser acompañado en cada una de ellas.

Entonces, hace a nuestra propia dignidad, a nuestra propia capacidad y, fundamentalmente, al poder contener a nuestras propias bestias, que enfrente haya también propuestas alternativas de calidad. Creo que este es el punto central del debate democrático, y justamente en ese debate democrático es que hoy viene al recinto, para su revisión, una propuesta que forma parte de un paquete de medidas que no garantizan, de por sí, nada; pero que sin ellas es imposible comenzar el camino de democratización de un poder que, históricamente, en la Argentina, ha sido funcional a cuanta dictadura o interés económico concentrado hubo. Y eso lo sabemos todos, con las honrosas excepciones de magistrados y funcionarios. Lo sabemos todos. Basta ver la conducta seguida a partir del año 30, cuando se inauguran los golpes de Estado en nuestro país, que también hemos padecidos las fuerzas centenarias.

Llama la atención que no podamos encontrar, sobre la base, la propia percepción histórica, un hilo conductor de cuáles son los elementos que nos llevan a esto. Es decir, ese poder concentrado, funcional, contrario a toda expansión de derechos y garantías, salvo con la venia previa de los poderosos, es lo que hoy estamos discutiendo.

¡No está en peligro la República! El vaso de agua con la dentadura de abuelita y las cajas de caudales van a seguir estando donde están, no correrán riesgos. Por eso, señor presidente, nuestro bloque va acompañar la propuesta de reforma con las modificaciones que remitiera la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente. – Senadores Sanz y Morales.

Sr. Sanz. – Vamos a compartir con el senador Morales la condición de miembros informantes de nuestro bloque.

Debo decir que el senador preopinante tiene siempre la virtud de hacerme dejar en segundo lugar las cosas que traía, algunas anotadas y otras en la cabeza, porque inteligentemente –le reconozco eso y, además, su sólida formación política– nos propone debates que nos acomodan a esa situación.

Él se queja permanentemente de no encontrar en las fuerzas populares, nacionales, tradicionales, históricas –obviamente, imagínese, quién recibe esa frase somos nosotros– la interlocución válida para introducirse en el debate que él propone como un debate ideológico, un debate profundo. Se queja, incluso en todo este tránsito de veinte días o un mes, quizás, que lleva la discusión de la reforma, de que él no ha encontrado esa profundidad. Y, aunque lo hago con absoluto respeto porque quiero que se me interprete así, voy a tratar de englobar la respuesta en una anécdota. Alguna vez la dije acá, hace muchos años.

Cuando recién me había recibido de abogado, llegué al estudio jurídico de mis padres –padre y madre abogados–, muy viejo el estudio, con todas las ínfulas de abogado. Mi padre me tiró el primer caso, un expediente de un accidente de tránsito, común, de los

sencillos, de los que ocurren en los pueblos –en ese caso, en mi San Rafael–, y me dijo: “Tomá, estudialo, te doy dos días.” Y yo, durante dos días, me encerré en la biblioteca y bajé todo lo que había: libros, doctrina, jurisprudencia, absolutamente todo. Era una parva ya que se trataba de mi prueba de fuego. A los dos días mi padre me llama a su despacho y me dice: “Bueno, ¿y?”. Y yo llevaba una carretilla de cosas. Después que hablé y dije todas las cosas y traté de convencerlo de lo que decían los grandes iluminados del Derecho, mi padre me miró y me dijo: “En ese choque ¿quién venía por la derecha?” Jamás aprendí más en la vida jurídica que aquel día con ese cachetazo.

¿Por qué traigo esto a colación? Cuando desde el oficialismo se nos reta al debate político introduciendo cuestiones que son profundas, y cómo no va a ser profunda la lucha contra los poderosos, cómo no va a ser profunda la lucha contra los que concentran poder, cómo no va a ser profunda la lucha contra la desigualdad, que con lo que ha pasado en el país tiene una profunda ruptura en su tejido social; cómo no va a ser profunda la lucha por el origen mismo de los partidos nacionales y populares independientemente de cómo nos haya ido, sean cuestiones electorales o de gestión vinculadas a nuestro partido. Ahora, la verdad, yo no voy a recoger el guante de caer en la trampa de que estamos frente a un debate para luchar contra los poderosos, para mejorar la justicia, para hacerla más eficiente, para acercarla al ciudadano común, para hacerla más transparente y para solidificar el concepto de una democracia progresista y republicana. No voy a caer en eso. Y como me dijo mi viejo alguna vez ¿quién venía por la derecha?, le voy a contestar al senador preopinante que para nosotros hoy, al final del debate en el Senado, la iniciativa en consideración tiene el mismo concepto que tenía desde el minuto cero. Es el avance de un gobierno que está acorralado, temeroso, desorientado. Es un avance de un gobierno contra el único bastión que todavía no ha podido dominar en el aspecto institucional de la Argentina.

El Consejo de la Magistratura, que por obra y gracia de este partido popular, nacional, centenario y democrático, y haciendo uso de una ley que el propio oficialismo reformara en el año 2005 colocando un sistema de vetos –vetos de dos tercios sobre trece que algunas veces ha favorecido al gobierno a fin de proteger a jueces que deberían estar afuera de la Justicia–, en este caso, en los últimos tiempos, mediante esos cinco consejeros le han impedido avanzar al gobierno en los caprichos de elegir a los jueces que quiere que sean designados. Ese es todo el tema. Eso es ¿quién venía por la derecha?

Si hoy, el actual gobierno, y lo digo con todas las letras al final del debate, tal como lo dijimos desde el primer momento, manejara a voluntad el Consejo de la Magistratura y si tuviera, como en los 90, una Corte adicta, no hubiera existido ni democratización, ni seis proyectos, ni debate ni todo el desafío intelectual, político y de fondo al que el señor senador Fuentes nos invita. Nos quedamos con ¿quién viene por la derecha? Nos quedamos con la verdadera intención. Y la verdadera intención, por más que la quieran ocultar con el ropaje ideológico y de la modernización, es ir por el Consejo para elegir los jueces que se les antoje y para destituir a los jueces que no les guste. Esta es la verdad. Y de paso, se va por la Corte. De paso, se le coloca debajo a las cámaras de casación y, de paso, se hacen todas las cosas.

Me hubiera gustado, porque eso sí hubiese sido parte del debate, que abordaran políticamente qué pasó en la Cámara de Diputados. Porque todavía resuenan en estas paredes las cosas que dijeron en el debate original para justificar quitarle a la Corte Suprema la administración de los recursos. Figuran en la versión taquígráfica. Y ahora no nos conformamos con que vengan y nos lean textualmente las cosas que se reformaron en

la Cámara de Diputados. Merecemos una explicación política. Yo requiero una explicación política. ¿Qué pasó con la Corte? ¿Qué pasó con los presidentes de las Cámaras? Los que antes no podían administrar ni un peso porque solamente se tenían que dedicar a juzgar los expedientes, ¿ahora sí pueden administrar su presupuesto? Voy a parar ahí ya que del tema hablará con propiedad el señor senador Morales, quien se referirá, además, a la verdadera intención del gobierno, lo que pasó en la Cámara de Diputados y lo que se encuentra verdaderamente escrito.

Pero, igualmente lo digo. Me hubiera gustado que alguien me explicara políticamente qué pasó. ¿Se encontraron con una corporación más poderosa que la del gobierno? No sé. La verdad es que me hubiera gustado que alguien me explicara eso, y seguramente alguien lo haga en el transcurso del debate.

El senador preopinante se queja del déficit que encuentra en nosotros y en el debate con la oposición. Pero yo me quejo de que permanentemente intenten disfrazar la realidad, y que intenten hacerlo con un ropaje ideológico cuando hay otras cosas en el medio. No pueden seguir hablando solamente de las bondades de la elección popular, porque la reforma no trata de las bondades de la elección popular de los consejeros y de la discusión constitucional de si está previsto en el artículo 114 o no lo está. Por supuesto que lo vamos a seguir discutiendo ya que tenemos opiniones diferentes, y por supuesto que el corazón de lo que luego será el análisis constitucional que, por otra parte, no sé si será poco o mucho, pero desde nuestro partido vamos a hacer una sola presentación que nos cabe y nos corresponde, y a la que tenemos todo el derecho del mundo, ya que creemos que, luego de haber dado el debate en el Congreso, tenemos la vía, como corresponde en un Estado de derecho, de ir a discutir la constitucionalidad en la Justicia.

Pero lo que quiero decir es que no se refugien solamente en el tema de la elección porque, además de ello, hay un combo de tres componentes.

El primer componente es el número de miembros. Y yo entiendo que no quieran hablar de esto, porque es una contradicción enorme. Hace seis años, la entonces senadora, hoy presidenta de la Nación, decía que el Estado era elefantiásico y había que bajarlo, y ahora, que no es más senadora, dice que hay que subirlo. Entonces, una vez se baja y otra se sube. Pero, ¿cuál es el elemento? El número...

Sr. Presidente. – El senador Fuentes le solicita una interrupción, ¿la concede?

Sr. Sanz. – Sí.

Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fuentes.

Sr. Fuentes. – Señor presidente: quería explicarle que esos temas no fueron abordados porque se trataron en la sesión pasada.

El informe se reduce a las modificaciones introducidas por la Cámara revisora.

Y abusando de su amabilidad, le quería decir que no ha explicado quién venía por la derecha. (*Risas.*)

Sra. Montero. – ¡Usted! Usted en todo sentido viene por la derecha.

Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Sanz. – Esto es como en las películas. No cambie el canal que al final aparece el muchacho. (*Risas.*)

En una de esas, quizá no lo definamos en este debate. Tal vez, mañana, cuando asistan los miembros del equipo económico, empecemos a dilucidar quién viene por la derecha.

Sigo. El tema del número, aisladamente, tampoco tiene entidad. El tema del número juega con el de la elección y la forma de elección y, fundamentalmente, con el tercer

elemento del combo, del que tampoco se dice nada.

El señor senador Fuentes dice que no se hace mención a él porque ya fue debatido. Pero en su exposición como miembro informante hizo referencia a muchas cosas que ya fueron habladas. Pero no importa. Traigo las cosas a debate.

Son tres elementos que, en conjunto y de manera integrada –el número de miembros, la forma de elección y la mayoría, que es pasar de dos tercios a mitad más uno de la totalidad de los miembros–, definen la discusión. Eso es lo que en el fondo se discute. Se han cambiado las reglas del juego. Se han cambiado las reglas por las que se manejaba el Consejo y, fruto de esos tres elementos tomados en conjunto, quien gana la elección va a manejar absolutamente el proceso de selección y de destitución de jueces.

Hoy quiero incorporar un análisis que no fue mencionado la otra vez porque en el debate público hablamos de la importancia o de la gravedad que significaba para un gobierno, sea este o cualquier otro, estar al principio de la ventanilla en la selección de jueces y al final de la ventanilla en la destitución de jueces. Pero yo quiero hablar de otra cosa. Quiero hablar de la importancia que implica tener la mayoría para destituir a un juez en el medio; en el proceso medio. Es decir, cuando ya está seleccionado el juez y cuando no hay denuncias o causas para la destitución. Es decir, cuando ese juez no está con un expediente armado en el Consejo de la Magistratura. Yo quiero hablar de ese período intermedio. Ese es el más grave de los momentos, y eso es lo más grave que tiene esta reforma.

El gobierno sabe –como sabemos todos, y esto no es una cosa grata para reconocer– que si hay una condición que tiene la Justicia argentina –los jueces argentinos– es la de ser temerosa. No lo digo con alegría. La verdad es que a mí me gustaría tener jueces y un sistema judicial valiente, corajudo, pero el sistema judicial en la Argentina es temeroso, y hasta les diría que conservador. Digo “conservador” no en términos ideológicos sino en términos de conservar la quintita, el puesto, que es casi una condición que tienen los jueces que quizás haya que comprenderla desde la psicología, porque hay gente que dedica a eso toda su vida y –respetablemente– no tienen la posibilidad de estar pensando todos los días que se van a ir de ahí y que van a ir a trabajar como abogados de una empresa o que van a abrir un estudio; además, es gente que quemó las naves, y hay que comprenderlo desde ese punto de vista. Lo digo con respeto. Convengamos que al final del camino esa es la concepción: es una concepción temerosa y conservadora de su propia situación, quizá por esta situación la ley ha sido sabia y la Constitución les ha dado la garantía de la estabilidad.

Pero, claro, si ahora sumado a esa condición temerosa y conservadora –vista desde el buen sentido– va a haber un gobierno que con una mayoría simple, con una mayoría de la mitad más uno –que la obtiene, obviamente, después de que juegan los tres factores: el número de miembros, la forma de la elección y el cambio de la mayoría– los va a tener todos los días a tiro de destitución, estamos ante un problema. Ese es el problema. Esa es la lesión. Ahí está el que, en la anécdota de mi padre, venía por la derecha.

Sr. Pichetto. – Solicito una interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente. – ¿Autoriza la interrupción, señor senador?

Sr. Sanz. – Sí; hoy estoy generoso.

Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – A tiro de acusación, senador, que no es destitución.

Sr. Sanz. – ¡Sí!

Sr. Pichetto. – No es destitución.

El artículo 115 de la Constitución no ha sido modificado, y el Jury de

Enjuiciamiento requiere de mayorías especiales para destituir a un magistrado.

Además, esto responde a toda la doctrina del derecho público provincial, en donde la mayoría de los consejos de la magistratura no requieren mayoría especial para acusar, y en muchos consejos de la magistratura hasta destituyen por simple mayoría.

Esta es la historia de esta institución en el marco del derecho público provincial en muchas provincias, incluida la mía, en donde el Consejo de la Magistratura es acusador por simple mayoría y también destituye por simple mayoría, no requiere mayoría agravada. Por lo tanto, es una materia opinable.

Por lo tanto –y con esto termino–, yo creo que no se cae la Justicia, que esos jueces en la destitución del Jury tienen el recurso de revisión ante la Corte y que van a seguir funcionando los tribunales. La verdad que yo desdramatizo este debate.

El otro día lo escuché a Bossert, un hombre que respeto, y la verdad es que sinceramente plantea una desorbitancia extraordinaria, como creer que se cae el sistema.

Yo también estoy convencido –y esto lo voy a decir en el debate final– de que no vamos a controlar a ningún juez con esto, porque los jueces cuando asumen son independientes, vengan de la afiliación política que vengan. Estoy convencido de eso. Y, además, a lo mejor tienen cierta permeabilidad con los cambios y los procesos políticos, pero actúan con mucha autonomía.

Crear que uno pone a un juez y después va a tener dependiente a ese juez es una ficción; yo no lo creo, como tampoco creo que esta institución funcione bien en la Argentina, porque este es un cuerpo extraño.

Le agradezco mucho por permitirme la interrupción, senador Sanz.

Sr. Presidente.– Continúa en uso de la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Sanz.– Desconocer que un juez pierde su condición de estabilidad y de tranquilidad solamente cuando se sienta en el banquillo de acusados de un proceso de acusación, al final, es desconocer cómo funciona la Justicia.

A un juez, con un simple expediente de denuncia en el Consejo de la Magistratura – porque hoy funciona así–, ya lo hicieron salir del eje y del centro, porque se tiene que ocupar de cosas para las cuales no está preparado. No está preparado para defenderse a sí mismo, no está preparado para vivir litigando para defender su fuero; está preparado para investigar expedientes, analizarlos y definir cosas de otros.

Cuando a un juez se lo tiene, como lo tienen hoy en muchos casos... Esto se llama en la jerga tener a los jueces “en la parrilla”. No estoy hablando en arameo. Una cosa es tener a un juez “en la parrilla”, que es hacerle una denuncia en el Consejo de la Magistratura actual, que está equilibrado y, por lo tanto, para poder destituirlo se necesitan los dos tercios de trece, y otra cosa es abrirle un expediente, tenerlo “en la parrilla” y después, al final del camino, con la mitad más uno, pasarlo a la última etapa de la acusación.

Desde luego que hay que pasar por la etapa de la acusación y en esa etapa se verá, pero en el medio ¿quién se hace cargo de toda esta lesión al principio de la independencia que también está lesionado? De esto estoy hablando.

Si quieren abstraiganse de que esto lo hago con el dedo acusador al kirchnerismo, pongamos que el kirchnerismo está en otro rol y que otro partido político gobierna en la Argentina: es lo mismo, porque que un gobierno pueda someter en el proceso intermedio a un juez a que con la simple mayoría lo pueda manejar, ese gobierno le puede decir “Investigá a aquel opositor”, “Perseguí a tal opositor”, “Fallás de esta manera, porque si no lo hacés te voy a mandar a la acusación”. Esto es lo que lesiona el principio de

independencia.

Esta es la realidad de lo que pasa. Me podrán disfrazar esto con ropaje ideológico y me lo podrán decir de miles de maneras, pero en el fondo esto es lo que estamos discutiendo en la Argentina: si un gobierno, este o cualquiera, va a tener la posibilidad de modificar el principio de estabilidad e independencia de los jueces con una simple mayoría. Punto. No estamos discutiendo otra cosa.

Yo también quiero decir que en el vicio está la virtud en el futuro; que tengan cuidado. El oficialismo está introduciendo algo que algunos ya estamos empezando a discutir, por lo menos como una teoría que quizá pueda parecer descabellada: el tema de la cosa juzgada írrita. La cosa juzgada írrita –sobre lo que alguna vez hemos discutido– significa que cuando una causa se cierra no se puede reabrir porque tiene valor de cosa juzgada, salvo cuando se demuestre que ha habido vicios en la conformación de esa decisión que determinen que eso se deba abrir.

Más allá de si se declara la inconstitucionalidad, supongamos que la ley quede firme, cuando ustedes están haciendo una ley a través de la cual el gobierno somete a los jueces a una situación de pérdida de independencia, cualquier fallo de esos jueces podrá ser observado en el futuro por el principio de la cosa juzgada írrita.

Y si alguno en este gobierno piensa que en los dos años que faltan para 2015 esta ley les va a venir bien para cerrar causas penales –porque creo que alguno tiene esa intención, por eso los apuros, por eso elegir ahora, por eso hacer un cuerpo de 20 y pico de miembros provisorios hasta que venza el mandato y por eso tantas cosas– que sepa que muchos de nosotros de este lado estamos pensando en el principio de la cosa juzgada írrita, que significa que no vamos a permitir que haya pronunciamientos judiciales que liberen de responsabilidad penal o patrimonial a funcionarios públicos en el marco de causas por corrupción.

Así que, presidente, voy a dejarle al senador Morales lo que le queda, y perdón por si me extendí.

Lo que ocurrió desde el origen de la presentación de este paquete hasta ahora es todo en contra del gobierno. El gobierno se mantuvo inalterable en lo que genera irritabilidad en la sociedad, y generó que la sociedad en general se pusiese en la vereda de enfrente.

La sociedad hoy está enterada y movilizada de una intencionalidad que tiene el gobierno.

Hay un fuerte rechazo hacia adentro del país, y se sumaron rechazos desde afuera. No voy a meterme en el tema de la relatora de las Naciones Unidas, pero creo que es un dato objetivo de la realidad. Los mismos relatores de Naciones Unidas a los que cuando vienen al país a hablar bien de la Ley de Medios el gobierno se encarga de ponerlos en el centro del escenario son los relatores de Naciones Unidas que cuando hablan mal de esta ley el gobierno los tira debajo del tren y dice que son de lo peor. Bueno, esta es una abogada que si viviera en la Argentina sería Zaffaroni. Lean el perfil de la abogada de Naciones Unidas, de la brasileña, y verán que sería Zaffaroni. Tiene el perfil de Zaffaroni pero es brasileña, y gracias a eso y a sus cualidades es relatora de Naciones Unidas. Pero, claro, les interesa más el que viene a hablar bien de la Ley de Medios que el que habla mal del sistema de la Justicia; entonces, al que habla de la Ley de Medios lo levantan por las nubes y a la relatora la bajan. Pónganse de acuerdo: las Naciones Unidas son buenas para todo o son malas para todo, pero no pueden ser buenas cuando nos elogian y malas cuando nos critican. También se van a llevar esa mácula en el exterior y, por supuesto, no nos van

a convencer de que las modificaciones tienen que ver con una buena administración de los recursos –esto lo va a decir el señor senador Morales– y, mucho menos, de que las reformas electorales son en beneficio de la transparencia y demás.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: en cuanto a que no hay ninguna modificación de las mayorías voy a recordar el inciso 7) del artículo 7° de la ley vigente, que establece lo siguiente: “Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados –previo dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación–, formular la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento, y ordenar después, en su caso, la suspensión del magistrado, siempre que la misma se ejerza en forma posterior a la acusación del imputado. A tales fines se requerirá una mayoría de dos tercios de miembros presentes.”. Este es el texto actual, mientras que el texto que se introduce en la modificación, y que ahora figura como inciso 15) del artículo 7° –que se modifica– determina la mayoría absoluta de los miembros del Consejo de la Magistratura. Dice así: “Decidir la apertura del procedimiento de remoción de jueces titulares, subrogantes y jubilados convocados de acuerdo al artículo 16 de la ley 24.018, previo dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación, formular la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento, y ordenar, en su caso, la suspensión del magistrado. A tales fines se requerirá una mayoría absoluta del total de los miembros.”. O sea que hay una modificación puntual en cuanto al tema de las mayorías que pone en un grado de desigualdad a los jueces, toda vez que los artículos 53 y 59 de la Constitución establecen que para el juicio político –tanto en la Cámara de Diputados, que es quien tiene que sostener la investigación y la acusación, como en el Senado para el juzgamiento– se requieren, desde el presidente para abajo –para todos los funcionarios sometidos a juicio político, incluso los jueces de la Corte–, dos tercios de los votos. Dejo esto aclarado.

Puntualmente, señor presidente, quiero destacar dos temas centrales que ha introducido la Cámara de Diputados que son un franco retroceso respecto de lo que ya habíamos planteado y que claramente ha planteado el señor senador Sanz en términos generales y precisos respecto de las cuestiones de inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura. Uno de ellos tiene que ver con el sistema de elección. Aquí, el miembro informante ha dicho que no es verdad que se modifica la cuestión de los requerimientos y ha hecho objeciones a nuestro planteo de proscripción en la modificación que introdujo la Cámara de Diputados.

A tal efecto, quiero leer el texto de la modificación que se hizo allí para que veamos de qué modo genera realmente una restricción y va a generar la proscripción de la participación de distintas fuerzas políticas. El agregado dice así: “La oficialización de listas de candidatos a consejeros del Consejo de la Magistratura para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, y para las elecciones generales, podrá hacerse en esta oportunidad, por cualquier partido, confederación o alianza de orden nacional.”. Para esto, cualquier partido o alianza que tenga el carácter de fuerza política nacional se define dentro del artículo 8° de la ley de partidos políticos 23.298. Precisamente, el artículo 8° dice que como requisito para que estas fuerzas políticas sean reconocidas como nacionales o alianzas y puedan presentar listas de candidatos a consejeros requieren lo siguiente: “Los partidos de distrito reconocidos y que resolvieran actuar en cinco o más distritos con el mismo nombre, declaración, de principios, programa o bases de acción política, carta orgánica, como partido nacional deberán solicitar su reconocimiento en tal carácter.”. O sea que hasta ahí, hasta ese punto, se requiere de cinco distritos para ser reconocidos como fuerzas políticas

nacionales. Pero después sigue este mismo tema con la cuestión de las adhesiones: acá está la cuestión proscripción y el mero cálculo de la jugada corta que desnuda esta intención de la que hablaba el señor senador cuando preguntaba quién viene por la derecha. Bueno, vienen con todo esto, con todo este bagaje de trampas en el marco de las reglas de juego electorales que no se pueden aceptar. Por eso la Constitución establece que debe haber una mayoría absoluta y un consenso mínimo entre las fuerzas políticas para aprobar un Código Electoral y cuáles son las reglas a las que se deben someter las fuerzas políticas. No es solamente lo que quiera el Frente para la Victoria.

En el párrafo siguiente se dice lo siguiente: “A los fines de la adhesión de los cuerpos de boleta de la categoría de consejeros del Consejo de la Magistratura con la de legisladores nacionales en cada distrito, se requiere la comprobación de la existencia de que en al menos 18 de 24 distritos, la mencionada adhesión se realiza exclusivamente con agrupaciones de idéntica denominación.”.

Es decir, por un lado le permiten pedir la personería y presentar fórmula de candidatos a consejeros con cinco distritos, pero por otro lado dicen que podrán adherir a la boleta de legisladores nacionales en esta elección —que no es de distrito único, sino que es territorial y de distribución provincial— sólo si se llaman de la misma manera el partido nacional, alianza o fuerza política en 18 provincias. Aquí se da la cuestión de proscripción y la incorporación antidemocrática que produce la Cámara de Diputados. Esto es porque la única fuerza política que se ha presentado como tal —o sea, como alianza— en 21 de las 24 provincias es el Frente para la Victoria. Inclusive nosotros, que tenemos reconocimiento en las 24 provincias como Unión Cívica Radical, tampoco nos presentamos como radicalismo en todas, sino que nos presentamos en 13 distritos o provincias como Unión Cívica Radical, en 7 como Udeso y en las restantes con distintos frentes. Precisamente, la resolución del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical le ha dado libertad de acción a los distritos para constituir los frentes electorales con las fuerzas políticas con las que tengan mayor afinidad ideológica en todas las provincias del país, por lo que hay una intromisión en las decisiones estratégicas de las fuerzas políticas nacionales que es restrictiva, antidemocrática y de proscripción. Esto es lo que dice, textualmente, la incorporación al artículo 33. Es decir, un avance más, una vuelta de tuerca más, en la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para tratar de ser la única fuerza política absoluta que presente candidatos en el Consejo de la Magistratura.

El otro cambio lo advertimos aquí cuando les pedimos que no le sacaran la Superintendencia a la Corte porque eso es terminar con el principio de independencia de los poderes. Justamente, la independencia del Poder Judicial está sostenida también en su principio de autarquía como poder del Estado, que tiene larga data y que está fundamentalmente sostenida en la ley 23.853, que es la columna vertebral de la autarquía del Poder Judicial y que lo saca de ser considerado dentro de la ley 24.156 de administración financiera como organismo centralizado descentralizado. Y lo que han hecho en la reforma de la Cámara de Diputados es devolverle la Superintendencia pero quitándole la autarquía. Tratan al Poder Judicial y a la Corte como organismos centralizados descentralizados. ¿Por qué hacen esto? ¿A través de qué mecanismo lo hacen? Por medio de un agregado en el artículo 14, que modifica el artículo 18 de la ley del Consejo de la Magistratura, cuando en el inciso a) señalan: “Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial de conformidad con lo dispuesto en la ley 23.853, de autarquía judicial y la ley 24.156 de administración financiera...”, en lo que corresponda su aplicación no en todos sus términos, porque establece un marco normativo que no le es

aplicable al Poder Judicial; no es asimilable a un organismo centralizado descentralizado; no le es aplicable, por ejemplo, el artículo 80, que es el de la cuenta unificada: no puede "manotearle" fondos el Tesoro de la Nación al Poder Judicial.

Pero también hace una remisión al decir "...y elevarlo a consideración de su presidente, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la ley 24.937 y sus modificatorias.". Es decir, el artículo 1° de esta misma ley.

¿Y qué modificación le introdujeron al artículo 1°? En el segundo párrafo dice que el Consejo de la Magistratura "tiene a su cargo seleccionar mediante concursos públicos postulantes a las magistraturas inferiores a través de la emisión de propuestas en ternas vinculantes, administrar los recursos que le corresponden de conformidad con la Ley 11.672". No es de aplicación la ley 11.672 para el Consejo de la Magistratura y, menos, para el Poder Judicial. Lo único que es de aplicación para el Poder Judicial de esta ley es su artículo 5°, que es el único al que se hace referencia; y exime al Poder Judicial de la aplicación de otros artículos de la ley 11.672.

Por lo tanto, el texto que tendría que haber sido escrito acá es el del artículo 5° de la ley 11.672. Al incluir todo el texto de dicha ley, le va a ser aplicable al Poder Judicial, por ejemplo, el artículo 7°, que claramente ha excluido la ley 23.853.

El artículo 7° de la ley 11.672 dice: "Deróganse en sus partes pertinentes las normas que crean, facultan o establecen el funcionamiento de fondos de reserva, economías de inversión o similares, constituidos con saldos de créditos no comprometidos al finalizar el ejercicio y/o ejercicios anteriores, excepto las correspondientes al Poder Legislativo Nacional y a las universidades nacionales". Este artículo exime sólo al Poder Legislativo y a las universidades nacionales; no exime al Poder Judicial. El Poder Judicial es eximido en la ley 23.853 –Ley de Autarquía Judicial–, que es el corazón de la independencia del Poder Judicial.

Al hacerle aplicable el artículo 7°, señor presidente, van a poder tomar los saldos del Poder Judicial. El Poder Judicial ha venido generando ahorros. Porque, como las provincias argentinas, tiene un sistema de cuotas por goteo, que se le va depositando todos los días. Nadie puede tocar esos recursos, que son de fuente de asignación específica, y que no lo puede tocar el Tesoro y no lo puede tocar la administración del Estado, el Poder Ejecutivo.

El Poder Judicial ha generado ahorros: en el año 2009, 523 millones de pesos; en el año 2010, 780 millones; en el año 2011, 832 millones; en el año 2012, 1100 millones; y este año ya va por los 200 millones. Tiene acumulados, sólo en estos años, 3.600 millones. Tiene una acumulación de fondos de reserva de 5.400 millones, para la construcción de la ciudad judicial y para las obras, tal como se lo permite una ley de presupuesto que ha modificado la ley 11.672. Dicho sea de paso, está mal que esto se haga en las leyes de presupuesto, porque las leyes anuales de presupuesto no pueden modificar una ley permanente. Pero el artículo 50 de la ley 25.064, que es la ley de presupuesto del año 1999, establece lo siguiente: "Los recursos específicos enumerados en el presente artículo, financiarán el crédito presupuestario que se asigne anualmente al Programa 21 –Justicia en Máxima Instancia de la Jurisdicción 05– Poder Judicial de la Nación y sus actividades de dependencia directa. Para el supuesto de que dichos recursos superen el crédito asignado por la Ley Anual de Presupuesto o el que se destine conforme la facultad indicada en el primer párrafo del artículo 5° de la presente, podrán ser utilizados para financiar los restantes programas y actividades del presupuesto de la jurisdicción".

Es decir, le faculta a la Corte –como hace el artículo 5° de la 11.683, que es el único artículo aplicable al Poder Judicial– a utilizar los saldos de reserva para lo que quieran. Y el

objetivo de la Corte es la construcción del Poder Judicial. En esa reserva tienen la construcción y los gastos de infraestructura para levantar el Poder Judicial en todos los juzgados y en todas las cámaras federales en todo el territorio nacional.

Tenemos muchos juzgados, señor presidente. En mi provincia, el juzgado de Libertador General San Martín y muchos juzgados federales ya se han creado, pero no se ponen en marcha porque no se ejecutan los recursos. Y ahora abren la posibilidad de "meterles la mano".

Lo que han hecho, entonces, es devolverle la superintendencia, pero quitarle la autarquía. Con esto terminan destruyendo el principio de independencia del Poder Judicial, señor presidente, porque van a ser aplicables a éste los artículos 7º, 33 y 37 de la ley 11.672. Y con ello también van a poder emitir títulos y todo esto del blanqueo que se viene.

Entonces, están viendo de dónde sacar plata. De donde pueden, sacan plata. Es más fuerte que ellos. No pueden con una cuestión que ya es costumbre en el Poder Ejecutivo y en el gobierno, que es tomar plata de donde puedan. Bueno, le van meter la mano al Poder Judicial con esta reforma.

Señor presidente: antes de terminar, hay una cuestión que tiene que ver con el apuro. Porque esto es un mamarracho. Aparte de que vulnera la Constitución, esto es un mamarracho. Se han olvidado de hacer unas modificaciones. Porque como venían dándole las facultades al Consejo de la Magistratura en la modificación del artículo 5º de la ley 11.672, que es la permanente de presupuesto, en el tercer párrafo del 5º que se aprueba en el artículo 19 del orden del día, dice: "El Jefe de Gabinete de Ministros, junto con el proyecto de Presupuesto de la Administración Nacional enviará al Honorable Congreso de la Nación el anteproyecto preparado por el Consejo de la Magistratura de la Nación..."

Ahí se han olvidado de corregir. Ya no se puede modificar esto, muchachos. Porque quieren arrebatar todo a las apuradas. Aquí tendrían que haber vuelto al texto actual del artículo 5º, que habla de la Corte. Porque este artículo se modificó: antes, cuando lo aprobaron en el Senado el otro día, decía: autorizase al Consejo de la Magistratura; ahora dice: autorizase al presidente de la Corte Suprema a reasignar los créditos presupuestarios, la preparación del presupuesto y todo esto.

Estos son errores que generan una contradicción. ¿Quién prepara el presupuesto? El que lee este artículo dice: ¿al final quién prepara el presupuesto? ¿La secretaría administrativa? ¿Quién tiene que preparar el presupuesto es la Corte o es el Consejo de la Magistratura? No sé, pónganse de acuerdo. La verdad es que es contradictorio el texto de la modificación del artículo 5º de la ley 11.672. Esto tiene que ver con el apuro.

Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción?

Sr. Morales. – Cómo no.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra para una interrupción el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Siempre ha sido la Corte la que elevó el presupuesto. Siempre.

Sr. Morales. – Corríjanlo, entonces.

Sr. Pichetto. – Después le voy a explicar cómo funciona en la práctica y cómo funcionó el Consejo todos estos años.

Sr. Morales. – Está bien. Lo que yo puedo hacer es leerle cómo está el texto actual.

El actual texto de la ley 11.672 dice: "El Jefe de Gabinete de Ministros, junto con el proyecto de Presupuesto de la Administración Nacional enviará al Honorable Congreso de la Nación el anteproyecto preparado por la Corte Suprema..." Ustedes han puesto "Consejo de la Magistratura".

¡Está escrito "Consejo", muchachos! ¿Quién hace el presupuesto? Son tan

contradictorios porque van rápido, se llevan todo por delante, se quieren llevar la plata del Poder Judicial. Esto es lo que pasa.

Entonces, esto es lo que pasó: le devuelven la superintendencia, pero le sacan la plata. Típico de ustedes. Es así, característico.

Sr. Pichetto. – No pasa nada.

Sr. Morales. – No, no va a pasar nada. Nada más se van a llevar puestos a los jueces. Los quieren tener sometidos y con miedo.

Una breve acotación, presidente. Porque ha habido una referencia del senador González, que sería bueno que en algún momento esté aquí presente y, si quiere, después discutimos.

Nosotros no hemos elegido al senador Cano por la cantidad de votos; que, por cierto, ha sacado 129 mil votos, mientras que González ha sacado 77 mil. Y González lo hizo con todo: con toda la plata que le ponen a Santa Cruz. Nosotros, cruzando el desierto y con una anchoa. Si González estuviera militando en el radicalismo, no tendría ni un voto; no lo seguiría ni la familia. Y lo hubiéramos echado, obviamente, por entregarse al gobierno. Ya lo hubiéramos expulsado del partido.

Así que es incomparable. Aparte, Cano es presidente de bloque porque no se da vuelta, porque tiene convicciones, porque pelea contra un aparato de poder en la provincia de Tucumán. Realmente, los senadores del radicalismo estamos orgullosos de que un senador tenga el coraje que él tiene. Me gustaría que González tenga en la adversidad el coraje que tiene Cano. Por eso es el presidente del bloque de senadores del radicalismo.

Para terminar, señor presidente, lo de los subrogantes, lo de la Corte. Mañana nos caen con un tema de blanqueo. La verdad, se han perdido. Hay que devolverle la brújula al gobierno.

Sr. Pichetto. – Deben dar el debate mañana.

Sr. Morales. – Están señalando a los que quieren dólares; y ahora el gobierno va por dólares. Y para blanquear situaciones, dicen que Lázaro Báez no va a quedar comprendido en la ley. Vamos a ver mañana, cuando vengan “los cinco grandes del buen humor” que han estado ayer, cuáles son las explicaciones que no nos dan.

La verdad es que han perdido el eje y la dirección detrás del objetivo de llevarse todo por delante. ¡Y no van a pasar! Esta ley no se va a aplicar porque creemos en la Corte Suprema, en los tribunales y en los juzgados. ¡No van a pasar! No se la van a llevar puesta y no van a destruir la independencia del Poder Judicial, por lo menos en la medida en que el marco de la democracia nos lo permite. También si el senador Fuentes nos permite movilizarnos, ir a la esquina, juntar firmas e ir a las marchas. Es decir, poder tener las actividades que hemos aprendido desde la recuperación de la democracia.

En definitiva, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ponerle las manos en el pecho a este abuso totalitario de un gobierno que ya se ha excedido, que no tiene límites y que además ha perdido el rumbo.

Sr. Pichetto. – Al menos ha sido generoso con el tiempo.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: ¿el senador Pichetto pide una interrupción?

Sr. Presidente. – No, era una acotación que hizo el senador.

Sr. Pichetto. – Hemos sido respetuosos de los miembros informantes que han hecho un extensivo uso del tiempo.

Sr. Presidente. – Este es un debate muy importante y el uso del tiempo va a seguir siendo extensivo.

Por favor, senadora Negre de Alonso.

Sr. Fernández. – Es importante que gocen del tiempo para retornos. (*Risas*)

Sra. Negre de Alonso. – Que gocen del tiempo, ¿para qué? No lo escuché senador.

Sr. Fernández. – Espero que usted tampoco nos rete.

Sra. Negre de Alonso. – En primer lugar, voy a presentar una queja formal porque afuera hay carros de asalto. Soy senadora desde 2001 y desde ese tiempo que no veía carros de asalto rodeando el Congreso. ¿A quién le tenemos miedo? Lo que costó ingresar aquí hoy, prácticamente me tuve que poner un cartelito identificatorio.

Sr. Presidente. – ¿Sabe qué sucede, senadora? Como administrador le digo que la semana pasada ha habido muchas roturas de accesos y puertas. Entonces, así vamos a evitar que haya roturas.

Sra. Negre de Alonso. – Bueno.

Sr. Rodríguez Saá. – Capaz que se empieza a ver dónde está la derecha. (*Risas*)

Sr. Presidente. – ¿Por los carros? ¿O por los que rompen?

Sra. Negre de Alonso. – No podemos admitir ni callar que haya roturas en el Congreso. Me parecía que era un exceso porque a diez cuadras nos venían desviando. Yo venía por Riobamba y a la altura de Santa Fe tuvimos que mostrar la chapa del auto para que nos dejaran avanzar.

Señor presidente: es indudable que el proyecto tiene una modificación en el tema de administración pero el proyecto continúa en la misma temática, en la línea estructural de avanzar hacia la suma del poder público. Más allá de lo que el senador Fuentes ha dicho al respecto, se avanza en este criterio de apropiación poniendo límites a la participación popular.

En realidad quiero volver a traer algo. No voy a avanzar sobre lo que ya hablamos pero quiero recordar y actualizar los dichos de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación cuando dijo que en la democracia la mayoría gobierna los tres poderes. Eso lo dijo el 11 de abril de 2013. Entonces, para hacer efectivo eso estamos confeccionando un traje a medida. En la democracia el Frente para la Victoria está confeccionando su traje mediante estos instrumentos legales para ir por el Poder Judicial.

Asimismo, quiero resaltar algunas cuestiones. En primer lugar, como dijo el senador Morales, llamativamente se ha incorporado la referencia a la Ley de Administración Financiera, en diez artículos. Reitero, en esta modificación que ha hecho la Cámara de Diputados hay diez remisiones respecto de la Ley de Administración Financiera y, a *contrario sensu* de lo que dice el senador Morales, que no comparto, posteriormente a esto la interpretación va a ser que el artículo 80 también se va a aplicar al Poder Judicial. Esa va a ser la forma y la vía para ir por esa caja que detalladamente en montos y rubros ha referenciado el senador Morales.

– *Ocupa la Presidencia la señora presidenta provisional del H. Senado, senadora Beatriz Rojkes de Alperovich.*

Sra. Negre de Alonso. – Quiero decir otra cosa más, señora presidenta. Volvemos a cometer el mismo error. O sea, fue a la Cámara de Diputados, lo dijimos aquí, y vuelve nuevamente con la referencia a la Ley 11.672. Es importante referenciar que dicha ley es de 1932 y delega facultades, entre ellas, al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y cuando se sancionó la Constitución Nacional de 1994 se estableció la cláusula transitoria octava. Primero quiero decir que en el artículo 76 de la Constitución Nacional se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de

administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.

Entonces, los constituyentes fijaron la cláusula transitoria octava que dice que la legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley.

Como usted sabe, se venció el plazo establecido por los constituyentes y el Congreso lo fue prorrogando hasta que el 24 de agosto de 2009 se fijó el último plazo de prórroga de la delegación legislativa anterior a la Constitución, al término del cual caducaba toda la delegación legislativa que no había sido ratificada. Dicha ley no fue ratificada y no podría haberlo sido porque la Constitución de 1994 únicamente permite la delegación legislativa, según el artículo 76, al presidente de la Nación y en temas de administración o en temas de emergencia pública.

En este proyecto de ley estamos delegando facultades del Congreso al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Expresamente lo estamos autorizando, porque estamos actualizando el ordenamiento, para reajustar los créditos del presupuesto jurisdiccional debiendo comunicarlo al jefe de Gabinete de Ministros. Las modificaciones de los créditos presupuestarios no los puede hacer el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque no podemos delegar lo que la Constitución prohíbe delegar, sólo podemos delegar al presidente de la Nación en las dos causales que establece el artículo 76 de la Constitución Nacional.

Por consiguiente, con esta modificación volvemos a incurrir en el mismo error que se votó con anterioridad. Al respecto, está bien que le devuelvan las facultades de administración pero la incorporación a la ley de administración financiera indudablemente no es inocente ni ingenua porque en realidad el objetivo final son los fondos que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – El señor senador Fernández le solicita una interrupción.

Sra. Negre de Alonso. – Sí, cómo no.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – En el análisis que usted está llevando a la práctica hay una incoherencia porque puede ser que la redacción no sea feliz, no la he visto con detalle, pero la ley 24.156 es la que gráficamente expresa que el 15 de septiembre el presupuesto tiene que entrar por la Cámara de Diputados y no hay dos posibilidades de presentación del presupuesto Nacional ni hay posibilidades de que la Corte Suprema presente su propio presupuesto. Es un solo presupuesto nacional.

Ergo, no puede ser entonces lo que está planteando, que no sea otra cosa que la de remitirle o de darle la oportunidad o que exprese cuál es la vocación al Poder Ejecutivo. No tiene forma de hacerse de otra manera.

Ergo, lo que usted refiere del artículo 76 está en cabeza de quien tiene la responsabilidad efectiva de realizar y de desarrollar el presupuesto nacional. Y que es el único que lo va a presentar, independientemente de que en esto de las modificaciones que mejoran la calidad de la prestación de la justicia, uno le pueda dar la responsabilidad de la elaboración de su presupuesto a la jurisdicción. No vale una cosa más que la otra. Total, los elementos son muy simples. Hay un nivel de inversión en personal muy elevado y el resto son inversiones que tendrán que discutirse por la capacidad financiera que tenga el Estado Nacional para poder expresar ese presupuesto y cumplirlo, y no se va a poder escapar de

esa situación.

Entonces, ninguna de las dos cosas son textuales; ni la Corte va a poder hacer el presupuesto con una atribución que no le es propia, porque es la del Ejecutivo, en todo caso, haciendo un borrador para que, después, el Ejecutivo vaya y lo presente a este Congreso, a través de la Cámara de Diputados el 15 de septiembre, y con las conclusiones respecto de lo que presenta otro poder, como sucede todos los años.

Sra. Negre de Alonso. – Gracias, senador, lo que pasa es que no me interpretó. Posiblemente no me expresé bien.

No hay duda de que el que presenta el proyecto, que el que manda el presupuesto total es el Poder Ejecutivo Nacional. Estamos hablando de un presupuesto aprobado, donde la modificación de las partidas presupuestarias la puede hacer el presidente de la Corte. Y en realidad, lo que corresponde es que las modificaciones de las partidas se remitan al Congreso de la Nación –para la ampliación, para la disminución, para el destino de los fondos–.

Yo no estoy de acuerdo en delegar facultades al presidente de la Corte de Justicia de la Nación; facultades que son nuestras.

– *El señor senador Fernández realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.*

Sra. Negre de Alonso. – No lo escuché.

Sr. Fernández. – Es que nadie le está delegando las facultades. Porque las modificaciones, como sucede cuando se otorgan los aumentos salariales, salen a través de una disposición del jefe de Gabinete de Ministros; no salen por otro lugar; es por el Poder Ejecutivo. No tiene atribuciones *per se* el presidente de la Corte para poder tomar decisiones de esas características.

Sra. Negre de Alonso. – Acá se la estamos dando: autorízase al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a reajustar los créditos del presupuesto jurisdiccional.

Reajustar, modificar, cambiar. Votamos un objeto, un destino, y ahora ya ni siquiera es el presidente de la Nación, en uso de las facultades que le da la Constitución –artículo 76–. Ahora también el presidente de la Corte. Como está haciendo la presidenta del Banco Central con otras cuestiones, que está excediendo absolutamente las facultades que tiene, está poniendo en operación una norma que está derogada y caducó el 25 de agosto de 2010...

Presidenta: le permito una interrupción al senador Morales.

Sr. Morales. – Presidenta: gracias.

Creo que es válido el análisis de la senadora Liliana Negre de Alonso respecto de la ley 24.156 en tanto, como he planteado en mi exposición, realiza una remisión genérica a la ley 11.672, que es la ley permanente de presupuesto la que establece algunas normas básicas operativas, en cuanto a la estructura y la redacción puntuales del presupuesto, al incluir al Poder Judicial en toda la normativa y la referencia que hace en el artículo 1º, que no la hace la ley vigente; que tampoco la tenía hecha la media sanción aprobada acá, textualmente con la Ley 11.672.

El único artículo de la 11.672 en el que puede ser incluido el Poder Judicial es el artículo 5º, no los restantes artículos.

Por eso es que nosotros decimos que vía la remisión al artículo 1º y la aplicación de la 11.672 le puede ser aplicable el artículo 7º, el 33 y 37 de la 11.672, y en consecuencia también los artículos que está comentando la senadora, de la 24.156. Porque degrada la autarquía del Poder Judicial y la pone en igualdad de condiciones de un organismo

centralizado descentralizado.

Ese es el retroceso que hemos visto. Entonces, la línea argumental de la senadora Liliana Negre de Alonso tiene que ver con esto. Tiene que ver, porque el activador de degradar al Poder Judicial con un organismo centralizado descentralizado es la remisión lisa y llana a todo el articulado de la 11.672, y por eso al mencionar la 24.156 en tantos artículos, también puede ser aplicado en el artículo 80, como ha dicho.

Quería puntualizar esto, porque hay que ver las dos leyes; la 11.672 de presupuesto y la 24.156, que aplicada como se está planteando en esta remisión del inciso a) del artículo –creo que es el 18– que yo había leído, en cuanto a que cuando se prepare el presupuesto, puede resultar peligroso y le puede dar facultades al Poder Ejecutivo a tomarle los fondos.

De hecho, si me permite, porque me parece que este es un tema que es importante dejarlo bien en claro, el ex presidente Kirchner había dictado un decreto. El decreto 557 que, justamente, modifica el artículo 2º de la Ley 23.853, dice que estos son los recursos que van por goteo, a través de una cuenta en el Banco Nación, como a las provincias.

Por eso, es muy bueno el sistema de autarquía. Y en el artículo 4º, en un decreto de necesidad y urgencia que está vigente, el ex presidente Néstor Kirchner dice que los recursos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que temporariamente no se hallaren asignados a los gastos del Poder Judicial de la Nación –estos 5.400 millones que tienen en reserva– podrán ser invertidos en títulos o valores públicos de origen nacional.

Acá ya empezó el primer paso para meterle la mano. Pero esta es una metida de mano transitoria, porque a través del uso transitorio de los saldos de no ejecución de presupuestos, que son ahorro –que hemos visto en 2009, 500 millones– han ido ahorrando y han generado un fondo de reserva.

Pero este artículo 4º del decreto establece la utilización transitoria. La gravedad de la inclusión de la 11.672 extensa, como plantea el inciso a) del artículo con remisión al artículo 1º, le puede quitar definitivamente estos fondos, tomarlos desde el Tesoro y meterlos en el artículo 80 de la cuenta única, además.

Quería dejar expresado esto, porque no es sólo, aislada, la ley 24.156 sino que hay que hacer un análisis junto con la ley 11.672.

Sra. Negre de Alonso. – Gracias.

Está bien, sí senador...

Sr. Fernández. – Al sólo efecto de aportar al debate. Me parece que estamos en un temita que habría que terminar de cerrar.

Nunca –y por eso lo duradera de la ley permanente de presupuesto– ha sido necesaria su modificación. Porque, en definitiva, lo que hace es definir el envase en donde va a ir el presupuesto. Esto es, nunca se ha salido de ese envase la participación del Poder Judicial, con lo cual no es nada que haya variado en este tema.

Lo que pasa es que es tanto el alambicado que se busca de la situación, que se trata de hacer una cosita con la otra, que forzosamente se hace una cosa parecida a un monstruo. Y es muy simple: la Corte va a ser la que manejará la disposición del personal y los fondos de su propio presupuesto; va a estar en el presupuesto nacional, conforme dice la 24.156. Nadie se va a quedar con los fondos que le pertenecen, y va a funcionar como funcionó siempre. No hay intenciones que no sean estas. Es muy simple.

En eso de alambicar y alambicar y alambicar, uno tiene que pensar que si mi abuela tuviera un piloto en la mano sería un calefón. Y la verdad es que eso no es cierto.

Estamos hablando de una definición muy concreta en términos presupuestarios que no va a variar de lo que está sucediendo hasta este momento, senadora.

Sra. Negre de Alonso. – Gracias, senador.

La verdad es que no se modifica el presupuesto porque lo hacen por DNU.

Cuando la Argentina tenía alto crecimiento, calculaban el crecimiento más bajo y después la presidenta o el presidente, por DNU, adjudicaba el dinero y no pasaba por el Congreso. La realidad es esta. El presupuesto lo manda el Ejecutivo, lo vota el Congreso y las modificaciones tienen que tener el mismo sistema. Que la costumbre lo haya tergiversado y nos hayamos acostumbrado a la patología no significa que eso esté bien.

¡Las cosas se deben decir! Y si nosotros, desde este cuerpo, no reivindicamos nuestras facultades, senador Fernández, la verdad es que, ¿a quién le queda? ¿A la gente que está en la calle, y nosotros acá, rodeados de carros de asalto?

¡Las cosas tienen que ser como son! El Congreso tiene sus facultades, el Ejecutivo tiene las suyas y el Poder Judicial las suyas.

Ahora, cada vez avanzamos más en delegación legislativa, retraemos de la masa coparticipable dinero a las provincias, y así vamos avanzando con un goteo, ley tras ley.

Yo denuncio esa situación. No es, como dijo el senador Fernández, que veo en el paraguas de mi abuela el calefón. Denuncio que hay un atropellamiento silencioso, paso a paso, de las facultades del Congreso. Lo dije y lo seguiré diciendo.

Quiero cambiar de tema y me referiré a dos cuestiones: a lo que considero una profundización del dominio electoral a través de la reducción de la base de participación, y a las grandes incoherencias que existen desde que empezó esto.

Cuando la presidenta remitió la iniciativa mediante la cual se habilitaba a los chicos de 16 años a votar, habló de mayor participación...

Sr. Fernández. – Lo cual es correcto.

Sra. Negre de Alonso. – ...y acompañamos la votación.

Después, habló de democratizar la Justicia mediante la participación del pueblo. Pero se venció el plazo para que los chicos de 16 años pudieran inscribirse para votar; y se anotaron pocos porque no hubo propaganda. No le alcanzaron los fondos al Poder Ejecutivo nacional para promover la inscripción de los chicos. Por lo tanto, quedaron un montón de chicos fuera, porque no se promovió profundamente...

Sr. Fernández. – Eso no es verdad.

Sra. Negre de Alonso. – Sí, senador Fernández, fue así; es una realidad. No se promovió la inscripción de los jóvenes, pero hablaron de participar; primera incoherencia.

Segunda incoherencia: democratización de la Justicia y mayor participación del pueblo. En ese sentido, la ley de cupo femenino no se respetó y no escuché a nadie que lo dijera. Entonces, se está modificando el sistema electoral y se está tirando por tierra la ley de cupo femenino, que establece que el 30 por ciento de los cargos electivos tienen que ser ocupados por mujeres. Sin embargo, no está incluido el cupo femenino en la elección de los consejeros. Por lo tanto, no se trata de más democratización y de más participación sino de más limitaciones.

El senador Morales hizo un buen análisis del artículo 33. Cuando discutimos este tema en la Comisión, le hice un comentario al senador Fuentes acerca de que no se había derogado el artículo 3° bis, y él me dijo que no podía ser. Pero fue así: no se derogó el artículo 3° bis. Por ende, este artículo quedó en el proyecto tal como estaba redactado, no obstante las modificaciones al resto del articulado que hizo la Cámara de Diputados.

En ese sentido, en la iniciativa se establece que no podrán constituirse agrupaciones políticas al único efecto de postular candidaturas al Consejo de la Magistratura y que no podrán oficializarse candidaturas a más de un cargo y por más de una agrupación política.

Ahora bien, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales explicó en la Comisión que el proyecto era para ampliar la base de participación. Pero eso es una falacia, una trampa, porque el artículo 3° bis no ha sido modificado.

Además, no voy a reiterar lo que dijo el senador Morales respecto de los dieciocho distritos sobre veinticuatro. Por eso manifesté que este era un traje a medida. E indudablemente, es un traje a medida, porque la excepcionalidad es para participar ya en esta elección y de esa forma; por eso la exigencia de los dieciocho distritos.

No fue como dijo el senador Fuentes, en el sentido de que eran argumentos de la corporación o de la prensa. Parecería que ya estamos avanzando en lo que dije anteriormente, o sea que dentro de poco nosotros también vamos a ser una corporación, no vamos a tener representación popular sino que seremos miembros de una corporación. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata de más democratización sino de menos participación.

Pero además, tampoco se modificó el artículo 33 de la ley de partidos políticos, que prohíbe a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Tribunal de Faltas municipal a participar en las elecciones generales a cargos públicos electivos.

Muy simple: tal como expresó el senador Fuentes, estamos hablando de un sistema electivo nacional basado en el distrito único y en la democratización y participación popular, pero se olvidaron de sacar la prohibición que establece la ley de partidos políticos. Al respecto, me podrán decir que la ley posterior deroga la ley anterior, pero lo concreto es que los jueces no pueden participar, ya que lo tienen prohibido por ley.

Sr. Fernández. – Se puede modificar ahora.

Sra. Negre de Alonso. – Así es. Invito al oficialismo a que pongamos el cupo femenino y que derogemos...

Sr. Pichetto. – Ley 24.012. Después podemos explicar eso.

Sr. Fernández. – Lea el proyecto, senadora; eso está.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Por favor, senadores, no dialoguen.

Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta: puede ser que eso se me haya pasado.

En cuanto al tema relacionado con la relatora de las Naciones Unidas, es evidente que ya no somos solo nosotros, las corporaciones de abogados y de jueces y la corporación mediática, los que advertimos acerca de esta situación –porque parecería que todos los que están en contra de lo que piensa el gobierno son corporaciones–, sino también un organismo internacional externo a la Argentina, que tiene una coraza ante las presiones y del que nuestro país se enorgullece de participar. En este caso, el organismo lanzó una alerta urgente.

Me vino muy bien escuchar al presidente de la Auditoría, porque no conocía el tema de las alertas urgentes...

Sr. Pichetto. – Es amiga del auditor.

Sra. Negre de Alonso. – No sé si es amiga del auditor o no; cada uno cumple sus funciones.

Como dije, me vino muy bien escucharlo y, además, me vino muy bien ver la documentación que presentó, en la que se observa que han existido antecedentes de este tipo. Incluso, el propio auditor efectuó alertas respecto de otros países, en algunos casos, con buenos resultados, como en el de Italia, donde el Poder Ejecutivo vetó la ley porque el Parlamento tomó en cuenta el alerta urgente que él como relator había enviado, y en otros

casos no, como en el de Ecuador.

Por lo tanto, esto no lo planteamos solamente los argentinos y los que pensamos distinto del oficialismo. En ese sentido, reitero lo que expresamos la última vez: nosotros creemos que hay que hacerle modificaciones al Poder Judicial, pero no de esta forma, por estos medios ni tomando estos caminos, tal como se está haciendo.

También me pregunto si es una llaga abierta –como lo definió el senador Fuentes– esto de la proscripción. Entonces, vuelvo a la cuestión de las incoherencias: la ley de democratización de la Justicia habla de flexibilizar y profundizar la participación; sin embargo, esta norma se lleva puestos a los partidos chicos.

En consecuencia, ¿de qué democratización, de qué participación popular me hablan? Esas son las incoherencias en que incurre este Gobierno. Habla de democratizar, pero limita y limita; y el proyecto que viene de la Cámara de Diputados implica mayor limitación a los partidos políticos pequeños. Voy a ver cómo votan los senadores pertenecientes a partidos políticos pequeños, pues esta norma los arrasa. Son pocos los partidos que podrán participar de las elecciones, tal como explicó el senador Morales, que pertenece a un partido histórico. Él explicó correctamente que solo se presentarán en trece provincias como Unión Cívica Radical.

Por lo tanto, ¿qué es lo que busca el Gobierno? ¿Darle la facultad de administración a la Corte? Mentira, ese es solamente el maquillaje. Busca realizar el traje a medida para quedarse con todos los miembros del Consejo e ir por los jueces que le ponen límites al Gobierno.

Entonces, cuando yo digo que es la suma del poder público, más allá de lo que diga el senador Fuentes, lo expreso como senadora de la Nación, porque estamos avanzando en límites que no se pueden saltar, derogar o violar.

Señora presidenta: ¿hay discriminación? Sí, hay discriminación. ¿Hay mayor participación popular? No hay mayor participación popular. ¿Hay democratización? No, estamos iniciando un camino muy, muy difícil; un camino muy delicado y que, como dice la diputada Conti, el que gana las elecciones va por todo, va por los tres poderes. Estamos iniciando el camino de una dictadura.

Cuando los partidos políticos no tienen derecho a expresarse –más allá de que podamos compartir o no lo que han establecido respecto al artículo 114–, cuando se limita la participación popular, es una falacia que vayamos al sistema bipartidista, como dijo el presidente del bloque justicialista en la Comisión. Hoy, el senador Fuentes dijo que, en realidad, ha quedado totalmente superado lo que el constituyente quiso decir.

No sé qué tiene que ver esto con el acceso al trabajo y a la dignificación, con lo cual, por supuesto, estamos de acuerdo. Pero puede haber dignificación de los que menos tienen. Puede haber dignificación de las personas a través del trabajo, que es lo que corresponde. Pero con el respeto a la Constitución, con el respeto a la institucionalidad.

En diciembre de 2005, la entonces senadora Fernández de Kirchner, en la última reforma –ella estaba sentada ahí y yo acá–, incluso, aceptó una modificación al proyecto que yo le propuse en ese momento. Al respecto, vengo presentando proyectos sobre el Consejo de la Magistratura desde el 1° de agosto de 2001; y hablé de un organismo elefantiásico, paquidérmico e hice un estudio sobre el jurado de enjuiciamiento, sobre la monstruosidad de ese organismo que se movía lentamente y que no tenía ningún tipo de resultados y de frutos.

Es decir que participé en el sentido de que había que hacer una profunda modificación; lo vengo diciendo desde 2001. Pero esto no es una modificación. Esto es un

maquillaje para avanzar y quedarse con un Poder Judicial exclusivamente conformado por jueces afines.

Pero todo lo que comienza, termina. En realidad, las instituciones quedan y los hombres pasan. Entonces, debemos trabajar para la institucionalidad y no para la perpetuidad de algunos hombres.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Juez.

Sr. Juez. – Señora presidenta: seré muy breve, porque lo que tenía que decir ya lo dije en su oportunidad. Y la verdad es que no pensé nunca tener esta oportunidad de poder reiterar los conceptos, toda vez que en aquel debate y en aquella discusión de la Comisión parecía que este tema estaba tan blindado y tan soldado que era difícil de incorporar un concepto o una idea. Por eso, poder hablar sobre el mismo tema, parece lejano.

Pero esto habla de lo que han dicho los senadores preopinantes; habla de la improvisación sobre un tema tan delicado, tan importante, tan urticante y tan “motivante” para acompañar.

He pasado más de cuarenta días pidiéndole al presidente de la Corte que participe, que queremos escucharlo, que queremos saber qué opina, qué dice. Pero siempre alguna chicana procesal: no puede opinar el ministro de la Corte porque, en el supuesto caso de que tuviera que expedirse sobre la constitucionalidad, se tendría que apartar. Yo me preguntaba en aquel momento si eso era lo más grave; porque si ello fuera lo más grave, quisiéramos escucharlo ahora, porque el problema lo tenemos en este momento.

Cuando escuchamos que el presidente de la Corte se reunía con las autoridades nacionales para resolver el tema, y será porque todavía tengo una cuota de ingenuidad, pensé: “¡Qué bueno, seguramente va a plantear lo que queremos escuchar; lo hará en reserva!” Pero no; solamente se juntó para negociar la caja. Hemos escuchado lo que dijeron el senador Morales y la senadora Negre de Alonso, que ha sido espectacular. Lo único que le interesó al presidente de la Corte fue la caja, manoteo del presupuesto. Y encima, al gobierno le gusta este tema de la plata: “Tomá la plata, cállate, no digás nada”.

Es un tema gravísimo; nada de lo que yo diga ahora es distinto de lo que hemos señalado antes. Nosotros no estamos dispuestos a cambiar nuestro voto. Ya hace quince días, decíamos que esto era absolutamente imposible de acompañar, que era imposible que el Frente Amplio Progresista lo pudiera sostener. Y es la verdad; y no porque nos rasguemos las vestiduras. Porque no estamos defendiendo este laberinto complicado de la Justicia ni estos recoletos pasillos de tipos que se amontonan familiarmente.

Este proyecto planteado de esta manera no tenía ningún tipo de acompañamiento hace quince días y tampoco hoy, con este nivel de improvisación –claramente manifestado por algunos senadores preopinantes–, inclusive, hasta en el texto, en la redacción, en la interpretación. En este sentido, todo hace que veamos cómo debe ser interpretado; pareciera que hubiera un manual, porque de este lado estamos nosotros, los burros, y del otro están los probos, que saben interpretar todas las normas, aun las que escriben mal.

O sea, no hay nada que merite que el Frente Amplio Progresista pueda tener alguna visión un poco más generosa para acompañar este proyecto. Así que voy adelantando que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de acompañar este proyecto.

Insisto, y lo quiero decir con claridad, porque mañana va a venir la catarata de planteos y, seguramente, se nos va a ir de la mano de la política la posibilidad de seguir insistiendo sobre este tema, quedando en manos de un montón de abogados, con trajes, muy bien formados, con un lenguaje muy interesante, los planteos de inconstitucionalidad.

Y a esto se le suma la trampa electoral que proscribiremos; y hay que decirlo con

claridad. Yo no puedo creerlo. No sé usted, señora presidenta, pero yo vengo del peronismo; me fui del peronismo de mi provincia, porque era una banda de ladrones, pero yo no dejé de ser peronista. Me crié en un hogar donde mi viejo sufrió la proscripción peronista, la persecución. Como suboficial, en el 55 fue expulsado, perseguido por la Justicia. Mi viejo siempre decía: ¡Qué jodida esta Justicia que persigue a los que tenemos una idea!

Estamos generando mecanismos de persecución, porque de eso estamos hablando. Yo no voy a hablar de ningún otro cupo que no sea el que se está creando, que es el cupo judicial. Sin embargo, me gustaría defender el cupo de la dignidad, pero creo que estamos todos en esa tarea.

Esta creación del cupo judicial, que es un traje a medida –como dijo la senadora Negre de Alonso–, pero un traje a medida del que gana –hoy el Frente para la Victoria, pero mañana otros–, constituye esto que hemos dicho quince días atrás, es decir, un traje maravilloso para que a quien le toca gobernar pueda hacerlo siempre con la complacencia y el acompañamiento de los amigos del Poder Judicial, que pone, saca y remueve.

Y como decía el senador Sanz, todos conocemos la historia del Poder Judicial de la Argentina. Poder temeroso como ninguno; claudicante como pocos; y oficialista como casi ninguno. El Poder Judicial en la Argentina es un poder oficialista; espera que pase el turno de quien gobierna para, a partir de ahí empezar a pasarle cuenta, pero mientras tanto, son absolutamente oficialistas.

Señora presidenta, digo una vez más –y pareciera reiterativo, molesto, irritante–, que soy un duro crítico de la administración de Justicia en mi provincia; soy durísimo con los jueces, con los magistrados. He integrado los consejos de designación de magistrados en representación del Colegios de Abogados y de la Federación de mi provincia. La justicia de Córdoba no es mejor que esta que estamos creando ahora; no es mucho más independiente. Pero si nosotros estamos cuestionando la dependencia del Poder Judicial de Córdoba, ¿cómo no vamos a venir a cuestionar este mecanismo tanto o igual de perverso!

¿Por qué este traje a medida del que gobierna, de los que ganan, que hoy es el Frente para la Victoria? ¿Por qué este apresuramiento? Como hablábamos con el senador Linares, ¿por qué esto de juntar seis consejeros más los que están, que van a durar hasta 2015? ¿Por qué no nos sentamos con todo el tiempo del mundo, discutimos y ponemos un Consejo de la Magistratura que ayude, que abra la puerta y que oxigene a partir de 2015?

Yo no voy a abrir juicio; no voy a decir que, seguramente, están buscando impunidad, no ser perseguidos, clausurar las causas ahora para evitar el día de mañana la doble persecución.

Esta larga introducción es para reiterar mis conceptos; y lo digo con respeto a muchos senadores de la oposición. No debemos convalidar en los hechos lo que por derecho cuestionamos. Entonces, hagan todas las trampas electorales que quieran. Pero desde el Frente Amplio Progresista, no vamos a convalidar esto, de ninguna manera –ni aunque esta trampa estuviera vigente–, presentando consejeros partidarios con las pecheras del Frente Amplio Progresista y a jueces amigos y militantes del Derecho para que ocupen ese lugar, porque no vamos a convalidar en los hechos lo que por Derecho vamos a cuestionar a partir de que esta norma sea oficializada.

Así que con igual criterio, con los mismos argumentos, con un poco más de bronca y también con un poco más de cansancio, porque llevamos un mes discutiendo cosas que supuestamente no se deberían debatir pero que se discuten por la fuerza de la realidad –esto estaba cerrado y blindado a cualquier discusión y ahora lo volvemos a tratar– sostenemos

nuestra postura.

La verdad es que yo quería discutir la independencia de la Justicia y no la autarquía, ni el presupuesto, ni el manejo económico; pero como no lo discute el propio presidente de la Corte, mi apellido Juez no me habilita a hablar más de lo que habilita al propio presidente del Alto Tribunal a defender su propia independencia.

Así que con iguales argumentos, pero con un poco de hastío, aunque con igual firmeza y contundencia, sepa, señora presidenta, que el Frente Amplio Progresista de ninguna manera va a acompañar ninguno de estos proyectos ni, particularmente, este que trae como modificación el Consejo de la Magistratura.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – A continuación, le corresponde el uso de la palabra al señor senador Romero; pero la senadora Negre de Alonso está solicitando una interrupción. ¿Se la concede, senador?

Sr. Romero. – Sí, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta: quiero tener honestidad intelectual y reconocer que, efectivamente, estaba incorporado el cupo femenino. Hubo un error u omisión en el cuadro con el que estaba trabajando. Así que quiero reconocer que era cierta la advertencia que me habían efectuado.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Romero.

Sr. Romero. – Señor presidente: nos encontramos nuevamente con un tema en el cual hay que hacer un esfuerzo para no reiterar conceptos, porque la problemática es la misma, aunque con la modificación incorporada en la Cámara de Diputados se agravan las consecuencias negativas que vemos respecto de este proyecto.

Ya se mencionó que esta iniciativa atenta contra la inamovilidad de los jueces. Y creo que aquí se ha mencionado –saco el tema, porque surgió en el debate– que el cambio de mayoría de dos tercios por mayoría absoluta no altera la situación. Sin embargo, la altera muchísimo. En primer lugar, para el oficialismo o para un sector determinado, va a ser mucho más fácil obtener la mitad más uno que los dos tercios de los votos.

Pero, además, quiero dejar en claro que si bien la destitución va a requerir los dos tercios, ya las sanciones intermedias son una condena. Para un juez, una suspensión es una condena. Yo quisiera saber con qué autoridad podrían volver a sus juzgados aquellos magistrados que fueron suspendidos y luego sorteada la destitución. Hoy cientos de jueces viven con la espada de Damocles en esta especie de Inquisición, que implica saber que ante cualquier problema de alguna de las partes, o incluso frente a la propia pelea entre magistrados, pueden sufrir múltiples denuncias. Sin embargo, esta es siempre una espada de Damocles que tienen los jueces sobre sus cabezas. Y si a eso agregamos que de un día para el otro pueden ser suspendidos, para mí, esa ya es la condena que consuma el riesgo y altera la inamovilidad de los jueces.

Ya dije que en la Argentina se habla mucho de la estabilidad del empleo público y que los jueces no tienen estabilidad, sino algo más, que es la inamovilidad. Sin embargo, esto se está alterando. Y también, la integración del Consejo de la Magistratura rompe el equilibrio que establece el artículo 114 de la Constitución, por ese ida y vuelta de los números que se fijan en cuanto a la cantidad de miembros, que aquí ya se ha mencionado hoy en varias ocasiones y no quiero reiterar.

La Cámara de Diputados ha modificado varios artículos. Ya han señalado varios senadores las contradicciones que hay entre la ley de administración financiera y las

modificaciones sobre la administración del Poder Judicial. Pero la mayor cantidad de controversias radica en el sistema electoral, en el artículo 18, sobre la forma en que se establecen los cuerpos de las boletas.

También dijo aquí el miembro informante que no se altera la accesibilidad respecto del resto de las elecciones. Sin embargo, creo que sí. El artículo 18 establece, básicamente, cuatro requisitos. Los últimos dos, no los entiendo mucho; alguien ya los explicará o nos enteraremos de esto cuando algún juez o la Cámara Electoral reglamenten o interpreten dicha norma.

En primer lugar, se establece como requisito la existencia de un partido, de una confederación o de un alianza en dieciocho de los veinticuatro distritos. Esto es claro y concreto. Y es muy diferente del artículo 5° de la ley electoral, que establece que a los partidos, para ser reconocidos, con cinco distritos les resulta suficiente.

Además, el artículo 21 establece los requisitos para las elecciones primarias y también exige estar inscripto, por lo menos, en cinco distritos. Quiere decir que para elegir presidente hacen falta cinco distritos y para elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura hacen falta dieciocho de los veinticuatro. Esto está claro. Creo que hay una diferencia muy clara en lo que hace a la proscripción...

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Señor senador Romero: el señor senador Fuentes le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Romero. – Señora presidenta: un momento, por favor. Quiero comentar lo que opino de los otros párrafos, porque como hay dos que no entiendo, a lo mejor, me los puede explicar el senador.

Hay un párrafo que habla de la idéntica denominación. Yo entiendo que deberán llamarse igual. Es lo que dijo el senador por Jujuy. Y después, el último párrafo señala que la adhesión de los cuerpos de boletas en el resto de las categorías podrá realizarse mediante vínculos jurídicos. Este último párrafo no lo entiendo.

Así que le concedo, con todo gusto, la interrupción solicitada al senador Fuentes, para que aclare estas cuestiones.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Fuentes.

Sr. Fuentes. – Señora presidenta: me observa correctamente mi jefe de bloque. Una cosa es la oficialización de listas de candidatos a consejeros, cuyo requisito es el mismo que para la elección de presidente o vicepresidente –son treinta y cuatro partidos nacionales–, y otra es que a los fines de la adhesión de los cuerpos de boleta, hay dieciocho distritos. Son dos cosas totalmente distintas. Si usted no puede tener dieciocho, va la boletita sola, puesta al lado de la pila. Pero para adherir esta boleta a la de diputados en esta elección, que es intermedia y se da en veinticuatro distritos –donde algunos llevan diputados–, se requiere identidad de nombre en dieciocho distritos. Si no, va la boleta sola. Entonces, esto no es proscripción. Es, simplemente, un mecanismo de sumatoria de boletas

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Romero.

Sr. Romero. – Señora presidenta: esa parte está escrita, así que no hay mucha diferencia. Hacen falta dieciocho distritos. Coincidimos en ello. Porque con los mismos argumentos, en la elección de 2015, podríamos establecer que para presentar al candidato a presidente en una misma boleta tendría que haber también dieciocho distritos. Podría ser lo mismo.

Lo que no entiendo es cuál fue la argumentación o la necesidad de que, para que vaya en el cuerpo adherido, hagan falta dieciocho distritos. Es una limitación. Y prueba de ello es que esto lo sostienen redactores como Jorge Landau, una especie de compañero

Maquiavelo que tenemos en el partido y que venimos sufriendo o disfrutando desde hace muchos años, dependiendo de dónde uno esté ubicado.

Landau dice que hay treinta y cuatro partidos nacionales. Muchísimos. Y cuando se dice que somos restrictivos, yo pregunto: ¿hay treinta y cuatro proyectos políticos distintos para gobernar? En 2013, se elegían diputados nacionales en veinticuatro provincias y senadores en ocho. Para presentar candidatos a consejeros, deberán hacerlo los partidos nacionales o las alianzas que se presenten con el mismo nombre, al menos, en dieciocho distritos. Es una condición razonable, para evitar la dispersión y las colectoras. Sin embargo, las colectoras no fueron un invento de la oposición. El oficialismo se benefició con ellas. Y si hay treinta y cuatro proyectos políticos para gobernar la Argentina, yo creo que hay como cuarenta millones, porque si en algo nos caracterizamos los argentinos es que cada uno cree que tiene la solución definitiva y fundamental para hacer el giro copernicano que el país necesita. Por eso, cada vez que aparecen nuevos funcionarios y cambian los gobiernos, empezamos la refundación de la República. Creo que lo que dice nuestro compañero Maquiavelo es cierto; están restringiendo, porque hay muchos. A él le parece que hay muchos y hay que restringir.

El señor senador de la provincia de Buenos Aires dijo que estas modificaciones permiten que las elecciones no sean un festival de discusiones políticas sin sentido; que las modificaciones son atinentes, “no estamos perjudicando a nadie en que haya cinco o seis alianzas que puedan competir y que sean las que realmente encaran la voluntad popular”. No voy a hacer ningún comentario, para no tener que polemizar con el señor senador por la provincia de Buenos Aires.

Entonces, existe esa limitación que, sin duda, cambia el escenario. Y, repito, estos argumentos en favor de este texto se pueden aplicar también acertadamente –si uno quiere– en las elecciones presidenciales. No le extrañe, señora presidenta, que el oficialismo advierta que también en la elección nacional hay mucha diversidad de proyectos y que vayamos al bipartidismo o a algo parecido dentro de unos años. En verdad, ojalá hubiera más unión.

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

Sr. Romero. – Quienes estén en contra dirán que estamos restringiendo lo que nosotros creemos que es una dispersión; otros dirán que es una restricción.

La Cámara de Diputados devolvió el manejo administrativo de los fondos y la superintendencia a la Corte. Yo creo que está muy bien que lo haya hecho. Cómo fue, no sabemos. La Corte salvó sus tantos, salvó sus cuentas, salvó su autonomía; cosa que a mí me parece bien; no me opongo. Pero ahora, yo quiero ver a la Corte cuando le toque defender los tantos de los demás, las cuentas de los argentinos; si estas leyes son restrictivas o no, si la independencia del Poder Judicial puede alterarse o no; quiero verla cuando tenga que analizar constitucionalidades o no. Ahí me gustaría verla actuar, cuando se tenga que discutir igualdad ante la ley, las libertades públicas u otras garantías constitucionales que estén en juego.

A mí me gustaría que la Corte se juegue, porque como ya señalé, así como tanto se habla de la famosa “Corte de la mayoría automática”, yo digo que esta es la “Corte de la mayoría segura”. En efecto, hasta ahora no ha habido un fallo de este Alto Tribunal que haya puesto orden o dirección en las cuestiones institucionales. Opinar del aborto o del Riachuelo es un aporte importante, pero no necesariamente es un límite a los excesos de poder del Gobierno o al avance que creemos que está haciendo el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Eso no lo estamos viendo. Creemos que en algún momento la Corte tendrá

que decidir al respecto.

Sé que es muy criticada la opinión de la relatora de las Naciones Unidas, pero eso muestra cómo nos ven afuera con la deuda, como lugar de inversión, en materia de derechos y garantías.

Si estamos en un proceso revolucionario –como entiendo que señaló el miembro informante– y las revoluciones siempre tienen una contradicción con los poderosos, a esta altura –como dije la semana pasada–, yopretendo el tipo de revolución no violenta que pretendía el general Perón. Desde la Revolución Francesa hasta la fecha, las revoluciones fueron grandes expresiones del espíritu. Sin embargo, a los efectos prácticos, desde la guillotina hasta la Revolución Cubana se ven dos efectos: la violencia –como ocurrió en la revolución china o en la revolución rusa o cubana–, que no justifico, y la pérdida de libertad.

Por suerte, en la Argentina, en las revoluciones del siglo XXI, no tenemos que lamentar la pérdida de vidas –salvo por la inseguridad–, pero sí algunas restricciones de libertad. Por ello, como una forma de celebrar la visita del presidente de la Madre Patria, quiero citar una frase de un ex líder de ese país: “Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes: es un país de esclavos. La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”. Esto no lo dijo ni el actual presidente ni el fallecido de la Madre Patria sino Simón Bolívar, cosa que debería servir como ejemplo para todos aquellos que se creen seguidores de Bolívar.

Con estas palabras, fundamento mi voto en contra.

Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Borello, pero la senadora Negre de Alonso le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sra. Borello. – Sí, presidenta.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Aprovecho que está presente el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador Fuentes, para hacerle una pregunta.

He escuchado decir a algún diputado en los medios que los consejeros se podrían presentar sin partido político. ¿Eso es lo que quiso decir usted recién o interpreté mal?

Sr. Fuentes. – ¿Cómo dijo?

Sra. Negre de Alonso. – He escuchado decir al diputado Prat-Gay en los medios que la lista de consejeros se podría presentar sin ningún partido político. Usted recién hizo una aclaración, que no la interpreté bien ante la interrupción solicitada por el senador Romero. Por eso, quiero preguntarle si es eso a lo que usted se refería, si es otra cosa o escuché mal.

Sr. Fuentes. – Dados mis antecedentes andaluces, lejos estoy de Prat-Gay. Lo que dije ante la observación que hizo el senador Romero es que una cosa eran los requisitos para presentar los candidatos al Consejo de la Magistratura por parte de un partido político y otra eran los requisitos para adosar boletas. Son dos cosas totalmente distintas.

Y paso a la explicación. En uno, con cinco partidos distritales presenta candidatos en todo el país; pero para adosar una boleta de diputado a la de consejero debe haber identidad de nominación de dieciocho distritos. Nada más que eso.

Sr. Pichetto. – Tiene que ser un partido político.

Sigamos con el debate, presidenta, si no es un debate libre esto.

Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Senadora Borello: le solicitan una interrupción. ¿La concede?

Sra. Borello. – Sí.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: el proyecto de ley prohíbe la creación de un nuevo partido que se presente al efecto de la elección de consejeros; lo que no puede prohibir es que uno de los treinta y cuatro partidos nacionales que no se presenten para la categoría de diputado nacional en los distintos distritos lo haga solamente al efecto de presentar una lista de consejeros a la Magistratura. Eso no está prohibido. No lo puede prohibir la ley.

Sra. Negre de Alonso. – Poder, puede. Hemos visto otras cosas...

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Borello.

Sra. Borello. – Señora presidenta: en realidad, han sido muy claras las expresiones vertidas en todo este día respecto de este proyecto reformado que ha entrado en el Honorable Senado de la Nación. Solamente haré hincapié en ciertas ideas que plasmé en la sesión anterior y que quiero ratificar, porque considero que este asunto es gravísimo para nuestro sistema de gobierno.

Con esto voy a reafirmar aquel concepto que manifesté en la sesión pasada, cuando rechazaba el proyecto porque estaba en juego la independencia de uno de los poderes de la República, particularmente, la independencia del Poder Judicial.

Es cierto que acá se ha vertido una serie de consideraciones acerca de las nuevas reformas para este proyecto. A mi humilde entender, considero que en materia electoral, estas modificaciones constituyen un avance de proscripción, pues afectan el derecho de los demás partidos políticos de la República Argentina. Esto es gravísimo, porque son acciones antidemocráticas que ya estamos bastante acostumbrados a percibir.

Nosotros conocemos los tres poderes como nociones elementales de Cívica. Lo hemos dicho durante este día, en las sesiones anteriores; lo está repitiendo permanentemente la sociedad y todas aquellas personas que han venido a darnos una serie de opiniones que no fueron positivas para este proyecto. No escuché a alguien que acepte las reformas de esta nueva norma.

Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, la independencia de esos tres poderes es lo que nosotros vamos a seguir defendiendo hasta el final de nuestros días, porque es la base del sistema republicano. Además, sabemos que históricamente todos aquellos gobiernos argentinos que no respetaron la división de poderes nos llevaron a hechos nefastos que le hicieron muy mal a la vida política nacional, ya que se avasallaron todos los derechos, la independencia de los poderes y los derechos humanos.

Es necesario, señora presidenta, que el poder controle al poder. Esta es la idea central del sistema republicano. Y en este caso, un Poder Judicial dependiente de un poder político implica que los jueces y miembros del Consejo de la Magistratura serán mandatarios del Poder Ejecutivo de turno, de éste y de los que vengan. Por lo tanto, sus fallos siempre estarán sospechados de parcialidad.

Me pregunto quién será el encargado de controlar a los otros poderes, qué fiscal se va a atrever a investigar actos incorrectos, ilegales, de corrupción o de lavado de dinero, o de incumplimiento de los deberes públicos, cuando estos delitos sean atribuidos a miembros de alguno de los otros poderes del Estado.

Señora presidenta: muy sintéticamente, pero con la claridad que creo que debe existir en este tema, y sobre todo en este aspecto que he tomado de la independencia de

poderes, digo que la independencia del Poder Judicial está totalmente en juego y, por lo tanto, va a desaparecer por completo esa independencia y esa claridad en sus acciones; y la impunidad para los gobernantes será total y absoluta. Las garantías para los ciudadanos comunes están en peligro. Los derechos de los ciudadanos están en peligro. Está en peligro el sistema republicano de gobierno; y eso es muy triste.

Voy a mencionar nuevamente el artículo 114 al que tanto se ha hecho referencia; creo que es necesario hacerlo. Ese artículo, concretamente –todos lo sabemos, pero lo voy a resaltar–, dice que el Consejo de la Magistratura será integrado de modo que se procure un equilibrio de poderes, el famoso equilibrio de los tres poderes de la República. En este marco, advertimos todos que la elección popular de los consejeros resulta un desconocimiento total de la Constitución Nacional; se la está violentando, se la está transgrediendo y, en este caso, también, el espíritu de los constituyentes, que pretendieron mediante el texto legal acotar y limitar el poder político y la designación y enjuiciamiento de los magistrados. En tal sentido, señora presidenta, considero totalmente inconstitucional este proyecto de ley.

Es indudable que, con esta iniciativa vinculada al Consejo de la Magistratura, el Gobierno está muy lejos de garantizar la independencia del Poder Judicial. Además, tendrá como efecto la directa vinculación de los consejeros con un partido político que los propone. De esa manera, estamos afectando gravemente la independencia de los poderes, que es uno de los pilares más importantes y fundamentales de la República.

Coincido con la mayor parte de lo expresado por los senadores en esta sesión trascendental del Senado de la Nación. Creo que avasallar y controlar al Poder Judicial es lo último que le queda al Gobierno nacional en su ambición por ajustar y adecuar la democracia a sus necesidades políticas. Coincido totalmente. Y este concepto ya ha sido vertido por otros senadores. El nuevo Consejo le dará al gobierno un dominio absoluto para designar y para remover a los jueces. De esa manera, se convierte –y lo digo con toda fuerza– en una llave maestra que abrirá las puertas a la continuidad o, directamente, a la desdicha del Gobierno, de este Gobierno.

Señora presidenta: para terminar esta exposición muy simple, quiero decir y expresar que el Estado tiene el compromiso de asegurar esta independencia a la cual me estoy refiriendo y, también, el respeto por la Constitución Nacional. Por eso exhorto y confío en que este Cuerpo va a honrar nuestro juramento constitucional, a los fines de asegurar para todos argentinos, los que vinieron y los que no vinieron a expresarse, el acceso a una Justicia totalmente independiente.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Señora presidenta: ya es bastante lo que se dijo. Voy a tratar de ser muy sintética. Creo que las modificaciones incorporadas en cuanto al Consejo de la Magistratura no han solucionado los problemas de constitucionalidad que tiene el proyecto sino que afectan la división de poderes –artículo 1º de la Constitución Nacional–, al perjudicar el sistema republicano. Y afectan también el artículo 18 de nuestra Carta Magna, así como su artículo 75, inciso 22, por cuanto al incorporar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José de Costa Rica, consagran como derecho humano fundamental la garantía del juez imparcial, es decir, la garantía que tenemos todos los ciudadanos de ser juzgados y escuchados por un juez imparcial.

Esta modificación del Consejo de la Magistratura, que combina aumento del número de miembros y elección por el voto popular, con listas completas –donde se reparten, entre el que gana, es decir la mayoría, y el que le sigue, todos los votos– y con el

cambio de mayorías, pulveriza la división de poderes. Con este esquema, quien gana las elecciones presidenciales tiene los dos tercios, pero parece que el Poder Ejecutivo desconfía de que alguno se le dé vuelta. Entonces, por las dudas, cambiamos la mayoría y hacemos mitad más uno; por la dudas, repito. O sea que pulveriza la división de poderes.

Pero la Cámara de Diputados, además, incorpora otra modificación que realmente pulveriza esa apuesta simbólica del proyecto, que parecía encarar la consigna de democratización, es decir, democratizamos, abrimos, ampliamos. Sin embargo, sorpresivamente, la Cámara de Diputados reduce las posibilidades de que los partidos puedan participar, de que haya otras expresiones que lleven candidatos al Consejo de la Magistratura. Y esto lo hace a cuarenta días del cierre de presentación de alianzas. ¿Cuál es el objetivo? Dificultar el armado de alianzas; restringir derechos políticos en contra de todos los tratados internacionales que la Argentina ha suscripto: el derecho a elegir y a ser elegido; atomizar a la oposición. La idoneidad pasará a segundo plano; lo importante será estar en esa lista sábana, con los dieciocho distritos de idéntica denominación.

Además, por la urgencia de dominar el Consejo, por la urgencia de dominar a los jueces –como ya se dijo muy bien–, por esta única vez, en lugar de hacerlo coincidir con las elecciones presidenciales –no podemos esperar hasta el 2015–, lo hacemos con las legislativas.

Esto tendrá la horrible consecuencia de llevar por dos años a veinticinco el número de miembros de un Consejo que hoy tiene trece. Pero cambiando el sistema. En efecto, la Constitución ha establecido un mecanismo para elegir a diputados y senadores que tienen que discutir las leyes, que captura toda la diversidad ideológica, de preferencias y de particularidades de cada provincia, porque ellos son elegidos por distritos.

Entonces, si nosotros tenemos este sistema complejo, muy democrático, por el que todas las voces están representadas en el Congreso, para hacer las leyes, ¿por qué vamos a agigantar al partido nacional que gane las elecciones para controlar a quienes están con obligación de aplicar las leyes? Se pierde la pluralidad, se pierde esta particularidad constitucional y, de ese modo, se avasalla también la Constitución. Además, se va a avasallar el federalismo, ya que como estaba integrado el Consejo con la elección de jueces y abogados siempre se buscaba que hubiera una representación del interior del país. Con la reforma no será así. Como se buscarán figuras muy conocidas, seguramente, terminarán siendo todos del área metropolitana y de Buenos Aires.

¿Qué se busca? Que haya más consejeros del partido gobernante y menos cantidad de candidatos posibles, menos listas de candidatos: 18 distritos con idéntica denominación. “Restrinjamos al máximo”. ¿De qué democratización se habla? ¿Eso es democracia? Restringir al máximo los derechos políticos a elegir y ser elegido, ¿es democratizar la Justicia? Me parece que lo hecho por la Cámara de Diputados al reformar la iniciativa en consideración fue desnudar todos los temores que teníamos. El objetivo está claro: que haya muy pocas listas; que casi nadie pueda juntar estos requisitos para, de esa forma, asegurarse el resultado y el dominio absoluto del Consejo de la Magistratura; y, mediante el dominio absoluto de ese órgano, el dominio absoluto de los jueces.

Las declaraciones, derechos y garantías enumerados en la Constitución Nacional nacen del principio de soberanía popular y de la forma republicana de gobierno. Eso es lo que se lleva por delante el proyecto que hoy va a aprobarse. Desde los orígenes del pensamiento político moderno, se entiende que una auténtica República se basa en la separación de poderes estatales que cuentan con herramientas para controlarse recíprocamente. Se pulveriza la última independencia que queda dentro del ámbito

institucional de la Argentina.

Se ponen en jaque, entonces, a la República, a la división de poderes y a la democracia por dos vías: se avasalla la garantía del juez imparcial y se limitan los derechos políticos –el derecho a elegir y ser elegidos– con exigencias electorales muy superiores a las requeridas para ser presidente y vicepresidente de la Nación. Es decir, requisitos absolutamente superiores.

Si la judicatura, si la Justicia ya no hace falta que sea independiente –porque, como dicen algunos oficialistas, si la Justicia es un poder político, tiene que tener afinidad con quien ha ganado las elecciones–, si ese es el criterio, entonces, directamente puede ser administrada por los empleados públicos de la Administración Pública Nacional. Pero ese es otro sistema político.

Está clarísimo que esto avasalla la Constitución. ¡Ya no nos importa ni lo que digan las Naciones Unidas! Ya no nos importa nada: nos llevamos todo por delante. Entonces, ¿saben qué? Después resulta muy difícil salir afuera del país a buscar apoyos cuando son necesarios. Se quiere que nos apoyen con las Islas Malvinas, con temas que interesan mucho en la Argentina y frente a la situación del *default*. ¿Pero qué se hace? Se lleva todo por delante: la totalidad de las reglas y hasta la propia Constitución de la Nación.

¿Qué garantía se dan para que vengan inversiones que nos permitan salir adelante y generar trabajo? Como nos peleamos con todos, nos llevamos por delante todas las reglas y como violamos todas las reglas –hasta nuestra propia Constitución–, entonces, ahora parece que lo que queremos hacer es captar los fondos de todos los delincuentes del mundo mediante un blanqueo de capitales, porque parece que es lo único que nos queda.

Ratifico el voto por la negativa.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Artaza.

Sr. Artaza. – Señora presidenta: quienes hemos estudiado quizá muy poco de abogacía en algún momento de nuestra vida, leyendo a Bidart Campos o al doctor Fayt –que en otras luchas por los derechos de los ciudadanos me ha regalado algunos libros de Derecho–, hemos podido leer esta doctrina de constitucionalismo popular que propone hoy el oficialismo.

Se trata de una doctrina que no ha tenido muchos adherentes en Estados Unidos ni en otros países, ya que trata de imponer la contracara de un control al sistema constitucional como el la Justicia; y lo propone desde el punto de vista social. Es decir un control social de las voluntades populares. Ese sistema no estaría mal porque la misma discusión ya genera un control. Sin embargo –y coincido con lo que se ha hablado en otras sesiones, con lo que han dicho otros bloques y nuestro miembro informante–, nos oponemos a la reforma porque no garantiza en ningún momento la búsqueda objetiva del bien jurídico de la verdad.

De hecho, las mayorías que pretenden esta reforma de ninguna manera garantizan la verdad. Se puede observar en la modificación que quien tenga las estructuras mayoritarias de los partidos puede llevar sus consejeros a la Magistratura. Esto ya se dijo por parte de la gran mayoría de los bloques opositores. Por supuesto, eso no nos garantiza de ninguna manera proteger el bien jurídico de la verdad. En lo que hace al control de las mayorías, podría citar o hacer una metáfora de cuando Pilatos absolvió a Barrabás y castigó a Jesús, para dar un ejemplo: las mayorías siguiendo a las mayorías.

En mi opinión, creemos que se trata de un error conceptual garrafal la modificación del Consejo de la Magistratura y, por ende, desde el radicalismo nos vamos a oponer firmemente. Pero también pensamos que con inteligencia y sentido común debemos prepararnos para ser alternativa a este gobierno e ir en la búsqueda del debate de otra

modificación. Esta es una modificación parcial porque no tiene sentido jurídico ni tiene sentido común; y lo digo con todo respeto.

Hay cuestiones con las cuales, desde el punto de vista del espacio progresista, el radicalismo podría llegar a coincidir a veces con los grandes partidos nacionales y populares como es el Justicialismo. Sin embargo, este avance sobre la Justicia no se explica ni se justifica. Estamos perdiendo una oportunidad única para hacer dinámica y ágil a la Justicia.

Presencié la presentación que de esta reforma hizo el Poder Ejecutivo y tenía la esperanza –acá hay varios autores de la reforma del Código Procesal Penal para que avance el sistema oral en la Argentina, caso de los senadores Sanz y Guastavino– de que en este título de “Democratización de la Justicia” que le había puesto el gobierno en la presentación iba a estar incluido el cambio del Código Procesal Penal de la Nación para avanzar hacia un sistema oral que hiciera mucho más ágil y dinámica la Justicia. Pero no hay nada de ello. Solamente nos encontramos con este paquete de reformas que ha remitido el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación y que pretende imponerse a través de la mayoría. Seguramente será legal, pero no tendrá legitimidad política ni sentido común.

Desde el radicalismo, ratificamos nuestra oposición al dictamen en consideración, a este constitucionalismo popular que no va a tener asidero en el tiempo ni en la práctica ya que lesiona preceptos de la Constitución Nacional y tratados internacionales firmados por la Argentina. Nuevamente, hago un dramático llamado al oficialismo para que piense en este último tiempo de debate y para que reflexione: que no avance en estas modificaciones al Consejo de la Magistratura porque lesionan la independencia de poderes.

El radicalismo se va a seguir preparando en el tiempo para modificar estas cosas. Cuando seamos gobierno en el terreno nacional, popular y progresista, que pretendemos construir con sentido común e inteligencia, vamos a seguir haciendo respetar la Constitución de la Nación.

De este debate nos queda la esperanza de que sea la Justicia –otro de los poderes del Estado que aquí se intenta lesionar; y la Corte Suprema de Justicia como último intérprete de la Constitución de la Nación– la que finalmente ponga límites a este avance enviado por el Poder Ejecutivo que se trata de convertir en ley hoy.

Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich).– Tiene la palabra el señor senador López.

Sr. López.– Brevemente, para decir por segunda vez –porque ciertamente tratamos este tema por segunda vez después de que fuera a Diputados y viniera con algunas modificaciones– que, desde Nuevo Encuentro, vamos a acompañar.

Creemos que no se trata de que un gobierno avance sobre la Justicia. Sí creemos que hay un pueblo que avanza sobre las corporaciones. Esto es parte de un cambio mucho más grande, mucho más integral, definitorio de un cambio de época.

Creo que en la mirada de quienes expresan casi como dogmas algunas consignas en contra hay algo que no se ve, algo que no se ve bien o algo que no se comparte. En tal sentido, me parece que se pretende pasar por argumentos políticos, constitucionales y jurídicos cosas que no son ciertas. El eje de la crítica, quizás, pase por la invocada politización del Poder Judicial. Modestamente, me parece que es un eje falso.

Decíamos en la anterior sesión en la que debatimos sobre este tema que la política es la teoría del poder, la política es la teoría del Estado. El poder es un elemento del Estado, igual que el gobierno. Y el gobierno tiene tres órganos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Judicial forma parte del Estado y de la política, y es un poder político. No hay poder

que no sea político en todo lo que tenga que ver con la vida del hombre en sociedad.

De lo político a lo partidario hay un paso, porque si la política es la vida del hombre en sociedad, y desde el año 1994 nuestra Constitución dice en forma expresa que los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia; entonces, no veo por qué tengamos que pensar que los partidos políticos son una suerte de leprosarios a los que quien se acerca resultará infectado. Nosotros estamos acá, entre otras cosas, por participar de partidos políticos. Que algunos consejeros de la Magistratura vayan a ser sometidos al voto popular y que su postulación deba ser a través de los partidos políticos, en términos de la Constitución, nos parece que fortalece la democracia.

No hay jueces que no sean políticos ni mucho menos desprovistos de ideología; tal vez, quizás un Robinson Crusoe. Todos crecemos en un entorno espacial, geográfico, cultural, familiar, temporal y en medio de un cúmulo de circunstancias que moldean nuestras ideas, nuestras percepciones, nuestras convicciones, nuestros valores, nuestros sentimientos, y todo ese cuerpo de ideas es una ideología. Puede haber dos grandes grupos de ideologías, más allá de los nombres que se les ponga.

En la Argentina, a lo mejor, sea “radical y peronista”, a lo mejor sea “izquierda y derecha”, o a lo mejor, sea “progresismo y conservadurismo”. No hay nadie que no esté en uno de estos dos grupos, en uno de estos dos campos ideológicos; ni siquiera los jueces, porque los jueces no vienen de Marte, ni de la Luna ni ejercen un poder que viene de Dios. Son hombres y mujeres de nuestro mismo medio, de nuestro mismo entorno, con nuestras mismas virtudes, nuestras mismas carencias, nuestras mismas fortalezas, nuestros mismos valores o miserias y ejercen un poder que, por lo menos desde 1789 hasta esta parte, sabemos que es del pueblo. El mismo pueblo que tiene diputados, senadores, presidente, y que es el sujeto político por excelencia, el auténtico soberano.

Entonces, me parece que hablar de que se atenta contra la República es simplemente esto: una afirmación dogmática de un sistema que tiene doscientos años de vigencia que, a lo largo de esos doscientos años, estuvo y va a seguir estando bajo permanente transformación en tanto la vida del hombre en sociedad impone la necesidad de transformaciones porque la naturaleza de la dinámica social es el cambio. Vivimos en Latinoamérica y en el mundo un cambio de época. No podemos pensar que el sistema republicano de 1789 no va a estar sujeto a cambios ni, mucho menos, que el Poder Judicial va a ser la excepción a esos cambios.

En el ejercicio de la profesión de abogado, me ha tocado defender derechos de partes, es decir, adoptar una posición de parcialidad frente a jueces imparciales porque en el expediente en cuestión no están asociados a lo que defiende ninguna de las partes. En algunos casos, son jueces peronistas y en otros, radicales; y ciertamente, no puedo formular un juicio ni a favor ni en contra de los jueces y de las juezas con los que he trabajado en función de su ideología política. Tanto unos como otros pueden ser garantes de los derechos fundamentales de las personas, garantes de la democracia, garantes de derechos humanos, o pueden ser defensores de intereses corporativos minoritarios, de impunidad. La cuestión pasa absolutamente por otro lado.

Los órganos del gobierno son interdependientes. El Poder Judicial no aplica leyes si no hay un Parlamento que las haga. Un Parlamento no hace leyes si no hay un Ejecutivo que las promulgue y las publique. En realidad, los tres órganos somos independientes uno del otro. La independencia no es privativa del Poder Judicial ni de los jueces. Y somos todos dependientes de un programa constitucional que tiene que ver con materializar el bienestar general, que es el sentido de la organización constitucional de un pueblo.

Entonces, no debemos tener miedo a nuestros compatriotas jueces en función de su ideología. Podemos postular candidatos a consejeros de la Magistratura –tampoco estamos postulando candidatos a jueces– de distinta ideología, y podemos ganar o perder elecciones, todo eso forma parte de la dinámica democrática.

No voy a detenerme en aspectos técnicos del proyecto porque han sido absolutamente abarcados en la exposición que hizo el senador Fuentes y estamos totalmente identificados con su presentación del proyecto. Tampoco creemos que acá se esté violando la cuestión de la imparcialidad de un juez, porque eso se mide en cada expediente. Cada expediente tiene una parte y una contraparte, y ser parcial o imparcial tiene que ver con una posición respecto de cada una de las partes y de los intereses o los derechos que defienden en cada expediente. No sabemos de qué jueces estamos hablando. Estamos hablando de eventuales futuros consejeros de la Magistratura que quién sabe a qué jueces van a evaluar y van a proponer para que sean nombrados. ¿Cómo podemos hablar de violación de la imparcialidad?

Ni tampoco me parece que corresponde hablar de violación del derecho a ser elegido. El derecho a ser elegido, como todo otro derecho que nos da la Constitución, se ejerce de acuerdo con las leyes que reglamenten su ejercicio y, si las leyes nos exigen a los partidos políticos que tenemos que crecer o que podemos participar de determinadas competencias y de otras no en función de las magnitudes –que también son factores a computar–, la oportunidad la tenemos todos más allá de esta cláusula transitoria o de esta etapa coyuntural de estos dos primeros años o de esta primera elección de consejeros que se resuelve a también a partir de la elección de 2015.

Decía la senadora Díaz al principio, tratándose otro tema y citando la opinión de un senador o de una senadora –no recuerdo bien– en el diario *La Nación*, que se buscan jueces militantes que garanticen impunidad. ¿Cuál es el concepto que implícitamente va dicho respecto de la militancia cuando decimos “jueces militantes que garanticen impunidad”? Establecemos casi una sinonimia entre la militancia y la utilidad o la contribución que esto tiene a la impunidad.

¡La verdad es que ojalá todos los jueces, todos los profesionales, todos los trabajadores y todos los seres humanos que vivimos en sociedad tengamos vocación y compromiso militante, porque eso es comprometernos con nuestra historia, con nuestro tiempo, con nuestro pueblo! No veo una enfermedad en la militancia ni creo que la vocación militante y la pertenencia a un sistema de ideas o a una ideología convierta a nadie en títere de nadie ni ponga en crisis la independencia de criterios que es, en realidad, la virtud que todo hombre y toda mujer debe tener no solo para ser juez sino para llevar adelante la administración de una familia, para cumplir una función en un Parlamento, en un Ejecutivo.

No creo que la independencia de criterio pueda ser puesta en crisis sino que estamos también cabalgando o construyendo un argumento sobre la hipótesis de la mediocridad y de la ineptitud de abogados que eventualmente van a ser consejeros de la Magistratura, jueces u otros profesionales. Me parece que no podemos dar por sentado eso. Están, caso por caso, las herramientas para resolver las cuestiones que se puedan plantear; será cuestión de usarlas. Habrá causales de recusación, de excusación y demás. Eso existe ahora. No es algo que se va a inventar a partir de ahora.

Así que, en síntesis, señalo que dimos una suerte de recorrido circular: arrancamos el 1º de marzo, con los anuncios de la presidenta al inaugurar el período de sesiones ordinarias de que íbamos a trabajar este año sobre esto; luego, ello se materializó con el

envío de los proyectos, las comisiones, los debates, la primera sesión, el pase a la otra Cámara y la vuelta aquí, en un caso como este, cerrando este viaje circular, felices de poder estar materializando este paso de democratización de la Justicia en beneficio del interés del conjunto de nuestro pueblo.

Por estas razones, vamos a ratificar nuestra posición favorable y adelantamos que vamos a votar afirmativamente este proyecto.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador PetcoffNaidenoff.

Sr. PetcoffNaidenoff. – Señora presidenta: yo creo que a esta altura del debate, se ha dicho bastante en cuanto al tema a tratar. Solo vale la pena recordar que hace aproximadamente quince días, en este recinto, el oficialismo defendía a rajatabla este proyecto denominado de “democratización de la Justicia” centralizado en dos aspectos: por una parte, en la elección popular –esto es: la soberanía popular y nada más que el pueblo tiene el derecho y la solvencia como para elegir quiénes son los miembros que van a integrar el Consejo de la Magistratura– y, por otra, el segundo aspecto en el que se centralizó con mucha fuerza para argumentar a favor de este proyecto de reforma tenía que ver con el recorte de las atribuciones presupuestarias, administrativas y de superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para que recupere esas facultades el Consejo de la Magistratura conforme el artículo 114 de la Constitución Nacional.

Como lo expresaron nuestros miembros informantes, nosotros rechazamos de plano estas propuestas porque el nudo, el aspecto central, que tiene que ver con la partidización del Consejo, con la ruptura de equilibrios de la que habla el artículo 114 de la Constitución que tanto se discutió y se debatió hace dos semanas atrás, no se ha modificado, permanece inalterable.

Lo que sí queremos decir en esta primera parte es que nos parece cuanto menos sugestivo y llamativo el giro de ciento ochenta grados del propio oficialismo. Esto sí lo tenemos que decir, porque yo recuerdo que quince días atrás, en este recinto, el señor senador Fuentes señalaba lo siguiente: El otro día veía que un miembro de la Corte, no categoría sub 20 precisamente, recomendaba, en torno a la inquietud que manifestaba en cuanto a que se avanzaba peligrosamente sobre las atribuciones de administración de los recursos por parte de la Corte Suprema de Justicia, que leyéramos la Constitución. Pero yo le voy a recomendar a ese magistrado que lea el 114, donde la administración de los recursos del Poder Judicial está determinada por el texto constitucional y no por ley.

Esto también lo dijeron otros senadores del oficialismo. Nadie objeta que tengan derecho a cambiar –lo pueden hacer– ni vamos a entrar en especulaciones de por qué lo han hecho ni de por qué la Corte defiende lo que defiende; o si defiende sus propios recursos y no avanza en otros aspectos. Lo que sí vamos a dejar en claro es el aporte, el notable aporte del propio oficialismo a la devaluación del debate parlamentario.

En los últimos tiempos, asistimos a una degradación del debate parlamentario. Acá, los proyectos se retocan a pedido de Verbitsky o por una nota elevada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que eso es devaluar el debate y, fundamentalmente, subestimar la inteligencia colectiva de todos los que integramos este cuerpo. Me parece que esta es una reflexión más que importante a esta altura de las reformas que tratamos.

En segundo lugar, se insistió con vehemencia en la cuestión electoral. La verdad es que esto resulta un verdadero disparate, un despropósito. Ya en el Senado, cuando lo tratamos, inventaron una elección nacional con un distrito único para elegir consejeros de la

Magistratura. Han impuesto una cláusula no restrictiva sino que colisiona con el artículo 38 de la Constitución Nacional prohibiendo la creación de partidos políticos al solo efecto de elegir consejeros de la Magistratura. Esto, cuando el propio artículo 38 establece que los partidos políticos son instituciones fundamentales de la República y, en tal sentido, se pueden organizar y tienen derecho a participar en las elecciones no para determinadas categorías: a participar en las elecciones y garantizar competitividad. Pero como no les alcanzó con esto, fueron por más y ahora vienen con esta cláusula traída de los pelos donde exigen y rompen justamente toda la doctrina del vínculo jurídico entre un partido provincial y un partido nacional. Entonces, nos exigen que los partidos cuenten con 18 distritos con la misma denominación que la agrupación nacional. ¡Oh, casualidad! El señor senador Giustiniani decía en el debate en comisión, durante la semana pasada, que en las últimas elecciones del 2011, el único partido que cumplió con el requisito de contar con la misma denominación en 21 distritos, no en 18, fue el Frente para la Victoria. Otras fuerzas políticas, con sus propias particularidades, presentan otras realidades. Porque hay frentes que se constituyen de acuerdo con el territorio; de acuerdo, repito, con sus propias realidades.

Entonces, viene esta reforma. ¿Por qué lo hacen? Al cerrar el debate durante la sesión en que se trató por primera vez este tema, el señor senador Pichetto decía lo siguiente: Lo que yo sostengo es que le tienen miedo a la voluntad popular. Creen que van a perder y, entonces, como creen que van a perder, no quieren una ley que finalmente deposite en el pueblo, en la ciudadanía, la elección de los consejeros.

La verdad, con esta reforma, el tema es otro, y no solamente con la restricción a un partido de constituirse para elegir consejeros. Es muy fácil o un simplismo decir que es el partido de los abogados. Resulta mucho más profunda la cosa porque colisiona con el artículo 38 de la Constitución. Lo cierto es que con esta reforma, el temor electoral lo tienen ustedes, lo tiene el gobierno.

El gobierno está con pánico electoral: únicamente el pánico electoral, el temor a la derrota, el tomar conciencia de que la perpetuidad no existe en materia de poder –quizá, el poder será eterno pero no las personas que lo ejercen–, pueden llevarnos al terreno de que hoy estemos tratando una reforma electoral tramposa, enmarañada, rastrera, que colisiona y choca contra la pared y contra todos los principios de garantías constitucionales. ¡Pánico electoral! No el de la oposición, el del propio gobierno. Por eso ponen palos en la rueda con cláusulas restrictivas, prohibitivas, proscriptivas. ¡Estas son cláusulas de proscripción! Me refiero a la creación de partidos, que colisiona con el artículo 38 de la Constitución, y a esta reforma que introdujo la Cámara de Diputados.

Miren lo que nos decía el señor senador Pichetto, el jefe del oficialismo, con preocupación –por lo menos, eso es lo que yo creo– en el debate en comisión durante la semana pasada: ¿Por qué van a creer que vamos a llevarnos puesto todo? La verdad es que hay consignas que se construyen en el marco de la sociedad, especialmente, en el espacio de los medios.

En verdad, no sé si esto lo tengo que tomar de manera hasta casi irónica. ¿Quién convocó al “vamos por todo”? ¿Tomaron nota de lo que han hecho en materia electoral en los últimos años con las listas testimoniales, con las colectoras, con las listas de adhesión; en el 2009 con el adelantamiento electoral, con unas primarias absolutamente anticipadas? ¿Eso no es llevarse puesto todo desde lo electoral? Y si pasamos a otro terreno, ¿no es llevarse puesto todo lo que hacen con los datos del INDEC? ¿Mentir a la gente con la inflación no es llevarse puesto todo? ¿Modificar la estructura y las facultades de la Fiscalía

de Investigaciones Administrativas para impedir que órganos de control funcionen en la República no es llevarse puesto todo? ¿Lo que intentaron hacer con el auditor general, con el titular de la Auditoría General de la Nación?

¿Qué es el “vamos por todo” sino lo que estamos observando? El “vamos por todo” venía con otras reglas de juego. Pero ahora pretenden hasta el aniquilamiento y la no participación de los propios partidos en una libre competencia electoral. ¡La verdad es que esto ya roza...! ¡Por supuesto que esto es inconstitucional! Y van a chocar contra la pared.

El gobierno se va a estrellar contra la pared. Se va a estrellar en la contienda judicial porque le va a ir muy mal, porque hay jueces probos y honestos en este país y esto no puede prosperar porque está teñido de inconstitucionalidad por donde se lo mire. Pero ¿saben qué, fundamentalmente? Les va a ir mal porque el pueblo se cansó; porque ustedes subestiman la inteligencia colectiva de los ciudadanos argentinos. Este pueblo; muchos en este país se han movilizado en los últimos siete meses en tres oportunidades diciendo basta a la mentira, basta a la corrupción, basta a la impunidad. La respuesta del gobierno es reírse en la cara o la respuesta de algunos amigos del gobierno es pesar el dinero. Entonces, les va a ir muy mal.

Más allá de lo que intenten con estas trapisondas, con estas agachadas y con estas modificaciones que no tienen cabida, por más que especulen con quedarse con los números, van a perder. Y van a perder las elecciones porque uno puede armar las mayores patrañas desde el punto de vista electoral o elucubrar todas las estrategias, pero cuando el pueblo les da la espalda no hay estrategia que alcance. Fundamentalmente cuando se trata de un pueblo que tiene y exige que se recupere el sentido común; y ese sentido común lo perdió lamentablemente el gobierno desde hace mucho tiempo.

Por esas razones, nosotros votamos en contra, señora presidenta

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Morandini.

Sr. Morandini. – La verdad, señora presidenta, es que hay que esmerarse para no reconocer la inutilidad del esfuerzo de argumentación, ya que quedamos haciendo un monólogo cancelando lo que tendría que ser este recinto: la posibilidad de que los argumentos modifiquen los comportamientos.

Tengo que hacer otro esfuerzo para no ser cínica cuando, en la defensa de este proyecto, se interpretan las críticas como argumentos golpistas; es decir, no el derecho a hacer la crítica sino como agravios al gobierno. De modo que a pesar de esto que le digo de tratar de no ser cínica, no puedo menos que recordar la ironía que se le adjudicaba a Bismarck cuando decía: “No quieras saber cómo están hechas las leyes y las salchichas”. En realidad, no era Bismarck el que decía esto sino que dicha frase pertenecía a un prosista o un articulista de un diario de Estados Unidos en el siglo XIX, que lo decía de una forma menos cínica. Si me permite leer, decía: Las leyes, como las salchichas, dejan de inspirar respeto en proporción directa a cómo han sido hechas.

Este proyecto que se nos presentaba en un marco de grandilocuencia, de venir a democratizar, tiene nada más que un mes de tiempo: creo que hoy se cumple exactamente un mes desde que llegó a este recinto. De hecho, mirando cómo ha sido tratado, cómo ha sido el debate con este objetivo tan grandilocuente al que nadie puede oponerse, voy a repetir en este recinto que la idea ya desnuda la concepción de poder cuando se cree que es el poder el que democratiza. En realidad, la democratización viene de abajo hacia arriba cuando, en pos de la libertad y de los derechos, una sociedad se apropia de esos derechos.

Así llegó este proyecto con una gran presentación. Así, terminamos haciendo un debate como el de hoy o como el que vino de la Cámara de Diputados, enmarcado en esa

odiosa y escandalosa sesión. Permítame hacer un paréntesis: nunca entendí por qué hay que sesionar en la madrugada. No hay urgencia; el país no está en guerra. Estamos trabajando para tener normalidad democrática. Sin embargo, esas sesiones que se desarrollan toda la noche, atentan contra la integridad de los legisladores, que tienen que estar en posesión de su mejor situación emocional para poder honrar la confianza que significa estar sentados en cada una de las bancas. Terminamos hablando de dinero y terminamos hablando de reforma electoral: una reforma electoral que tiene mucho más de trampa o de viveza electoral al volver a cambiar las reglas de juego en medio de un proceso electoral.

Por eso, permítame, señora presidenta, insistir en algunos conceptos. A riesgo de repetirme –ya lo he dicho otras veces–, me parece que tenemos conceptos completamente diferentes de lo que es la democracia. La democracia son sus reglas, sus procedimientos y sus valores. Las reglas de la democracia tienen una preliminar, una base, que es la Constitución. La Constitución no son las reglas del juego: es la base sobre la que se desarrolla el juego político electoral; pero la Constitución es la base. En tal sentido, las senadoras mujeres me van a entender si me refiero al cañamazo sobre el que nos enseñaban a bordar. Nunca pude sacar mi mejor punto cruz; no sé bordar pero sí recuerdo el cañamazo. El cañamazo es la Constitución sobre la que cada uno de nosotros debe sacar su mejor expresión en función de lo que cree, de lo que representa. De modo que me parece que confundimos lo que son las reglas de juego del desarrollo político democrático con esta preliminar que es la Constitución.

Hay otro valor que tiene la democracia. La democracia es el único sistema que, en tanto legitima el conflicto, nos obliga a trabajar sobre ese conflicto, porque es el sistema que se encontró para que los gobernantes puedan ser removidos sin violencia. Este valor fundamental de que no haya violencia es lo que le da fortaleza a la democracia. Solo cuando se respetan los procedimientos y cuando se respetan las reglas, uno pasa a ser un adversario político, no un enemigo político. Esto es lo que uno siente todo el tiempo en el debate: la descalificación o el pretendido debate ideológico de lo que no tiene nada que ver con la ideología porque la Constitución no es de derecha ni de izquierda. Precisamente, lo que la Constitución hace es garantizar el derecho a pensar de una manera o a pensar de otra.

Otros valores sobre los que se apoya la democracia son la tolerancia, la diversidad y esta posibilidad de que el debate sea el que vaya cambiando las conductas colectivas. Gracias al debate, las revoluciones sí silenciosas han sido incorporadas. Así lo demuestra el hecho de que varias mujeres estemos sentadas en estas bancas; el de que este Congreso haya aprobado el matrimonio igualitario. Eso se consigue porque hay un debate en el que participamos todos, porque se respeta la opinión del otro y porque vamos modificando conductas y comportamientos.

Estamos ante algo que no deja de ser paradójico. Si la paradoja es la forma que toma la historia para burlarse de nosotros, lo paradójico es que a treinta años de democracia, con este proyecto se esté hiriendo a la democracia. No porque se les vaya a quitar la independencia a los jueces; en realidad, no importa la pertenencia ideológica partidaria de un juez porque tiene que ser juez antes que eso, sino porque el problema es que tenemos contaminada la cultura de convivencia, la cultura política.

Al respecto, a lo largo de este debate hemos escuchado cosas que son claramente antidemocráticas como, por ejemplo, creer que ser libre pensador es algo malo cuando es inherente a un sistema de libertades que garantiza el derecho a opinar. O como uno ha escuchado de aquellos que defienden el Consejo de la Magistratura decir que, como en los años 60 fueron los militares y en los años 90 fueron los economistas, ahora es el tiempo de

los constitucionalistas, dándole un carácter golpista a los que debería ser un debate racional que no tenga la premura que ha tenido este debate.

De modo que el problema de su respeto, volviendo a la frase irónica inicial de la relación entre las salchichas y las leyes, las salchichas mal hechas intoxican, hacen daño; y las leyes mal hechas, cuando no son democráticas en su procedimiento, también intoxican la convivencia democrática. Si realmente veníamos a hacer una reforma de tal magnitud, no entiendo cómo se puede hacer una reforma con sólo una parte de la sociedad. Quisiera apelar al mejor sentido, a la mejor responsabilidad, de los hombres y mujeres de bien que hay en el oficialismo. Tienen que saber que la sociedad está indignada y que hay una gran preocupación porque hay miedo, porque, como decía Norberto Bobbio, poder y derecho son dos caras de una misma moneda. El poder crea derechos pero el derecho controla al poder. Si uno se pone del lado del poder corremos el riesgo de tener una visión despótica. La visión democrática es la que se pone del lado del derecho.

De modo que esto es lo que debemos tener por encima de nuestras cabezas: que la Constitución Nacional sea respetada por todos, porque sólo con reglas respetadas los que hoy estamos en esta posición de opositores podremos estar mañana como gobernantes, pero con igualdad.

Reitero nuestro rechazo a este proyecto y vuelvo a instar a la racionalidad y al mejor espíritu democrático del oficialismo, porque hoy tienen la mayoría pero queda afuera la mayoría del clamor popular. No son golpistas todos aquellos que vinieron a advertirnos sobre la preocupación que da la sanción de este proyecto. ¿Cómo se puede decir que esto es democrático cuando se ha dejado afuera a esta mayoría de clamor popular que nos advierte: “Cuidado con lo que van a consagrar”?

En definitiva, se consagrará con la mayoría circunstancial que tiene este Senado. Y el que una ley tenga que ir tantas veces a la justicia es lo que mejor desnuda nuestra incapacidad política de no construir consensos, que es el otro valor en el que se sustenta la democracia. Si efectivamente venimos a democratizar con estas ideas épicas, no hay democracia posible cuando queda fuera de la democracia la mitad del país.

Sra. Presidente (Rojkes de Alperovich). – Senador Vera: tiene usted la palabra.

Sr. Vera. – Señora presidente: como suelo hacer siempre que puedo, voy a hablar muy poco y a tratar de llamar al pan pan y al vino vino.

Aquí se han dicho todos los fundamentos por los cuales este proyecto de ley es inconveniente. También se ha dicho qué es lo que pensamos que persigue el autor del proyecto, que es el Poder Ejecutivo. Simplemente voy a permitirme rescatar una o dos cosas para hacer notar la contradicción y contribuir, de algún modo, a demostrar que el objetivo que persigue el Poder Ejecutivo es tener una justicia adicta, palabra que no sé si es peyorativa, si ofende a alguien o no.

Sin embargo, no tengo dudas por lo siguiente: se ha dicho aquí, hasta la reiteración, por qué le vamos a tener miedo –porque eso es en esencia lo que dispone el proyecto del Poder Ejecutivo– al voto popular para elegir a los consejeros. La verdad es que no es cierto que se trate de la llave principal que tuvo en cuenta el Poder Ejecutivo para disponer estas medidas porque, si así fuera, también el voto popular dispondría la elección de quienes representan al poder político, que somos los legisladores. En realidad, no va por esa vía su elección, sino por los bloques; y tampoco se hubiera dejado de someter al voto popular las designaciones que hace el Poder Ejecutivo. Entonces, eso es mentira.

La verdad es que he tratado de encontrar, escuchando, los argumentos que hagan razonable el sostenimiento de la posición del Poder Ejecutivo y no los encuentro. He visto

el esfuerzo enorme que ha hecho el doctor Fuentes, tanto la primera vez que lo tratamos como hoy para fundar el proyecto y no existe fundamento alguno. Diríamos: habló lindo el doctor pero no lo entendimos. La verdad es que hizo mucho esfuerzo, mucho hincapié, en hacer notar la sabiduría del voto popular para elegir a los consejeros pero, la verdad, eso no es cierto por lo que dije antes.

Además, para no explayarme tanto sobre esto porque aquí se han dicho todos los fundamentos técnicos y las valoraciones políticas también, si estuviésemos equivocados quienes decimos que la elección partidaria de los consejeros va a traer parcialidad, como lo hice en la sesión en que se aprobó este proyecto, vuelvo a decir lo mismo. ¿Por qué alguno de los señores o señoras senadores del Frente para la Victoria no vota en contra del anhelo del Poder Ejecutivo hoy? Porque están respondiendo a una necesidad, a un proyecto de su partido. Entonces, ¿por qué tengo que pensar que los jueces sí, cuando están amenazados o expuestos a esta forma de ser elegidos o destituidos? Incluso, más severa es la amenaza a los jueces de la que tenemos los legisladores porque si uno se aparta del bloque, en todo caso, tendrán que aguantarlo hasta que termine el mandato. Sin embargo, a los jueces, si se apartan del mandato del partido que los llevó, rápidamente le harán un juicio político y lo destituirán.

Entonces, ¿qué razón tengo para pensar lo contrario? Si los señores legisladores, a los que respeto, votan conforme el pedido de su partido, ¿cómo vamos a sostener que los jueces van a poder seguir siendo independientes? Así que por eso dije: al pan pan y al vino vino.

Este gobierno busca una justicia que pueda manejar. Y ya lo ha demostrado. Alguien, también, en un esfuerzo por admitir la independencia espiritual de ciertas personas, podría decir que aunque lo nombre el partido de gobierno, una vez que sea juez va a hacer lo que deba hacer según la ley. Pero estamos en presencia de partidos políticos que en muchos casos, este es uno, no admiten una sola disidencia. ¿No venimos acaso de haber destituido jueces, fiscales y jefes de fiscales porque simplemente hubo apreciaciones que no les convenía desde el punto de vista del gobierno?

Así que para cumplir con aquello que iba a hacer breve, digo que estamos en presencia de un proyecto de ley que no busca el bien común, que es falso que pretenda mejorar el servicio de justicia que, por otra parte, es cierto que hay que mejorar. Este proyecto busca otra cosa y lo estamos viviendo. Lamentablemente, venimos en un proceso de concentración de poder y se nos hace imparable, pues estamos respetando, como corresponde, los votos y aquí están los votos de la mayoría. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Tratar de resistir con la palabra. Quizá no podremos parar este proyecto aquí, salvo un arranque de conciencia por parte de algunos legisladores del Frente para la Victoria que tengan miedo del juicio de la historia, o prevean un juicio adverso de la historia y no acompañen. Sin embargo, por la experiencia que tenemos supongo que se va a aprobar.

En definitiva, hay que resistir porque alguna vez la verdad se va a imponer. La verdad es que se pretenda una justicia domesticada, una justicia que no se dé el lujo de hacer lo que tiene que hacer según las leyes.

Sra. Presidente (Rojkes de Alperovich). – Senador Cabanchik.

Sr. Cabanchik. – Presidenta: continúa un debate que ya tuvimos en la Cámara. No voy a repetir ahora los argumentos que di en la sesión que debatimos este proyecto con relación a la reducción electoral partidaria que se hace de la propuesta de democratización del Consejo de la Magistratura. Naturalmente, mantengo aquellos argumentos que sostuve

vinculados con el cambio de las mayorías para la resolución y la acusación ante el Jury de Enjuiciamiento, y con el hecho de que los cargos se van a adjudicar por mayoría y minoría, haciendo de esta manera muy poco eficaz –si no nada eficaz– la representación que sea por minoría en el futuro Consejo de la Magistratura.

Todo eso ya lo argumenté. También ha sido argumentado por otros en esta Cámara y en la Cámara de Diputados. Todo esto tiene una presencia pública suficiente para que sea claro que divide aguas entre el pro y el contra respecto de este proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura.

Quiero referirme a algunos aspectos que no me referí entonces, porque uno economiza los tiempos y ahora asumo esta intervención como una prolongación de aquella. No hablé, por ejemplo, de la cuestión de la constitucionalidad o no constitucionalidad de este proyecto, que es uno de los temas más repetidos en el debate en lo que va de esta jornada, pero también en muchos otros ámbitos.

También quiero retomar algunas comparaciones que el senador Pichetto ha hecho en la sesión anterior, respecto de la comparación con el sistema americano y a ponderar ese tipo de comparaciones.

Creo que es evidente para todos que no estamos en el mejor contexto político argentino para discutir de esta forma la reforma al Consejo de la Magistratura. No es un buen contexto y, de alguna manera, todos los intervinientes tal vez hacemos al contexto. Algunos más que otros. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo nacional tiene mayor capacidad de juego para armar contexto. El Frente para la Victoria, como mayoría parlamentaria, lo mismo. Así que le cabe mayor responsabilidad a quienes más capacidad de conformar el contexto tienen.

En ese sentido, creo que corresponde una crítica, y ojalá hubiera también una autocrítica por parte del modo en que se hizo el tratamiento de este proyecto en esta Cámara.

En esta Cámara hemos dedicado jornadas enteras a discutir la habilitación del voto para los dieciséis y diecisiete años, que ahora por primera vez se va a materializar. Hemos hecho por lo menos tres reuniones de comisión con ese tema, con audiencias públicas, donde intervino el conjunto de la sociedad. Lo mismo hicimos con respecto al conflicto con el campo, cuando discutimos la Resolución 125, o con la Ley de Medios, que no sólo se debatió dentro del Congreso Nacional sino también en otros foros fuera de esta casa.

Es decir, casi con todos los proyectos el Congreso Nacional ha dado un debate en audiencias públicas, extendido, con varias semanas, escuchando las diferentes posiciones. En este caso no se ha hecho así. Ayer hubo una audiencia que se realizó en el Salón Illia, pero convocada por un sector de la Cámara y no convocándose el plenario de comisiones por la Presidencia de la Cámara.

Entonces, me parece que el contexto es malo, en parte, porque se lo hace mal y se lo hace peor. Si no, en términos abstractos, uno podría discutir académicamente si es bueno tener o no un Consejo de la Magistratura. Es discutible. Si debe estar electo por voto popular universal o no, también es un tema discutible; como también lo es si los dos tercios o no los dos tercios; si en la lista partidaria o no... Cada uno de esos temas puede tener dos bibliotecas: una a favor y otra en contra, y eso es discutirlo en abstracto; por eso digo, como se suele decir, académicamente.

Pero discutido de esta forma, en este contexto político, la discusión cobra otro sentido. Y entonces están las reiteradas interpretaciones de que se trata de un proyecto de ley para domesticar a la Justicia, para subordinarla al poder político de turno, etcétera.

Lamentablemente es muy difícil refutar esos argumentos porque nacen a la vera de este contexto ya distorsivo en la discusión. Entonces, ¿cómo discutir de un modo que no sea abstracto y que, a la vez, no esté subordinado a esta distorsión contextual? Ese es el problema para que el debate, de alguna manera, logre trascender la situación en la que se encuentra.

Entonces –además del sentido técnico que luego precisaré– elijo referirme al aspecto constitucional en el sentido de que hay una congruencia del sistema de leyes, que tiene que ver con las tradiciones dentro de las cuales los sistemas surgen. Por ejemplo, comparar nuestro sistema con el sistema de los Estados Unidos es abstracto –y ojalá esté escuchando esto el senador Pichetto, o luego lo lea–, porque ¿qué tomamos al hacer la comparación? Si yo tomo el sistema de los Estados Unidos, en ese sistema hay nombramiento, por ejemplo, por comisión. En ese caso, el gobernador de cada Estado nombra a los jueces seleccionados de una lista de candidatos elegidos de manera independiente por una comisión integrada de abogados, legisladores, ciudadanos legos, y a veces intervienen jueces. Otras veces, otros Estados tienen elección popular, que puede ser en elecciones partidarias o no partidarias. Esto es parte del sistema en Estados Unidos. Pero en ese sistema, por ejemplo, el presidencialismo –que a veces se dice también que en Estados Unidos hay un sistema presidencialista igual que en la Argentina– es mucho más débil que aquí.

En el presidencialismo de Estados Unidos, en cuanto a las facultades de alguna manera discrecionales, el presidente, sólo tiene el veto parcial. No tiene veto total, no tiene Decretos de Necesidad y Urgencia, no tiene iniciativas que le son de exclusividad como presidente. Es decir, ¿qué comparamos?

Reiteré y señalé que yo presenté un proyecto para candidaturas independientes a diputados, y propuse al Frente para la Victoria que se incorporara en el proyecto la posibilidad de candidaturas independientes al Consejo de la Magistratura.

Si comparo con el sistema de Estados Unidos, no hay ninguna restricción para ningún cargo en los Estados Unidos respecto de lo partidario y de lo no partidario. En Estados Unidos se puede ser candidato fuera de los partidos políticos, aun para presidente de la Nación.

Obviamente, de facto es muy difícil que un candidato sea independiente para presidente de la Nación en Estados Unidos. Más fácil es si el cargo es menos alto. Pero de todas maneras, si vamos a analizar el sistema jurídico, que seguramente representa una tradición, que cristaliza una tradición, eso es el sistema en Estados Unidos.

Entonces, comparar sistema con sistema requeriría comparar sistémicamente todos los aspectos, y esto no es lo que sería conducente para votar hoy, por sí o por no, este proyecto.

Por eso, si ese es el argumento –y ese es el único argumento directo que encontré a favor del proyecto, es decir, el argumento de que en otros Estados que incluso pudieran ser un buen espejo para miembros del campo opositor– se hace ya así, por voto popular. Por lo cual, ¿qué tiene de malo que lo hagamos nosotros? Me parece que ese no puede ser un buen argumento.

En sí mismo, el Consejo de la Magistratura de la Argentina fue introducido como un elemento constitucional en la Constitución reformada en 1994. Por lo tanto, ¿qué contexto tenemos para juzgar lo que hoy tenemos que hacer con el Consejo de la Magistratura?

La tradición jurídica argentina, muy diferente a la de Estados Unidos, por cierto, en un sistema que tiene una pata en Estados Unidos y una pata en Europa, por decirlo así, en

sus antecedentes, en sus modelos inspiradores y actualizados, y la Constitución reformada, que además es la Constitución que rige hoy como ley suprema de la Nación.

Allí se incorpora el instituto del Consejo de la Magistratura, y este es un instituto que se incorpora con determinado espíritu, dado por la Convención Constituyente, y por eso es importante que el legislador –en este caso, entonces, nosotros– lo tengamos en cuenta en nuestros fundamentos y en nuestras decisiones, pero además en la letra del artículo correspondiente: el artículo 114.

Ahora entonces me voy a limitar a leerlo y a hacer un análisis de su posible constitucionalidad o inconstitucionalidad. Se habla mucho de ese aspecto y creo que se habla con ligereza. Creo que dentro del mal contexto está el modo en que se imputa constitucionalidad o inconstitucionalidad a los proyectos.

No quiero sumar distorsión –lo que a mi juicio es distorsión– en el debate. Quiero, al contrario –y me parece que es el rol que debo cumplir en este caso, por lo menos, o que me doy, y que creo que es representativo de una corriente del Estado de la Ciudad de Buenos Aires y de la opinión pública– tratar de esclarecer.

El artículo 114 dice: "El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial". Primer párrafo. No está implicado en esta acusación de constitucionalidad o no. "El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal." Y continúa el artículo: "Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico", etcétera. El núcleo de lo constitucional o inconstitucional es ese pasaje. Y "que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular [esto se refiere, evidentemente, a los diputados y los senadores que integrarán en el futuro el Consejo –que integrarán en el futuro, digo, respecto de la sanción de este artículo de la Constitución]–, de los jueces de todas las instancias y de los abogados.". En este caso, la redacción no es la más feliz, como sucede en otros pasajes de nuestra Constitución, tiene opacidad, por lo tanto, requiere interpretación. Hay letra constitucional que no requiere interpretación, pero esta sí lo requiere, porque la expresión "la representación de" es ambigua, porque puede referir a que los representantes son políticos, jueces o abogados, o a que los representados lo son. Es decir, ¿dónde apoya el término "representación"? No dice taxativamente que el votante debe ser juez o abogado para reducir el problema a su expresión más clara, o al académico, podría ser también. No dice taxativamente eso el artículo 114. Si dijera eso, no habría discusión y este proyecto sería claramente inconstitucional. Porque si dijera que solo los jueces votan jueces, y que solo los abogados, abogados, estaría clara la discusión. Pero no lo dice así; dice: "la representación de", y con eso se abre a la interpretación.

Quiero compartir lo que ofrezco como interpretación de este artículo, la cual me parece congruente. ¿Qué es "un representante de", en este caso, para reducir la cuestión a personas y a representación política? Alguien representa a un conjunto de representados. Para elegir presidente de la Nación, por ejemplo –tomo ese ejemplo porque me parece paradigmático y se ve claro–, se requieren dos cosas. Una es estar representando a votantes que tienen una condición común, y que a su vez es condición necesaria para ser candidato. ¿Cuál es esa condición común? La de pertenecer a la clase de los argentinos es la condición común –por opción o por ser natural del país–, es la cualidad que deben tener el votante y el votado. A su vez, el votado es representante porque es votado para ello. Esas son dos

condiciones que deben ser satisfechas. Es decir, una condición es la propiedad que se tiene: ser argentino en el caso ese, y ser juez en el caso de representar a los jueces. Esa condición se debe tener; esa condición está contemplada en el proyecto, pero no está unida al otro aspecto: el de ser votado en tanto juez por otros que tienen esa misma condición.

En un ejercicio de fantasía o de imaginación, los jueces podrían ser votados todos por no jueces en la próxima elección para el Consejo de la Magistratura. Pero, de casualidad, o por un boicot, todos los jueces del país se niegan a votar en protesta de esto. Entonces, ese juez va a representar su calidad de juez, pero no va a representar al voto de jueces. Y lo mismo sucedería con el abogado, con el académico o con quien fuere. Se exceptúa de esto a los diputados y senadores, quienes sí ya han sido electos, no para eso pero sí posiblemente para eso, y el miembro del Poder Ejecutivo. Esto último es totalmente incongruente en este proyecto, porque el miembro del Poder Ejecutivo es designado por un miembro del Poder Ejecutivo, quien puede ser que por delegación de la Presidencia –que sí fue votada– elija a alguien. De todas maneras, eso es todo indirecto, y el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura no es votado por nadie.

Entonces, es incongruente el tratamiento que se les da a aquellos a los cuales el artículo 114 de la Constitución dice que debe procurárseles armonía; entonces, hay opacidad.

Aquí la incongruencia es porque se distorsiona el concepto de representatividad. El representante, además de tener la cualidad compartida con el que lo vota, debe ser votado también en esa calidad. Es decir que las dos condiciones deben ser satisfechas. Pero este proyecto de ley no satisface esa doble condición. Incluye a jueces y abogados en las listas, pero no los incluye para ser votados por sus pares. Y además, los incluye en un contexto partidario. Por lo tanto, no se cumple, en esta interpretación, con el artículo 114 y no se procura el equilibrio, lo cual es claro, no es interpretable. Que no se procura el equilibrio es claro, porque todos son votados en una lista partidaria mediante el voto universal. Además, el miembro del Poder Ejecutivo no se vota en absoluto.

Por estas razones, creo que efectivamente, a pesar de que es a través de una interpretación –que como tal es discutible–, este proyecto es inconstitucional respecto del artículo 114 de la Constitución. Y si hay otra interpretación mejor que esta y contraria, le daré la razón a esa interpretación si la encuentro. Por ese motivo, y por el contexto distorsivo en que se presenta este debate, creo que es inconveniente el paso que vamos a dar al tener esta reforma del Consejo de la Magistratura; no porque esté en contra de la democratización, ya que me parece muy bien, y no porque esté en contra del voto universal. A pesar de que creo que hay aspectos discutibles que pueden tener biblioteca a favor y biblioteca en contra, de todas maneras, no creo que este sea el mejor proyecto. No es un proyecto congruente con nuestra Constitución reformada en 1994 ni con la tradición judicial, tiene a la mayor parte de la comunidad judicial en contra y es parte de una conflictiva política mal resuelta en el presente argentino.

Por todo ello es que no acompañaré este proyecto.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Senador Linares.

Sr. Linares. – Presidenta: trataré de usar menos de los diez minutos de que dispongo.

Ha vuelto este proyecto que ya hemos debatido en profundidad hace días.

Cuando escuchamos a la presidenta en la asamblea anual decir que iba a mandar proyectos para la democratización de la justicia, me pareció interesante el título. Creo que era una medida que todos apoyábamos o, al menos, suscribíamos. La justicia no anda bien en el país, en general. Hay que empezar aclarando que esta justicia que hoy estamos

tratando no tiene nada que ver con la justicia cotidiana de todas las provincias, ya que tienen problemas propios con su justicia. Estamos hablando de la justicia nacional y federal que actúa sobre Capital Federal y algunos fueros específicos en los que está involucrado el Estado nacional. Particularmente, es la justicia que, eventualmente, tiene que juzgar a los funcionarios nacionales que son denunciados por algún tipo de error o de sospecha sobre su gestión.

Uno tiene una formación más vinculada con lo cartesiano, con lo cual esta historia de que siempre hay dos bibliotecas a mí, en verdad, siempre me cuesta interpretarla, porque no puedo creer que, después de analizar las palabras una por una, siempre haya dos bibliotecas. Entonces, considero que este es un tema político.

Aquí hay abogados de gran calidad, tanto en el oficialismo como en la oposición, que han desmenuzado claramente los pro y los contra de este proyecto. Entonces, me hubiera gustado mucho más tener el tiempo necesario para discutir un paquete de proyectos de democratización de la justicia, y que aquí expusiéramos, exclusivamente, acerca de lo que no nos pusimos de acuerdo. Pero lo que estamos planteando aquí es que hay una separación clara en los proyectos respecto de los cuales, además, nos dijeron que no podíamos tocarles una coma cuando salieron de aquí, y hoy vuelven porque el presidente de la Corte, a través de los presidentes de las cámaras, mandó una nota, y se modificaron temas sustanciales como los mencionados por los senadores Negre de Alonso y Morales. Entonces, uno empieza a tener una sensación rara, porque después una ONG presentó una nota y se hicieron cambios también.

Entonces parece que nosotros, que somos senadores de la Nación, representantes del pueblo en mayoría y en minoría, estamos pintados. El oficialismo defendiendo a ultranza y nosotros sin poder tener la posibilidad de mejorar incluso aquello en lo que podamos coincidir. Esto no es democratización de la justicia. La realidad es que es un proyecto político para condicionar la justicia, porque si no, no cabe pensar por qué para un proyecto que va a empezar a funcionar cada cuatro años con la elección de presidente hay que elegir en esta elección intermedia un grupo de representantes que se suma a los que ya están de un Consejo que teóricamente no funciona. Un Consejo de la Magistratura que empezó en el 99 y sufrió una modificación en 2005 porque no funcionaba, ya que eran muchos. Con trece no funciona y se vuelve ahora, por dos años, a modificar el número. ¿Cuál es el sentido? El sentido es claramente político, más allá de los argumentos técnicos que se puedan esbozar.

La realidad es que hoy un argumento político para condicionar durante estos dos años el manejo de este Consejo, que seguramente va a garantizar condiciones especiales para la designación de jueces en una justicia que tiene un gobierno que en los últimos diez años ha designado 54 por ciento de los jueces y del resto, como se dijo ayer en una reunión que tuvimos, el 20 por ciento son subrogantes.

No quiero entrar en los términos técnicos pero ayer escuché una frase que me pareció muy apropiada. Creo que la dijo el doctor Corach, quien expresó: “la Constitución dice lo que los jueces dicen que la Constitución dice.” De manera que cualquier otra interpretación que queramos hacer acá, termina en eso, en un tema de inconstitucionalidad. Pero en realidad, lo que estamos denunciando acá es un proyecto político para garantizar al próximo gobierno una impunidad en el proceso que va desde aquí hasta que este gobierno se vaya.

Hace mucho que estamos en política y hemos escuchado frases célebres que han quedado en la cultura popular.

Sr. Barrionuevo. –¿Me permite una interrupción?

Sr. Linares. –¡Cómo no, señor senador!

Sra. Presidente (Rojkes de Alperovich). –Adelante, senador Barrionuevo.

Sr. Barrionuevo. –Simplemente para aclarar algo. Lo quiero expresar porque en el contexto en el que estamos viviendo –y como lo ha mencionado con nombre y apellido– puede suscitar una interpretación no querida. Esa frase la puede haber dicho Carlos Corach pero no es de él. Es una vieja frase de un jurista alemán que dijo que las leyes dicen lo que los jueces dicen que dice.

Le aclaro porque si alguien lo entiende como que fue él, se le puede dar cualquier interpretación en el contexto de esta Argentina.

Sr. Linares. –Le agradezco, porque ayer tuvimos una reunión amplia de distintos sectores y el Corach que yo menciono creo que es presidente de una de las cámaras. Le agradezco la aclaración, porque si había alguna duda, queda aclarada.

Señora presidenta: para los que llevan muchos años acá han quedado en la cultura popular algunas frases célebres, fundamentalmente de los gobiernos que se están yendo. Me acuerdo de “el que apuesta al dólar pierde”, que dijo allá por el 82 Lorenzo Sigaut, y después estallamos. El querido doctor Pugliese en la última época del doctor Alfonsín, cuando asumió el Ministerio de Economía dijo: “les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”. Esto para decir algunas frases pero, en general, han quedado este tipo de frases.

En los últimos días han quedado varias frases de este gobierno que me dan la idea de que va a terminar dentro de dos años, sin duda alguna. Una es la que da origen a este debate, la de la diputada Conti, que aquí se ha mencionado varias veces. La otra la escuché ayer del secretario de Comercio, que me parece apropiada. ¿Por qué ahora? Nosotros nos preguntamos ¿por qué ahora en el medio si no es para garantizar alguna cosa? Moreno dijo ayer: “es la oportunidad, el mérito y la conveniencia.”. No tiene otra razón ni otra explicación. Pero yo quiero dejar claro, señora presidenta, que nuestro voto va a ser en contra, porque va a rechazar, si nos toca gobernar, y creo que vamos a ser parte de los que le toquen gobernar dentro de dos años, vamos a pedir la anulación de estas leyes porque no las queremos ni para este gobierno ni para otro que puede ser el nuestro, porque nos parece un atentado a la separación de poderes, y la independencia de la justicia es lo que garantiza la separación de poderes. El voto popular garantiza los cargos que nosotros asumimos en representación, pero lo que garantiza claramente la identidad de la justicia es la separación de los poderes.

Por eso nuestros bloque, con las consideraciones que ya han hecho aquí el doctor Juez, la doctora Morandini y los detalles más amplios que va a dar el senador Giustiniani luego, va a votar en contra. A su vez recordamos lo que en la alocución anterior fuera claramente expuesto por el doctor Juez, compañero de bancada, que son ustedes los que necesitan una justicia independiente porque van a ser los primeros que se van a ir del gobierno y no hay mejor manera de garantizar esto que tener jueces idóneos e independientes.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Senadora Di Perna, adelante.

Sra. Di Perna. –Gracias, señora presidenta.

Muy brevemente quiero expresar las razones del rechazo a este proyecto por parte del sector que represento, más allá de las ponencias en las cuales hay argumentos técnico-jurídicos muy importantes que se han vertido en el curso de este debate.

En primer lugar, consideramos que así como está, incluso con las modificaciones que se realizaron en la Cámara de Diputados, este proyecto violenta la estructura

democrática y republicana que establece nuestra Constitución Nacional.

Creemos que rompe ese esquema de pesos y contrapesos, que es básico en la democracia y atiende más, como ya se dijo tantas veces, a un interés político sectorial que a una verdadera búsqueda de la mencionada democratización de la justicia.

Tal como está la ley, vemos que predominan las fuerzas sectoriales en la conformación de este Consejo y se intervienen facultades muy importantes como la selección de los consejeros de la Magistratura. O sea, en este panorama estamos hablando de una justicia dependiente y los partidos van a tener que salir a buscar jueces para que figuren en sus listas. Los vamos a tener que obligar a la obediencia partidaria; los vamos a empujar a que investiguen o dejen de investigar, de acuerdo a la conveniencia política de cada partido. Esto no es bueno para la sociedad, porque la razón de ser de un Poder Judicial independiente no es justicia solamente para los que tienen mayoría circunstancial, sino que la razón de ser de un Poder Judicial independiente es que sea contramayoritario, o sea que proteja a la minoría en contra de los abusos de una mayoría.

Imaginamos por un momento que estuviéramos gobernados por un Estado abiertamente despótico. ¿Cuáles serían las herramientas que tendrán las minorías políticas bajo el imperio de esta ley? Consideramos que ninguna.

Creemos que en estos temas no hay que desentenderse o minimizar, porque sabemos que las mayorías, a veces, dan potestades, pero que después terminan agrediendo a ese mismo pueblo que les otorgó esa potestad. Ejemplos en la historia hay muchísimos. Las mayorías, en todo caso, son transitorias y circunstanciales, mientras que el Estado es permanente.

Hay un nuevo elemento que fue agregado, porque al pedido de modificación que envió la Corte Suprema se agregó una limitación para las fuerzas políticas opositoras que tengan representación en el Consejo de la Magistratura. Esto tiene que ver con el artículo correspondiente, en donde se trabaja la posibilidad de los partidos políticos que puedan presentar listas a candidatos unificados, tal como se expresó reiteradamente en este recinto.

Esta postura que estoy expresando no es solamente del arco opositor en ambas Cámaras al Frente para la Victoria. Detrás de estas posturas hay movimientos de trabajadores que se han expresado en ese sentido, agrupaciones de jubilados, juristas y especialistas en derecho que lo han hecho de manera acabada y técnicamente congruente. Hasta la relatora de la ONU expresó su opinión contraria con respecto a este proyecto.

Si el Poder Judicial se vuelve dependiente del Poder Ejecutivo de turno, creemos que corre riesgo la estabilidad, la seguridad jurídica y la defensa de los derechos individuales. En otras palabras, perdemos una red más para mantener las instituciones funcionando para todos.

Creemos que la situación actual del Poder Judicial no es buena. Sobre todo, cuando cada fiscal que investiga un hecho de corrupción termina desplazado de la causa. Este es un hecho objetivo. Pero con este proyecto volvemos, entonces, a tiempos más oscuros todavía de nuestro país, porque volvemos a la selección de jueces por medio de una servilleta, de acuerdo con la conveniencia del gobierno de turno.

Por estas razones, voy a votar en contra de este proyecto, en conjunto con el Interbloque Federal.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Señora presidenta: creo que se ha dicho de todo. Pero yo voy a centrar mi discurso en una parte que me interesó mucho y que me puse a investigar durante estos días, la cual no ha mencionado casi ningún senador que se ha expresado aquí –tampoco la

senadora preopinante–, respecto a la cual me da la sensación que nadie conoce a fondo lo sucedido.

Si bien nosotros estamos expresándonos en el marco de la democratización de la Justicia, quiero referirme al llamamiento urgente que efectuó Gabriela Knaul, la funcionaria brasilera relatora especial de las Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados. En ese sentido, no me pongo colorado de definirla como una de las peores prácticas que se pueden llevar a cabo por parte de un funcionario de las Naciones Unidas. Sabe Dios por qué. Encuadra perfectamente en lo que don Arturo Jauretche llamó la primera de las zonceras argentinas, la que él llamaba la madre de todas, “la civilización y la barbarie”. O sea, si viene de afuera, de los Estados Unidos o de las Naciones Unidas, es espectacular. Pero si lo hacen los argentinos, siempre está mal. Esta es la primera gran zoncera que estamos presenciando en estos casos.

Quiero analizar este tema. Después vamos a ver que es una lucha por el cliché, o sea, a ver quién tiene un cliché más lindo, o cuál es el que mejor se presenta. Es una lluvia de cliché.

Veamos la llamativa actuación de Gabriela Knaul en este hecho puntual que nos ocupa y el curso que debería haber observado conforme al Código de Conducta, porque estos relatores no resuelven su vida en función de lo que se les antoja, sino que tienen marcos de referencia o ámbitos de desenvolvimiento que deben respetar para que se parezcan en todos los países. Precisamente por eso, en el marco de las Naciones Unidas, para que se parezcan en todos los países, hay un marco de referencia del cual no debió haber salido dicha funcionaria.

¿De qué habla Gabriela Knaul? Ella habla de interferencia contra la independencia del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Señala que la propuesta representaría una grave lesión al principio republicano de división de los poderes contenido en la Constitución Nacional, una violación de los principios fundamentales relativos a la independencia judicial establecidos en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país y consagrados en nuestro artículo 75 inciso 22. Todo esto es lo que dice la funcionaria de las Naciones Unidas de origen brasileño, Gabriela Knaul.

Ahora bien, ¿qué dice el artículo 6° del Código de Conducta de estos relatores, al cual se deben ceñir? Dice que el relator debe tratar siempre de establecer los hechos sobre la base de información objetiva y fidedigna, que emane de fuentes creíbles y pertinentes.

Señora presidenta: la relatora Gabriela Knaul reconoce, a viva voz, que la denuncia es anónima. No tiene en cuenta nada de lo que le reclama su propio Código de Conducta. Absolutamente a nada.

Y el artículo 6° dice que los relatores de esta característica deben tener en cuenta de forma íntegra y oportuna la información, en particular aquella proporcionada por los Estados de que se trate.

Sin embargo, lo expresado por Gabriela Knaul no sólo refleja prejuizgamiento, adelanta opinión y efectúa recomendaciones, lo cual es una desproporción y una falta de respeto para un Estado soberano, sino que además nunca consideró la información suministrada por nuestro país. Nunca.

Señora presidenta: le cuento un poco cómo se desarrollaron...

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Señor senador Fernández: la señora senadora Negre de Alonso le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Fernández. – Señora presidenta: a la senadora Negre de Alonso no le puedo decir que no. Hoy no le puedo decir que no. Pero que no se adelante, porque no terminé de hablar.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta: yo señalé cuando hablé de este tema que hubo una alerta de emergencia y que, entonces, no se necesitaba esperar la contestación del Estado.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Señora presidenta: le agradezco a la senadora Negre de Alonso por haberme dado semejante pie. Vamos a señalar un poco los hechos.

El 26 de abril, la relatora Gabriela Knaul emitió un llamamiento urgente, que la distinguida senadora por San Luis me acaba de facilitar, con tanta gentileza. La dirige al representante permanente de nuestro país ante los organismos internacionales en Ginebra. El mismo día 26 de abril, a las 19 y 55 hora de Ginebra, Federico Villegas Beltrán – ministro director general de Derechos Humanos de Cancillería– acusa recibo de la nota que presenta la señora Gabriela Knaul. Vuelvo a insistir en la fecha: 26 de abril.

El 30 de abril, sin esperar la respuesta del Estado argentino, la relatora Gabriela Knaul emite un comunicado de prensa. ¿Sabe, señora presidenta, cuándo respondió la Argentina? El 2 de mayo, a las 8 de la mañana. Por mail, por fax y por nota que se presentaron en forma personal ante las Naciones Unidas. O sea, que la respuesta la dio el Estado argentino.

El mismo 2 de mayo, esta señora realizó declaraciones negando la recepción de la respuesta argentina. Todo amañado. No sé cómo viene la mano. Todo amañado. Es vergonzosa e intolerable la intromisión, el gesto y la actuación de esta relatora de las Naciones Unidas, porque no se ha ceñido nunca a lo que dicen específicamente los estándares establecidos para este tipo de relatores.

Por ello, el canciller argentino envió una nota al presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al polaco Remigius Henczel, transmitiéndole su malestar por lo sucedido. ¿Por qué razón? Porque no es otra cosa que una intromisión en la política de los argentinos, no en carácter de defensa o de intentar resolver alguna problemática en particular.

En ese sentido, el artículo 45 del mismo Manual de Operaciones para Procedimientos Especiales establece que nuestro país tiene treinta días para responder. Y respondió al sexto día.

Veamos otro gesto de comedidos de la señora Gabriela Knaul. ¿Qué otras cosas dice? “Sin implicar de antemano una conclusión sobre los hechos, me permito hacer un llamamiento al gobierno para requerir adecuación a la Constitución Nacional y estándares internacionales sobre la independencia de la judicatura, de los proyectos de ley de reforma del Consejo de la Magistratura y de regulación de las medidas cautelares contra el Estado”.

Dice: “Quiero expresar mi más seria preocupación por la propuesta de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura al otorgar la posibilidad a los partidos políticos de organizar elecciones, lo que pondría en serio riesgo la independencia de sus miembros”.

Veamos qué dice el artículo 8° del Código de Conducta por el cual se tienen que ceñir específicamente los relatores. Dice: “En la recolección de la información, los relatores deberán guiarse por los principios de discreción, transparencia, imparcialidad y ecuanimidad, apoyarse en hechos objetivos y fiables”. Les recuerdo que, a viva voz, dice que la denuncia es anónima. ¡En hechos objetivos y fiables! ¡Deben dar la oportunidad al

Estado de formular sus observaciones y responder las denuncias formuladas!

Señora presidenta: ¡la relatora no esperó ni un minuto ni tuvo en cuenta la respuesta de nuestro país! ¡Nunca la tuvo en cuenta! Adelantó su juicio como si las alegaciones fueran ciertas o inminentes de producir daño.

¿Por qué esa actitud? Ahí entra mi subjetividad pura, presidenta: porque algún pajarito –el anónimo, que ella llama entre comillas– le contó que ya tenían sanción tres leyes acá y tres leyes en Diputados, y que algunas se iban a cruzar y que probablemente podía haber modificaciones. Entonces, metió la cuchara rápido para ver si podía lograr torcer las decisiones de los legisladores de la Argentina. Quiere decir que esta funcionaria de origen brasileño que participa en las Naciones Unidas dejó de lado todo el encuadramiento al que tiene que ceñirse para cumplir con su labor –que es muy loable la labor que le fue ofrecida– para meterse en la política de los argentinos.

En ese momento, la 26.854, que es la norma que regula las medidas cautelares, ya era ley; con lo cual no podía hacer nada de eso. Pero, ¿qué dice igualmente sobre este tema? Dice que es contraria a la tutela judicial efectiva, dice que la precondition para la aplicación del párrafo 1° del artículo 14 condiciona el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y al adelantar esta visión respecto de que hay una violación de un tratado, ¡lo hace sin haber recibido la información del Estado! ¿Cómo sabe que realmente esto es así? ¡Viola los artículos 6°, 8°, 12 y 13 del Código de Conducta!

Y si uno mira los párrafos de los artículos 49 al 51 del Manual de Operaciones de los relatores, sostiene que la relatora debería haber entablado un diálogo con el gobierno, que nunca sostuvo. ¡Nunca! ¡Jamás intentó tener un diálogo con el gobierno! Y, además, hace un comunicado de prensa. ¿Sabe cómo se hacen estos comunicados de prensa, presidenta? En forma de acuerdo, entre los dos, entre el Estado y el relator. Nunca se hace de forma unilateral por parte del relator.

¿Qué quiero decir con esto? ¡No se quedó allí! ¡Se encargó también de mandar recomendaciones! No solamente se entromete en la crítica, sino que también se entromete queriendo elevar recomendaciones. Y voy a dar dos ejemplos nada más.

Uno, respecto de los miembros del Consejo de la Magistratura, recomendando excluir las elecciones partidarias; dos, sobre la regulación de las medidas cautelares recomendó que el período de vigencia de las medidas cautelares contra el Estado no sea restringido. Dos ejemplos nada más.

Estos llamamientos urgentes, presidenta –y es un poco a lo que quiero responder a la senadora Negre de Alonso por lo que dijo recién–, no son a cualquier efecto. ¡Los llamamientos urgentes son solamente cuando pueden entrañar vidas humanas, cuando lo que está en riesgo son vidas humanas, no en otro caso! No hay otro caso que haga tan indispensable violar todo el marco definido, específico, para que los relatores puedan desarrollar la tarea y que les haga el “campo orégano” para decir lo que se les antoja. ¡No es verdad!

Entonces, de una vez por todas quiero poner en claro que la actitud de esta persona –seguramente por algún amigo de la política que le ha llenado la oreja– ha sido querer colaborar con su amigo metiéndose en la política de los argentinos, primero, cuestionando las decisiones que se están llevando a la práctica y, segundo, hasta dándose la enorme actitud plagada de defectos de querer, encima, darle consejos a un Estado soberano. Esta es la definición más concreta que pretendía dar.

Por otra parte, hay tres cosas que no quiero dejar pasar. En cada uno de los senadores que escuchamos, cada uno busca su cliché. ¡Es una catarata de clichés! Uno

dice: “El gobierno está acorralado y temeroso”. Por eso actuamos de esta manera.

El otro tiene que competir con su cliché, entonces dice: “Le quieren meter la mano a los fondos”. ¡Son títulos de los cables! Los estoy viendo. Mientras que terminan de hablar, sale el cable y aparece dos minutos después. Aparece un tercer legislador que dice: “Van por la suma del poder público”. Aparece otro que dice: “Van por todo”.

En verdad, presidenta, todo este tipo de expresiones son nada, ¡nada! Palabras vacías, huecas de absoluto contenido, porque lo que estamos discutiendo son leyes, legislaciones que se tienen que llevar a la práctica. No se va a discutir cuál fue el cliché más ocurrente o con mejor sonido cuando se tengan que llevar a la práctica; mucho menos cuando hoy evaluamos cosas, como los acuerdos u otro tipo de discusiones, en donde nadie puede estar seguro de que a uno no le ha pasado cerca una actitud de esas características y que entre todos tenemos que velar para que lo que nos pertenece a todos suceda.

Recién le decía a un senador que el candidato a gobernador por la principal fuerza de oposición en Santa Cruz tenía una denuncia por evasión muy importante, y hasta que no resolviera esa situación no tenía forma de escaparse de ese tema y, además, seguramente a nivel político le hacía daño. Entonces, en algún momento adhiere a la exteriorización de capitales que se hizo unos cuantos años atrás, esa exteriorización que algunos llaman “blanqueo”; es decir, dineros que provenían de cualquiera de los bancos que estuvieran dentro del marco del Convenio de Basilea que se quisieran traer a la Argentina y se resolvieran de determinada manera.

Y después se presenta, conforme a la legislación del momento, ante un conjuer que se llama Pérez Gallart. Este conjuer es el que le termina reconociendo la extinción de la acción. Desde 1990, la ley 23.771 oportunamente y después ha habido varias leyes, cuando uno se somete al pago siendo un evasor del Estado eso extingue la acción.

Con lo cual, este conjuer, que es un abogado de Santa Cruz, es el que le reconoce la extinción de la acción al candidato gobernador. ¿Pero sabe qué? Es el apoderado de uno de los partidos que están asociados; tienen el mismo estudio, son apoderados cruzados de los partidos.

Entonces, a todos nos puede pasar eso. Seamos cuidadosos de estas cosas porque ninguno está queriendo en esto decir que no pueda existir algo de esa característica. Lo que no se puede dudar es de la vocación de que las cosas sean en el marco de lo que la propia ley indica –en este caso la 26376–, cumpliendo con los requisitos que están dentro de lo que pretendemos llevar a la práctica con el segundo proyecto a discutir hoy, un proyecto que tiende a resolver en el marco de lo óptimo.

Bien lo señaló el presidente nuestro bloque: nadie dijo que con esto está todo resuelto y terminado. Es el principio de un montón de soluciones –lo decía también el senador Fuentes– que seguramente tendremos que ir buscando, y que este Congreso va a debatir para encontrar en la conclusión de una Justicia distinta lo que Ulpiano decía hace dos mil años: que nos den a cada uno lo que nos pertenece. Nada más que eso. Y ese es el objetivo que perseguimos.

Por eso, el bloque del Frente para la Victoria va a votar de manera positiva el proyecto tal como está redactado con las modificaciones de la Cámara de Diputados.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: hoy estamos cerrando el tratamiento de estos proyectos de ley de reforma de la Justicia.

Desde el Frente Amplio Progresista hemos planteado, en este tratamiento que rechazamos, lo que consideramos un criterio impuesto por estos proyectos que atenta contra

principios constitucionales.

Se está cambiando la Constitución Nacional. Atentar contra el principio fundamental de la independencia de la Justicia, es cambiar la Constitución Nacional.

Por eso, nos parece que este debate debería haber sido más profundo, debería haberse dado con más tiempo, porque he repasado toda la discusión parlamentaria y el tratamiento realizado desde que ingresó el proyecto del Poder Ejecutivo nacional y no hay fundamentos, respuestas sólidas en cuanto a lo que nosotros consideramos el cambio del artículo 110 de la Constitución Nacional, esto es en cuanto al avance sobre la independencia de la Justicia.

¿Por qué se termina con la independencia de la Justicia? Por una razón muy simple, obligar a los jueces a integrarse a una boleta de un partido político, en una elección nacional, donde se va junto a una boleta, pegada, para presidente de la Nación, es integrar un programa partidario, una propuesta de un partido político; por lo tanto, ¿cómo le vamos a pedir, después, a ese juez, que sea independiente?

Se ha hablado mucho de poder, del poder de las corporaciones. Claro que queremos tener una Justicia muy alejada del poder de las corporaciones económicas. También queremos una Justicia que esté alejada del poder político, porque es un derecho ciudadano en el siglo XXI; la protección que tienen los ciudadanos de a pié, de tener un juez independiente. Y esta modificación del Consejo de la Magistratura rompe con esta premisa.

No se ha explicado con fundamentos sólidos cómo se va a hacer, después de esta modificación, para que ese juez actúe de manera independiente. ¿Queremos que el juez no tenga una ideología determinada? No, es falso ese debate, porque cómo, un juez, no va a poder tener una pertenencia partidaria. Claro que la puede tener, y un juez puede ser radical, peronista, socialista. Es bueno que tenga una ideología y una definición partidaria. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que integrar una boleta partidaria, en una elección nacional, junto a una candidatura presidencial de la Nación, significa después responder a la directiva del partido político, a la directiva del presidente con el que se compartió boleta.

Lo hemos escuchado de los distintos líderes de los bloques oficialistas, en el Congreso de la Nación, quienes tenemos distintos períodos en estas cámaras: “Yo respondo a mi gobierno.”, “Yo defiendo a mi gobierno.” Vamos a tener jueces que digan eso: yo respondo a mi gobierno, yo defiendo a mi gobierno. Es un verdadero disparate. Creo que no se ha dimensionado, en el poco y pobre debate que se ha tenido, y no por la calidad de los participantes, ni por su estatura, sino por la imposición de un tiempo de tratamiento que no posibilita profundizar en esta cuestión.

Creo que tenemos que ser muy prácticos y ver de qué estamos hablando cuando decimos que se termina con la independencia de la Justicia. La actual composición del Consejo de la Magistratura tiene trece miembros y en todas las votaciones últimas, claramente, aparece esta trabazón y mal funcionamiento, pero en general el oficialismo ha contado con ocho votos de los trece, ocho contra cinco. No tiene los dos tercios.

Con este proyecto que se está discutiendo, no es muy difícil elaborar distintas hipótesis para sacar cuentas y advertir que, evidentemente, quienes diseñaron la cuestión electoral tal cual está planteada lo hicieron con un objetivo. ¿Cómo quedaría el Consejo de la Magistratura si, en la boleta de consejeros, el oficialismo es primera minoría? No digo que gane con el 50 por ciento; primera minoría con el treinta y pico por ciento en la elección, en la boleta de consejeros y, después, veremos por qué. Tiene una gran ventaja por la manera en que se presenta. Por el oficialismo, ingresarían ocho consejeros más. Por

la oposición, cuatro. Es decir que, en la nueva composición, de 2013 hasta 2015, el oficialismo tendría dieciséis, y nueve serían los restantes. Entonces, hasta la elección de 2015, el oficialismo va a tener los dos tercios del Consejo de la Magistratura. No va a tener que esperar a ver quién gane las elecciones de 2015 –claramente los va a tener, porque el que gane las elecciones se va a llevar trece de diecinueve, y va a tener el 66,6 por ciento–, sino que ya a partir de 2013 una hipótesis muy realista, muy clara, muy concreta, le va a dar el manejo del Consejo de la Magistratura con los dos tercios, al oficialismo.

Cuando le hablamos del Consejo de la Magistratura a la gente, no saben qué es el Consejo. Es un tema para especialistas. Quienes hace mucho tiempo que estamos en el Congreso, pero no participamos del Consejo de la Magistratura, nos hemos puesto en conocimiento, con el tiempo, del funcionamiento, de las características de este “muñeco” que es hijo del Pacto de Olivos, que fue diseñado como una construcción técnica en el medio de la política, pensando en Francia y en lo que significa el semipresidencialismo francés. Y está en la Constitución. Su funcionamiento ha sido farragoso, muchas veces ineficaz. Acá se está cambiando totalmente la naturaleza del mismo, ya no es más el Consejo de la Magistratura. Por eso digo que se cambia la Constitución Nacional con estas modificaciones que se están haciendo.

Y a este “muñeco” se ha tratado de manejarlo de distintas maneras, para tener incidencia en la designación de los jueces, o en su remoción. Por eso tuvimos, acá, en este mismo recinto, en 2008 –fui separado de la Comisión de Justicia en aquel momento, cuando ingresaba el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional– aquel debate fuerte. Hubo presentaciones de inconstitucionalidad, porque al reducir el número de aquel Consejo se pretendía darle primacía a las designaciones políticas y así tener una mayoría y un manejo sobre el mismo. Como eso no funcionó, hoy se vuelve sobre los pasos. En aquella oportunidad, se argumentó que se lo reducía para que fuera más eficaz; hoy, se dice que se lo agranda para darle participación a la sociedad, en una elección en la que hay que transparentar lo siguiente. La gente va votar a representantes, o sea que no estamos avanzando en la democracia directa.

Hubiera sido un debate interesante el de incorporar la soberanía popular y el voto de la gente a la Justicia, de manera directa. Esto pasa, hoy, en Bolivia. Esto pasa en muchos de los estados de Estados Unidos. Pero es totalmente diferente. Los candidatos a jueces que se someten al voto popular no lo hacen a través de un partido político. Es más, hay requisitos para no partidizar la elección, se exige que los candidatos no hagan campaña, se les exige que solamente pongan su *currículum* a disposición de la sociedad, que es la que los elige. Es decir que estamos cambiando totalmente ese sentido de incorporación de la soberanía popular.

– *Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D.
Amado Boudou.*

Sr. Giustiniani. –En los debates parlamentarios y cuando presentamos proyectos, todos vamos a una cuestión que nos parece fundamental, que es el derecho comparado. Lo primero que hacemos es mirar, ver que estamos ante tal proyecto de ley y observar qué pasa en los distintos lugares del mundo. Escuchamos, acá, a los representantes del gobierno. Vino el secretario de Justicia quien en el tema de las cautelares nos habló de España, Portugal y otros países de Europa en los que se daban situaciones similares a las planteadas en los proyectos que se ponían en consideración.

Hicieron alusión al derecho comparado nacional. Hablaron de las provincias. Se dieron ejemplos de legislaciones provinciales donde existían situaciones que podían ser

tomadas como experiencias importantes para lo que se sustentaba como proyectos.

Pregunto: ¿cuál es el antecedente de jueces que se elijan por boleta partidaria en algún lugar del mundo y en algún momento de la historia? No hay ninguno. Esto, en sí mismo, ¿anula u obtura el debate? Absolutamente no. Pero que no exista en ningún lugar del mundo nos da la pauta de que el debate debería ser mucho más profundo y amplio porque, reitero, cambia la Constitución Nacional.

Hablaba de muñeco; este muñeco raro que es el Consejo de la Magistratura, que tiene que cumplir nada más ni nada menos que con la función de designar y remover a los jueces en la República Argentina, y que si era un traje a medida, como dijo la señora senadora Negre de Alonso cuando comenzó el debate en el Senado, se transforma ahora en un traje a medida con moño gracias a las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

Hay que ver algunos números para darnos cuenta de que no hablamos de la teoría de la democracia, de teoría de la división de los poderes ni de la teoría de la República. Se trata de cuestiones mucho más prosaicas.

De acuerdo a las últimas elecciones, si se toma la categoría de elección de diputados nacionales, que es la misma que se va a realizar este año, y advierte cuántos frentes pueden cumplir la requisitoria que se agregó en la Cámara de Diputados de la Nación –exigir 18 distritos para poder pegar la boleta a la de diputados nacionales– se da cuenta de que solamente la puede cumplir el Frente para la Victoria. En veintiún distritos se presentó el Frente para la Victoria. Es decir que es el único que cumple la condición que impuso la Cámara de Diputados, y que hoy se hará ley con el voto del Senado de la Nación, porque es el único que se presentó en veintiún distritos.

El Frente Amplio Progresista como tal se presentó en once distritos. La Unión Cívica Radical lo hizo en trece distritos como tal y en siete lo hizo como UDESOS. La Coalición Cívica-ARI lo hizo en quince distritos. La Alianza Compromiso Federal, que llevó a Rodríguez Saá como presidente, se presentó con esa denominación en nueve distritos, como Unión Popular en cinco distritos y como Frente Popular en seis distritos distintos.

Es decir que crean una categoría electoral nueva que cambia la Ley Electoral y el Código Electoral. Y lo hace una sola fuerza política a su exacta conveniencia y disposición.

Esto es política criolla. Es por ello que recomiendo volver a leer a Payró en “Pago Chico”, quien hablaba de la política criolla. Es amañar el proceso electoral de acuerdo a mi conveniencia.

Los politólogos hablan de inclinar la cancha. ¡Otra que inclinar la cancha! Esto es poner el referí, jugar con mi hinchada, inclinar la cancha y, además, embarrarla del lado del contrario.

De esta manera, ya se sabe que en mi distrito, donde somos gobierno y donde gobernamos las ciudades de Rosario y de Santa Fe, no vamos a poder pegar la boleta de consejeros a la lista de diputados nacionales que van en el Frente Progresista Cívico y Social. No lo podremos hacer en la provincia de Buenos Aires ni en la provincia de Córdoba. Ustedes dirán qué importa. Arréglense porque es un problema de ustedes. Pero no es así. Ustedes lo saben. El Frente Progresista Cívico y Social tiene veinte años en la provincia de Santa Fe y está integrado por socialistas y radicales. Nos hacen un cambio...

Sr. Presidente. – Le solicita una interrupción el señor senador Fernández, ¿la concede?

Sr. Giustiniani. – Sí, cómo no.

Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Señor presidente: un solo comentario.

Lo que dice la legislación es que son dieciocho los distritos que tiene que representar.

Habiendo representado los dieciocho distritos, en los otros, mientras muestre el frente donde está formando parte, puede llevar perfectamente la boleta. Eso es así.

Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Claramente, no se va a poder pegar en Santa Fe.

El ejemplo que di es muy concreto, práctico y la única posibilidad de que pudiéramos pegar la boleta –y a lo mejor nos empujan a que cambiemos la estrategia electoral, cosa que agradecemos– es haciendo una alianza con el radicalismo a nivel nacional para presentar una boleta de candidatos a consejeros.

Salvo que se arroguen, a partir del cambio de la ley y del Código Electoral, la facultad de impulsarnos a cambiar la política de alianzas que con todo derecho podemos hacer las fuerzas políticas.

Esto es mala práctica. Es como cuando los chicos juegan y dicen que nadie haga trampa. No hagan trampa. No se pueden cambiar las reglas de juego en el camino. Es una lógica elemental de la convivencia política justamente en un año electoral.

La presidenta debe convocar a las elecciones la semana que viene con una legislación que cambia hoy. No se hacen estas cosas ni de esta manera. Para transformar una legislación electoral hay que buscar un consenso político elemental entre las distintas fuerzas políticas. Si no, salen a la cancha con una gran ventaja.

Es verdad que lo maravilloso de la democracia es que luego el pueblo decide, y en octubre decidirá las representaciones partidarias. Sin embargo, nadie nos puede discutir lo que les estamos diciendo. No nos pueden discutir que salen con ventajas a la cancha; que hacen un cambio a su medida y que solamente favorece al oficialismo. Y lo manifestamos no en especulaciones ni presunciones ni prejuicios sino en la realidad de los hechos concretos que expresamos.

Por eso, señor presidente, reafirmamos que lo que se presentó como la “democratización de la Justicia” es un sofisma más. Es el mismo sofisma que cuando se planteó que los argentinos y los especuladores se acostumbraran a pensar en pesos para todas las operaciones inmobiliarias. Pero ahora nuevamente se dolariza todo. Con el bono planteado se abandonó aquella maravillosa y positiva y correcta idea de la pesificación. Ahora hay que dolarizar. Se va a tener un mercado dolarizado, pero por supuesto no para el pequeño que quiere comprar una casa ni para el trabajador que quiere acceder a una vivienda. Al contrario, será para los grandes inversores que van a poder blanquear los impuestos que no pagaron, que podrán traer su dinero de los paraísos fiscales y que, perfectamente, pueden ser actividades de blanqueo de dinero producto del narcotráfico para poder realizar operaciones de inversiones inmobiliarias en dólares.

Eso es un sofisma; y hoy estamos acá hablando de la democratización de la Justicia como un nuevo sofisma. Porque esto no va a acercar la Justicia al ciudadano de a pie; no va a mejorar el acceso a la Justicia incorporando nuevas Cámaras de Casación en donde los jubilados van a ver alargados sus pleitos; no va a mejorar a través de las cautelares, que van a alejar la posibilidad del ciudadano de a pie de tener más derechos ante el Estado, sino que vamos a estar ante una situación en la que hoy van a salir ustedes con más poder –no hay absolutamente ninguna duda– pero restringiendo estos derechos ciudadanos y ese valor constitucional que es la independencia de la Justicia.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá.– Señor presidente: en la sesión anterior, cuando tratábamos el mismo tema, preguntaba por qué sin discusión, por qué sin debate, por qué el tratamiento exprés; y ahora vemos no solamente errores de concepción del proyecto –por lo menos, en nuestra visión– sino también errores elementales que se han señalado en temas presupuestarios y de la administración que hacen que sancionemos una norma sabiendo que después la van a violar.

Entonces, no entiendo. Cómo es esto de que está prohibido para los jueces actuar en política y tienen que ir en las listas de los partidos. Y en un determinado momento de la sesión pasada, el miembro informante quiso incorporar la reforma y, después, el propio bloque oficialista la retiró.

Entonces, es para preguntarse qué ganamos con estos tratamientos exprés, con esto de hacerlo sin debate, sin reforma, sin modificación. Hablo de sin reforma propuesta por los senadores, por el Parlamento, pero sí con reformas propuestas por el CELS, que es una especie de súper Senado, que señala un error y hay reunión plenaria para escuchar, para aceptar y acatar las instrucciones.

Me quedaría por preguntar dónde han quedado las convicciones, los ideales y los sueños. ¿Dónde quedan aquellos sueños que siempre expresaba la entonces señora senadora por la provincia de Buenos Aires Fernández de Kirchner, en cuanto a la calidad institucional; algo que siempre mencionaba en sus discursos? ¿Dónde queda la democratización, con esta democratización sin diálogo, sin debate, sin búsqueda de consenso, sin aceptar nada de ninguna propuesta que hagamos los parlamentarios que no pensamos como el bloque oficialista? ¿Dónde han quedado aquellas buenas intenciones e ideales de las audiencias públicas en el tema de los jueces? Lo tratamos en el tema anterior con la lista de conjuces.

Acá cabe preguntarse qué país queremos construir. En este sentido, como estamos tratando la modificación del Consejo de la Magistratura, que fue una incorporación de la reforma constitucional de 1994, quiero decir que, en aquella oportunidad, yo fui convencional constituyente, que formé parte de la comisión redactora y que escuché todas las opiniones. Había convencionales constituyentes de profundos conocimientos y había quienes habían participado en la confección del Núcleo de Coincidencias Básicas, de lo que popularmente se llamó “Pacto de Olivos”; y lo que se buscaba era atenuar el poder del presidencialismo; entonces, se ponía un jefe de Gabinete que fuera el jefe de la administración, que debía asistir una vez por mes al Parlamento a rendir cuentas.

De aquel jefe de Gabinete ideado por los constituyentes no queda nada. En mayo del año pasado se sentó acá el jefe de Gabinete –joven– y nos prometió que iba a venir todos los meses, pero va a venir el 5 de junio. Parece que va a venir una vez por año; peor sería que no viniera nunca.

– *Ocupa la Presidencia la señora presidenta provisional del H. Senado, senadora Beatriz Rojkes de Alperovich.*

Sr. Rodríguez Saá.–¿Dónde quedó ese presidencialismo atenuado? Cuando se decidió darle rango constitucional como un hecho excepcional a los decretos de necesidad y urgencia, por imperio de una ley, se los transformó en una forma de legislar con una Cámara; y por más que no quieran oír, es así.

La ley que sancionaron, y a la que nosotros nos opusimos, dice que un decreto de necesidad y urgencia –que además, no cumple los trámites porque, en realidad tiene que venir a presentarlo y a explicarlo el jefe de Gabinete; y nada de eso ocurre– tiene que ser rechazado por las dos cámaras. Quiere decir que si una Cámara lo rechaza y la otra lo

aprueba, se convierte en ley. Ahora bien, una ley tiene que ser aprobada por las dos Cámaras; un decreto de necesidad y urgencia, que tiene el mismo valor que una ley, tiene que ser rechazado por las dos Cámaras. Entonces, es una forma de legislar con una Cámara.

¿Dónde quedó el presidencialismo atenuado? Esto es lo contrario a lo que dice la Constitución.

Sr. Pichetto. – Solicito una interrupción, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). –¿Autoriza la interrupción, señor senador?

Sr. Rodríguez Saá.– Sí; cómo no.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich). –Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Ese tema quedó consolidado como doctrina parlamentaria en el famoso descuento a los jubilados en el período del doctor Fernando de la Rúa.

Se recordará que la Cámara de Senadores había dejado sin efecto el decreto de necesidad y urgencia, y la interpretación fue que en ese momento se sostuvo la necesidad de que ambas Cámaras sean las que determinen la nulidad de un decreto de necesidad y urgencia. Digamos, el precedente de ese hecho está ahí: en el decreto de descuento al sector público, jubilados y pensionados.

Sra. Presidenta (Rojkes de Alperovich).– Continúa en el uso de la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá.– Le agradezco, senador. Está bien, pero eso no exime a que esa interpretación hecha con otras personalidades es violatoria de la norma constitucional, del espíritu y del texto que se dictó.

Los decretos de necesidad y urgencia fueron reconocidos como una necesidad del poder ante casos de emergencia y de una extrema urgencia. El ejemplo más notorio fue cuando se hizo la política del austral y se cambió la moneda. No se podía esperar la sanción de una ley para cambiar la moneda y que se produjese un descalabro económico; entonces, se hizo por decreto y luego lo aprobó el Parlamento.

Lo que se legisló en la Constitución fue para ese caso excepcional; es decir, cómo le dábamos rango constitucional a esa extrema excepción; y por el arte de estas leyes, se va transformando lo que se dictó para atenuar el presidencialismo y como una excepción en la regla más permisiva para suprimir las facultades del Congreso. Entonces, esto atenta contra la Constitución; no es lo que los constituyentes decidimos aquel día; no es el texto ni el espíritu.

– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D. Amado Boudou.

Sr. Rodríguez Saá.– Y cuando discutimos el tema del Consejo de la Magistratura, más allá de que uno podía compartirlo o no –como acá se ha expresado, es una experiencia polémica–, justamente, lo que se buscó fue atenuar el presidencialismo.

Hacer un Consejo de la Magistratura era incluir un equilibrio, el cual está establecido por el artículo 114. Con esta iniciativa, se rompe ese equilibrio y se logra el efecto contrario, que es que las mayorías tengan el dominio del Consejo de la Magistratura. Entonces, a través de una ley, volvemos a alterar el texto y el espíritu de la Constitución, para darle a la excepción, a la limitación, más facultades...

– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Por favor, señores senadores.

Sr. Rodríguez Saá. – ...más facultades presidenciales de las que tenía antes.

Entonces, a mí me parece que también tenemos que mirar el texto constitucional,

particularmente, el artículo 28. Con su permiso, señor presidente, voy a leerlo. Dice así: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.

Antes de pasar al segundo tema, quiero decir que traía mi manual para hablar. Pero me voy a eximir de usarlo, porque el miembro informante dio un argumento fantástico. Dijo que en 1952, cuando gobernaba Juan Domingo Perón, el 56 por ciento del producto bruto interno era distribuido entre los trabajadores. Miren cuánto es distribuido en el gobierno kirchnerista.

El segundo tema importante que viene con esta reforma implica que cambiamos. Es decir, se elaboró un proyecto de ley, que vino al Senado y que aquí aprobamos, para que el Consejo de la Magistratura manejara el presupuesto y la administración. Presentó una nota la Corte; en la Cámara de Diputados, se cambió y ahora, viene todo lo contrario. ¿Qué está bien? ¿Que lo maneje el Consejo de la Magistratura o la Corte? En el proyecto de ley originario, se decía que tenía que manejarlo el Consejo de la Magistratura.

Por último, quiero decir que es de una gravedad enorme y no admito los argumentos –les pido disculpas pero no los admito– que han dado quienes han defendido esta forma de proscripción. No creo que sea progresista que una ley proscriba. Este proyecto de ley tiene casi la misma entidad de proscripción que la ley de Lanusse. Cuando Perón estaba en el exilio, se estableció que para ser candidato a presidente de la Nación había que estar en el país, porque Juan Domingo Perón estaba en el exilio. También lo podían fundamentar inventando; por ejemplo, diciendo que era para que las corporaciones no pusieran un candidato que viviera en Londres. Podían decirlo, pero sabíamos que Lanusse lo hacía porque a “Perón no le daba el cuero”, según él mismo había dicho en el Colegio Militar de la Nación. Con ese sentido era proscripción.

Si para ser partido nacional y presentar una fórmula presidencial, se requiere tener personería jurídica en cinco distritos, ¿por qué razón se pone esta cláusula de proscripción de los dieciocho distritos? Lo voy a explicar: esto es ingeniería política, picardía para proscribir. Todos sabemos de las dificultades de las boletas; todos sabemos que se roban las boletas en los cuartos oscuros; y que hemos tenido enormes problemas en las elecciones presidenciales con el robo organizado de boletas.

Imagínense cuando presentemos nuestras boletas –supongamos– en la Capital Federal, con nuestras listas de senadores, de diputados nacionales, de diputados a la legislatura local y, por separado, la del candidato a consejero de la Magistratura en un papelito que va a quedar por allá, en algún rincón, mientras que el Frente para la Victoria tiene asegurado, con el texto de esta iniciativa, tenerlo pegado en la misma lista y, entonces, se lleva el voto sábana. Si no es proscripción, todos vayamos con las boletas separadas o todos con una sola boleta. Pero la igualdad debe ser para todos; los derechos son de todos.

El señor senador Sanz contó la hermosa anécdota de su padre, que con toda inteligencia le preguntó quién venía por la derecha. Bueno, por la derecha vienen los que dicen ser progresistas y que nos quieren proscribir a través de una ley mañosa.

Cuando yo planteé esto en la Comisión, el señor senador Pichetto –que, lamentablemente, no está presente en este momento– dijo que la Justicia nos va a dar la razón. ¿Qué justicia?! ¿La del autor de las modificaciones en la Cámara de Diputados o de la jueza Servini de Cubría, que sabemos que vamos a ir a padecer al juzgado? Tal vez, nos autoricen dos días antes de las elecciones. ¿Cómo vamos a hacer para que las boletas estén impresas, sean distribuidas por el correo y lleguen a los cuartos oscuros? Esto es proscripción. Es muy diferente ir con una boleta separada que con una boleta suelta.

Sr. Presidente. – El señor senador Fuentes le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Rodríguez Saá. – Cómo no.

Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fuentes.

Sr. Fuentes. – Gracias.

Senador Rodríguez Saá: usted sabe que yo lo escucho con sumo respeto, pero hay un dato que es preciso mencionar en función de su alusión a la proscripción de Perón. Eso se debió al gran acuerdo nacional y quienes lo celebraron tienen nombres y apellidos; hay miembros de partidos que formaron parte del acuerdo con Lanusse.

Simplemente, en homenaje a la memoria, quiero recordar que el primer acto por el retorno de Perón en la campaña “Luche y vuelve”, en la cual nos forjamos miles de jóvenes en la Argentina y que costó posteriormente la sangre de muchos de los nuestros, se hizo en Cambaceres por la Juventud Peronista de La Plata. Quiere decir que no es el Frente para la Victoria el que proscribió a Perón. Quería dejar en claro eso.

Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. – Es comparable con lo que hizo Lanusse lo que están haciendo con este texto del proyecto de ley.

Yo también luché, participé y estuve en esas peleas. En aquella época, era un joven apoderado de veinticuatro años de edad del Partido Justicialista, distrito San Luis, cuando lo estábamos organizando. Conozco toda esa historia: tuvimos que luchar para que nuestro candidato a gobernador, que había ido el 17 de noviembre a buscar a Perón, pudiera participar de las elecciones, porque como había salido del país no podía ser candidato. Bueno, presentamos recursos, etcétera, y a través del peronismo, muy bien organizado –acostumbrado a las proscripciones–, pudimos defenderlo. Pero han pasado muchos años y no podemos volver a esas épocas y que tengamos que ir a pedir protección a jueces que, de antemano, sabemos que nos son adversos. Yo les pido que comprendamos que esto está mal. No nos pueden proscribir. ¡No nos pueden proscribir!

Yo le agradezco al señor senador por Santa Fe, quien en esta oportunidad mencionó –reconozco su gesto– el Compromiso Federal. Nosotros somos una confederación y tenemos personería en dieciséis distritos; teníamos en nueve y ahora en dieciséis. Entonces, ¿no vamos a poder pegar la boleta porque nos faltan dos distritos? ¿Tenemos que ir con la boleta separada? La Unión Cívica Radical, porque tiene en algunos lugares acuerdos que ya tienen muchos años, ¿tiene que ir con la boleta separada? El Frente Progresista, porque tiene algunos acuerdos, ¿tiene que ir con la boleta separada? Esta es una ingeniería electoral equivocada, para no calificarla más duramente. Deberían rectificarla, se debería corregir; no nos pueden mandar a que tengamos que pelear en la justicia.

Porque no llegamos, porque es un escollo, porque es una desigualdad, porque no puede ser que para presentar la boleta de candidato a presidente de la Nación necesitemos 5 distritos y para el Consejo de la Magistratura –con todos los inconvenientes, dudas, etcétera que acarrea– necesitemos 18 distritos. ¡Esto es proscripción! ¡Y hay que decirlo con mayúscula! Porque el paso siguiente, así como fueron avanzando con el Consejo de la Magistratura y ahora estamos en este estado, así como fueron avanzando con los decretos de necesidad y urgencia, así como siguen avanzando con la delegación de facultades, así como mantienen los superpoderes y las leyes de emergencia, así como dijeron que había que pesificar y ahora van a dolarizar, mañana nos van a poner otro requisito para presentar fórmula presidencial, de forma tal que nos falte algo. Y a pelearlo a la calle, a pelearlo ante los jueces. ¡No puede ser! Por eso yo digo qué país queremos. Se requiere tener seriedad.

Yo escuchaba cuando Néstor Kirchner decía que él buscaba un país en serio. Yo

estaba en otra lista, pero representábamos al mismo partido. El congreso del Partido Justicialista había autorizado tres fórmulas. Yo escuché el discurso de Néstor Kirchner cuando dijo que no iba a dejar en la puerta de la Casa de Gobierno sus convicciones, cosa que me parece muy respetable, un sueño valorable. ¡No lo pueden tirar así por la ventana!

¿Por qué nos van a proscribir? ¿Con qué derecho nos van a proscribir? ¿Simplemente, con el derecho que hoy tienen la mayoría? ¿Inventarán otra el año que viene? Ninguna elección nacional se ha hecho con las mismas normas. En todas nos han cambiado algo: una vez nos modificaron la fecha; otra vez nos cambiaron la forma de las elecciones internas; y ahora piden que se incluya el Consejo de la Magistratura, con esta norma de proscripción.

Entonces, yo solicito que reflexionemos acerca de qué país queremos construir. Por eso nos tenemos que escuchar. Por eso es necesario el debate. Por eso es necesario comprender que una democracia se construye con consensos. Si después de la discusión y del debate; si después de escucharnos... ¡Pero de escucharnos todos! Porque cuando discutíamos el Reglamento con el presidente de la Comisión, parecía que la única válida interpretación del artículo 22 era la de él. ¡Y no! Yo, como senador de la Nación, tengo derecho a interpretarlo también; y lo hago al revés de lo que dice él; yo no le pongo ninguna coma ni ningún punto. Tenemos derecho. Después votaremos, se conocerán los resultados y el pueblo sabrá lo que hace.

Hoy estamos sancionando o van a sancionar una iniciativa que tiene muchas falencias constitucionales y una tacha enorme: es una ley “proscriptiva”. Vamos a votar en contra de la sanción de este proyecto de ley.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cano.

Pido, por favor, si podemos mantener silencio en el recinto mientras escuchamos a los senadores.

Sr. Cano. – Señor presidente: en primer lugar, cuando escuchaba al senador Sanz, que planteaba el discurso del miembro informante del senador Fuentes en treinta años de democracia, y para mí que voy que cumplir veintinueve años de afiliado a la Unión Cívica Radical, la verdad es que en lo que hace a las cuestiones profundas desde el punto de vista ideológico –que tiene que ver con la pertenencia a partidos populares como el radicalismo y el peronismo–, lo planteado por el senador Fuentes es como una sinfonía para nuestros oídos, porque uno comulga con muchas de esas ideas y de esos principios de lucha, que tienen que ver con reivindicar la igualdad de oportunidades y la lucha contra los más poderosos. Pero el problema es que cuando bajamos a la realidad y nos corremos del relato, la realidad pasa por otro andarivel, que nada tiene con ver con lo discursivo, con lo que el oficialismo nos plantea como eje de debate.

Era por eso, señor presidente, y a modo de rectificar, que con todo respeto le hacía una pregunta al senador por Santa Cruz. Efectivamente, no es Romina Mercado. La fiscal de El Calafate es Natalia Mercado. Y casualmente, no se excusó en causas que tienen que ver con quienes gobernaban Santa Cruz en un hecho escandaloso de compra a precio vil de terrenos fiscales. Reitero: no es Romina Mercado sino Natalia Mercado. Las medias verdades son las peores de las mentiras. A lo mejor, en este contexto del relato, hay senadores que, a pesar de vivir en Santa Cruz, idealizan el modelo y no son conscientes de lo que efectivamente implica en esa provincia el Poder Judicial, que el kirchnerismo colonizó. Eso a modo de aclaración. Realmente, es escandaloso que no se haya excusado en esa causa.

En el mismo eje de lo que acá se ha planteado, a nosotros nos interesa analizar cuál

es el contexto en el que estamos debatiendo y discutiendo estas normas, que tienen que ver con lo que se denominó o lo que el oficialismo llamó la democratización de la Justicia. Y lo hacemos en un contexto de hechos de corrupción o de supuestos hechos de corrupción que han tomado estado público, que si bien es cierto que han sido puestos en escena por una investigación periodística, también han sido ratificados por dirigentes que son de la entraña del poder: la secretaria privada del ex presidente, el ex gobernador de Santa Cruz y el ex vicegobernador de Santa Cruz. Es decir, no son los referentes de la oposición quienes están poniendo en la escena pública cuestiones que realmente a todos nos preocupan.

También es lamentable que sea la prensa la que, cumpliendo un rol, ponga ante la opinión pública situaciones que tienen que ver con hechos de corrupción. Porque el Estado, es decir, el kirchnerismo, que propicia más presencia del Estado –en lo ideológico, el radicalismo coincide en esa lógica–, en este caso, más Estado tiene que ver con un Estado cómplice. ¿Por qué digo esto? Porque la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción, la Auditoría General de la Nación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Unidad de Información Financiera...

Yo decía en la sesión pasada que, en realidad, el mejor homenaje, como punto de inflexión a treinta años de democracia, tiene que ver con democratizar las prácticas políticas. Democratizar las prácticas políticas es un desafío que tiene toda la dirigencia. Sin embargo, con los hechos concretos de la realidad, acá vamos a contramano del discurso.

Fíjese usted, señor presidente, la Unidad de Información Financiera; José Sbattela. En estos días, nosotros hemos hecho una presentación ante la Justicia, porque claramente creemos que no cumplió con los artículos 13 y 19 de la ley que lo obliga a informar al Ministerio Público sobre los reportes de operaciones sospechosas que son informados por los bancos. Contrariamente a reprimir a este funcionario, se lo asciende a secretario de Estado.

Continúo: el Ministerio Público, la Oficina de Coordinación y Seguimiento en Materia de Delitos contra la Administración Pública, la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando, unidades fiscales especiales, la UIF lavado, la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando, la Unidad Fiscal AMIA. Es decir, hay un sinnúmero de estamentos del Estado que tienen una función específica, casi hasta de modo preventivo, para evitar que hechos que están tomando estado público finalmente sean puestos ante la opinión pública por la prensa.

En ese contexto, señor presidente, para toda la dirigencia política, sin exclusión alguna, es un cachetazo que en pleno siglo XXI, no en el interior profundo, no a la orilla de un río sino en los centros urbanos, muera gente producto de las inundaciones. De eso nos tenemos que hacer cargo todos. Producto de más Estado pero, en este caso, ya no de un Estado cómplice sino de un Estado ausente.

En ese contexto, donde hay causas que tienen que ver con hechos de corrupción que involucran al gobierno –aquí tengo un sinnúmero de causas–, se plantea la democratización de la Justicia. Honestamente, creo que cuando hay voluntad política de aprender de los errores... Lo único que falta es que responsabilicemos al gobierno de la Rúa del enriquecimiento ilícito de un ex empleado bancario, Lázaro Báez, que hoy tiene una fortuna que es muy difícil de explicar. En todo caso, se trata de que cada partido se haga cargo de la responsabilidad que tenemos en estos treinta años de democracia y que no reeditemos los errores del pasado.

Creo que si efectivamente se quiere plantear como un desafío para las futuras generaciones el garantizar la administración de Justicia y su acceso y el tener un Poder

Judicial más eficiente, me parece que lo primero que hay que propiciar es no invitar a la oposición y a los sectores políticos a que vayan a enterarse y a aplaudir un paquete de leyes que nada tienen que ver con democratizar la Justicia. Digo esto porque si uno democratiza las prácticas políticas, tiene que ver con convocar a los actores de la sociedad para que, ante la opinión pública, en el ámbito natural que corresponde, que es el Congreso de la Nación, se discuta efectivamente cuáles son las normas que van a mejorar la administración de Justicia.

Y es llamativo y paradójico cuando uno habla de diálogo de sordos. Seguramente, el tiempo dirá quiénes son los que no escuchan; si son quienes forman parte del oficialismo o son los que integramos la oposición. Tampoco es un buen dato que el Congreso de la Nación tenga que sesionar rodeado de vallas, cuando tenemos un gobierno popular y con tanto predicamento en la sociedad argentina. Me parece que no se condice con lo que está sucediendo últimamente en el país.

En ese contexto, escuchábamos ayer en una audiencia pública que hubiese sido muy bueno y saludable que los miembros del oficialismo participaran de ese debate en donde había integrantes del Poder Judicial. Al respecto, reivindicamos que los oradores no tenían que ver con ninguna pertenencia partidaria y que claramente se manifestaron en contra de estos mal denominados proyectos para democratizar la Justicia, ejerciendo no su rol de integrantes del Poder Judicial sino el de ciudadanos, en un país gobernado por quienes muchas veces no toleran a quienes piensan distinto.

En definitiva, la médula de todos estos proyectos tiene que ver con la mayoría del Consejo de la Magistratura, que le da facultades a quien detenta la mayoría –prácticamente, relega a la minoría a no tener ningún protagonismo– para poder suspender a los integrantes del Poder Judicial y habilitar el Juryde Enjuiciamiento. En ese contexto, vinieron integrantes del Poder Judicial de la Nación a manifestarse en contra de los proyectos que aquí estamos tratando.

Qué bueno e interesante hubiese sido, cuando se habla de democratizar la Justicia, que el Poder Ejecutivo convocara a un debate amplio y verdaderamente democrático para que entre todos pudiéramos construir políticas públicas de Estado que mejoraren la administración de Justicia. Absolutamente nada de eso ocurrió.

También es paradójico, porque honestamente, creíamos que a partir de los hechos que ocurrieron en La Plata, parte de la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal y que tienen como responsables a toda la dirigencia política, la presidenta podía aprovechar estos aires de bendiciones que recibió del Papa Francisco y nos convocaría a los integrantes de los distintos bloques parlamentarios y a los gobernadores de todas las provincias de la Argentina para incorporar los proyectos, que están debidamente acreditados y estudiados, que tienen por objeto evitar finalmente que vuelvan a ocurrir las situaciones a los que hice referencia. Es decir que incorporemos todas esas obras que hacen falta en las provincias de la Argentina en el presupuesto del año que viene y que sean las políticas de Estado, como homenaje a la democracia –independientemente del resultado electoral de octubre–, para que finalmente se concreten.

Pero contrariamente a lo que pensábamos, se incorpora este paquete de leyes de los cuales cuatro o cinco son maquillaje y lo medular es lo que aquí se dijo. Es curioso y paradójico que un partido que sufrió proscripciones claramente proscriba la participación, modificando la ley electoral sin consensuar absolutamente con nadie; y que eche por tierra el rol de las minorías en la democracia, que tiene que ver con esos dos tercios que se necesitan en el Consejo de la Magistratura. Por otra parte, a contramarcha de lo que algunos

sectores políticos plantearon, en cuanto a que hay connivencia entre la Unión Cívica Radical y el oficialismo, quiero decir que si eso efectivamente ocurriera, no estaríamos hoy discutiendo la modificación del Consejo de la Magistratura.

El oficialismo no quiere democratizar la Justicia; de lo que se trata es de democratizar las prácticas políticas. El oficialismo necesita colonizar el Poder Judicial de la Nación como ha colonizado los poderes judiciales de las provincias que gobiernan los representantes del Frente para la Victoria. Y esto es así porque hace falta que la Justicia garantice que los jubilados no cobren el 82 por ciento móvil, porque hace falta que funcionarios de este gobierno, como Jaime, gocen de impunidad, o como tantos otros funcionarios que tienen causas pendientes con la Justicia. En definitiva, porque hace falta lo que planteó una vocera del oficialismo: que quien gana tiene el derecho de manejar los tres poderes del Estado. Para eso hace falta colonizar el Poder Judicial.

Asimismo, consideramos que están dadas las condiciones para que tengamos un Poder Judicial independiente. Y están dadas las condiciones en el marco de la Constitución Nacional y de las leyes. Se trata, entonces, de si somos capaces de asumir el compromiso de respetar la Carta Magna, de ponerla en lo más alto o de pisotearla. En definitiva, ustedes tienen la palabra.

En la sesión pasada, los integrantes del oficialismo se encargaron de argumentar porqué había que quitarle la facultad de superintendencia y el manejo de los recursos a la Corte Suprema de Justicia. Ahora van a votar todo lo contrario a lo que dijeron en la sesión anterior sin siquiera sonrojarse.

Esto forma parte de un paquete de leyes absolutamente improvisado que nada tienen que ver con democratizar la Justicia. Hay que aprender a cumplir con la Constitución Nacional, y cuando lo hagamos, vamos a tener un Poder Judicial independiente y no un traje a medida como el que necesita hoy el partido de Gobierno.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay una distancia de días del anterior debate. El Senado ha tenido un tono respetuoso desde el punto de vista del funcionamiento. Me parece que este es un valor que hay que destacar. Voy a pedir después que verifiquemos bien cuando votemos que todos estén habilitados, que todos tengan el aparato respectivo y el dedo puesto. No quiero ningún tipo de incertidumbre con respecto al resultado.

Sr. Presidente. – Le solicita una interrupción el senador Rodríguez Saá.

Sr. Pichetto. – No voy a dar interrupciones; escuché con respeto a todos y les pido que me dejen manifestar algunas cosas que tienen que ver con el debate.

Hay toda una serie de consignas, de panfleto tirado, respecto de que se violenta la Constitución y se cae la República. Se dramatiza al extremo y no se reconoce que la Corte Suprema y los tribunales inferiores siguen revisando las normas y pueden plantear la inconstitucionalidad de cualquier ley que se sancione en este Congreso.

Además, tenemos que escuchar a una relatora que se entromete, en un avance sobre la soberanía propia del Estado, y entra a opinar porque es amiga del auditor anterior, porque además hay una denuncia anónima. De repente, aparece haciendo observaciones a un país que nunca ha vulnerado el sistema de Derecho ni tampoco el funcionamiento del Poder Judicial.

En la Argentina, no se persiguen jueces; no se ataca a los jueces y fiscales en la calle, como ocurre en otros países. No hay un sistema judicial que tenga una base como Guantánamo. De hecho, esta relatora nunca se preocupó de expresar alguna preocupación para ver qué pasa con esos presos que no están sometidos al debido proceso legal. Digo que

es una intromisión y un hecho alevoso.

Cuando las portadas de los titulares de los grandes medios anuncian “la ONU...”, yo digo: “Bueno: se reunieron las Naciones Unidas, con todos los países miembro, y analizaron la situación del Poder Judicial de la Argentina”. La verdad, me parece que hay una intención de distorsionar las miradas. Se juega con la inocencia de la gente; se juega con una comunicación muchas veces artera.

Hay un relator que dio una opinión que nosotros no compartimos porque de ninguna manera se ha violentado absolutamente nada, dado que el Congreso ha sido delegado por la Constitución, en el 114, para instrumentar una ley a efectos de crear el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque los constituyentes no pudieron hacerlo. No pudieron resolver el debate en el marco de la Constitución. Si lo hubieran hecho, en la Constitución, habría quedado algo claro. Acá hay hombres y mujeres que han sido constituyentes y nos dejaron este debate abierto porque no se pusieron de acuerdo en la Constitución del 94. Entonces tiraron la pelota, la brasa caliente, dejaron algunas normas rectoras de cómo se tenía que integrar y dijeron: “Bueno, que el Congreso haga la ley”.

Indudablemente, este instituto es complejo, difícil y está metido en una Constitución de perfil liberal americano. A esto me ya me referí; no quiero repetirlo mucho. Puedo mencionar un cuerpo extraño como la figura del jefe de Gabinete a la que no le dimos el rango de primer ministro. Tampoco hicimos un sistema de alternancia al estilo del presidencialismo francés, con primer ministro producto de la voluntad popular. Hicimos un engendro “a la Argentina”, un mamarracho. Porque en el fondo, no funciona; porque no era el espíritu que tenía Alfonsín respecto de esta institución y, también, frente a esta institución del Consejo de la Magistratura.

Además, la demostración palmaria de que el Consejo funciona mal y tiene graves dificultades no solamente en la Argentina la vemos en España. En estos días, se está dando un debate muy interesante con este tema de la partidización, de la politización. La discusión también es si el Poder Judicial constituye un poder político del Estado o no. ¡Dejemos de tener una mirada hipócrita, necia y de no asumir que también ese poder es un poder importante, que tiene un fuerte contenido de politización, de definición; una visión más conservadora –alguien lo dijo acá–, una mirada mucho más conservadora!

Fíjense algunas cosas que han ocurrido en la Argentina. Una decisión soberana de pago de la deuda externa, tomada por el Poder Ejecutivo Nacional en uso de sus facultades propias, de sus atribuciones que surgen de la propia Constitución en el artículo 75, que es pagar con recursos propios de la reserva del Banco Central la deuda, fue paralizada con una medida cautelar dictada por una jueza contenciosa de la Ciudad de Buenos Aires. Esto ocurrió acá en la Argentina. Hablamos de una ley dictada por amplias mayorías, amplias mayorías que excedieron la voluntad de la principal fuerza electoral política de representación, que era el Frente para la Victoria. Allí confluyeron otros sectores. Me refiero a la denominada Ley de Medios: lo cierto es que todavía hoy, después de tres años y medio, estamos discutiendo la constitucionalidad; estamos discutiendo el plazo. Ahora se ha expedido la cámara.

Hoy, una Cámara Civil hizo una opinión de fuerte contenido político y de apreciaciones realmente improcedentes en términos de un debate que le corresponde dar al Parlamento en uso de sus atribuciones. Esta Cámara Civil de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio conservador nunca revisado por ningún gobierno democrático, jamás revisado –las cámaras civiles y comerciales fueron los espacios de menor renovación del sistema judicial argentino–, hoy opinó como si opinara un sector político. Dijo: “Esta norma es

inconstitucional; afecta la división de poderes. Se cae la República”. Y no sé qué cosas más dijo.

Tengo que referirme a la tendencia a la dramatización que existe en la Argentina sobre temas que, además, van a ser revisados y seguramente analizados por los tribunales inferiores. Y será la Corte, en uso de sus facultades finales, la que evaluará si alguna de las normas que hemos votado, como fue el uso razonable de lo que significa la medida cautelar como protección frente al Estado, no tiene que tener un marco de regulación o tiene que tenerlo. Las provincias lo pueden hacer; la Ciudad de Buenos Aires lo puede hacer; el Estado Nacional no puede hacerlo. Tiene que ser un Estado bobo, indefenso. Sus abogados duermen, se comen los plazos. Porque, lógicamente, ese es el Estado que conviene.

Entonces, la cautelar se toma inaudita parte, no se notifica al Estado. En fin, estos son los mecanismos que funcionan hoy como verdades reveladas donde se dice que los ciudadanos pierden derechos. Yo he escuchado cosas realmente... Hace un rato, puse el ejemplo de Gustavo Bossert, un hombre respetable, un hombre que formó parte de la Corte anterior, que tuvo una posición doctrinaria. Me sorprende que se llegue a decir que la Justicia va a quedar cautiva, que los jueces van a tener miedo.

Miren, yo estoy convencido, pero además, tengo el conocimiento y la convicción de que ningún juez se va a subordinar a partido alguno porque ese es el espíritu que tiene todo juez: un espíritu libre a partir de que asume. Actúa con independencia, va a actuar con independencia. Además, aquí no se ha afectado ninguno de los funcionamientos y de las reglas constitucionales. No hemos violentado absolutamente nada. Hicimos una ley en donde hemos dicho que el sistema de elección va a ser popular.

Yo he escuchado acá “proscripciones”, he escuchado otras consignas. No he escuchado a ningún hombre o mujer de la oposición hablar de que hay que ganar elecciones en el sistema democrático. Siempre dan por sentado que el oficialismo va a ganar inevitable e inexorablemente. La verdad, es una actitud de pérdida psicológica. ¡Tengan alguna mirada de futuro alentadora de que pueden ganar alguna elección!

Si la sociedad le da la razón a todo lo que ustedes dicen...

Sra. Negre de Alonso. - ¿Me permite una interrupción?

Sr. Pichetto. – Yo no doy interrupciones, presidente.

– *La señora senadora Negre de Alonso realiza manifestaciones fuera el alcance del micrófono.*

Sr. Presidente. – Por favor, senadora...

Sr. Pichetto. - No estoy ofendiendo a nadie. Estoy haciendo una valoración de que dan por sentado que el resultado inexorable del proceso electoral es la derrota. La verdad es que con ese espíritu es muy difícil poder cambiar la mirada de una sociedad.

Sra. Escudero. –El que gana la presidencia gana en el Consejo.

Sr. Pichetto. – No doy interrupciones.

Sr. Presidente. – Senadora, por favor: así como respetamos...

Sr. Pichetto. – Realizo algunas reflexiones para que ustedes también analicen lo que pasa en la legislación comparada. Es muy interesante.

En España, Gallardón, que es el ministro de justicia del P.P., hace cuatro meses hizo cesar al Consejo de la Magistratura. Se trata de órgano integrado por veinte miembros de los cuales doce son elegidos por el Parlamento.

El senador Giustiniani, seguramente, valora y abriga un gran sentido de hermandad por el Partido Socialista Español. De hecho, sé que además asiste a los congresos de ese partido. Bien, el Partido Socialista Español, cuando asume Felipe González, se encuentra

con un Poder Judicial fuertemente conservador ligado al franquismo –a la vieja estructura de la dictadura franquista– y a los intereses de la derecha española. Por lo tanto, la primera modificación en la que avanza el Partido Socialista en el año 85, con Felipe en el cargo ya de primer ministro, es precisamente darle poder a la legislatura –a la voluntad popular– surgida del voto popular, y son los legisladores los que eligen doce de los veinte. Entonces, ¿ahora Gallardón qué quiere hacer? Volver al sistema anterior, a la estructura conservadora anterior, donde los jueces se eligen por sus propios jueces. Claro, esto provocó una gran conmoción porque a los jueces no les gusta este sistema. Estaban de acuerdo con el anterior. Les gusta más la politización, diría.

Hay un gran debate en España y, entonces, parece que Gallardón ha paralizado el proyecto, no va a avanzar; pero avanzan con otros proyectos realmente mucho más complejos. Ustedes tendrían que analizar.... No encuentro los papeles: estoy como un ex senador. (*Risas*.)

Les cuento: concretamente, porque también en España están llevando adelante un proceso de reforma judicial, el ministro del P.P. –el Partido Popular– ha presentado un proyecto de fusión de tribunales y de achicamiento del costo judicial, porque lo que les preocupa es el gasto judicial de más de 455 juzgados individuales. Aparentemente, la idea es fusionarlos, y dicen que no van a echar jueces. Es decir que hay un nivel de convulsión realmente importante. Mantendrán el sistema de decisión política, fuertemente ligado a la voluntad popular porque, aparentemente, el P.P. ha desistido, ha dejado sin efecto la propuesta originaria. Además, no logra el apoyo de PSOE en el marco de la Cámara de Diputados. Eso es lo que está sucediendo en España, y a nadie se le ocurre decir que se cae la monarquía; nadie dice nada al respecto.

En la Argentina, se está dando un debate que es propio de las atribuciones que tiene el Poder Legislativo en uso de facultades que le son propias. Porque, en este caso, la Constitución nos ha delegado hacer una ley en la materia; la tercera. De todas formas, yo tengo muy poca fe; soy escéptico respecto de esta figura. Pero no voy a decir lo que pienso, porque mañana me ponen un título en un diario. Sinceramente, creo que es una apuesta más a intentar que esto funcione.

En cuanto al tema de las mayorías, tengo una nómina de los consejos de la Magistratura provinciales. La mayoría de ellos funcionan dentro del propio Consejo tanto como acusación como instancia de juzgamiento. Por ejemplo, el Reglamento del Consejo de la Magistratura de mi provincia establece, en su artículo 44, que el Consejo de la Magistratura, para dictar sentencia, sesionará en el pleno y se pronunciará por mayoría de sus miembros. O sea que se necesita simple mayoría para acusar y para echar a un juez. En general, el derecho público provincial, nuestra fuente, es la de la simple mayoría.

En este caso, no se requiere una simple mayoría sino mayoría absoluta, la que exige, de una integración de 19 miembros, 10. Además, requiere el consenso de otros sectores, de otros elementos valorativos. Entonces, si para dictar o modificar esta ley necesitamos mayoría absoluta, ¿por qué para la acusación de un juez tenemos que tener una mayoría agravada? En ningún lugar de la Constitución se dice ni se sostiene eso. Esa exigencia se trató de una construcción del legislador. Ahora bien, indudablemente nuestro sistema establece, en el artículo 115, la existencia del Jury de Enjuiciamiento, que no se modifica, seguirá integrado por jueces, abogados y representantes del Poder Legislativo. Pero ese organismo tenía un sistema en virtud del cual, para destituir a un magistrado, había que tener una mayoría de dos tercios. Ese fue el fundamento que utilizó la señora relatora, la jurista de nota. Evidentemente, le transfirieron información para tratar de generar un hecho

político.

Ya hemos mencionado el tema electoral. En ese sentido, no hay ninguna actitud de proscripción. La mayoría de los partidos políticos con existencia real en la Argentina pueden presentar listas e integrar la lista en todos los distritos. En cuanto a la tercera –la del Consejo de la Magistratura–, llevará el nombre del partido. Porque los partidos, por si no lo saben, son los vehículos centrales del sistema democrático. Sin partidos políticos no hay democracia. Lo que sucede en la Argentina es que ha habido una distorsión del proceso electoral, pues los partidos pasaron a hacer una mecánica de alianzas o de frentes electorales, producto de querer buscar acuerdos con los que no debían buscarlos. No voy a nombrar algunas experiencias frustradas de la última elección, cuando se mezcló el agua con el aceite, cuando partidos centenarios e históricos se terminaron juntando con otros sectores que eran la antítesis de la política. Eso, indudablemente, ha fracasado. Considero que en la Argentina –es mi visión– hay que volver al sistema de partidos y consolidarlos.

Al respecto, en la última semana, hemos visto cómo algunos dirigentes sindicales importantes de la Argentina armaron su propio partido. Por lo tanto, el nuestro es un sistema electoral alegre. Por ejemplo, uno junta 2 mil fichas, arma un partido nacional y hace un acto en la Plaza de Mayo. En ese sentido, hay dos sindicalistas que tienen partido propio, lo cual es extraordinario. ¿Y se habla de proscripción? Si acá cualquiera tiene un partido. Al partido se lo compra en la esquina, en el supermercado. *(Risas.)*

Habría que hacer normas más restrictivas para que una agrupación pueda tener vigencia como partido político. Tendría que exigírsele historia, una coherencia ideológica, un pensamiento. Como dije, acá cualquiera arma un partido o un partidito; en un quiosco, se juntan 4 personas y armaron un partido político. Esa es la historia de los últimos diez años en la Argentina, producto de la fragmentación, de la crisis y de la decadencia que sufrimos en 2001 y antes también. Y también me hago cargo de lo que nos corresponde a nosotros para que nadie me diga nada.

Por lo tanto, no hay ninguna proscripción. Además, la jurisprudencia de la Cámara Electoral en esta materia es muy clara. La Cámara tiene sentada una doctrina, una jurisprudencia, fundamentalmente, dirigida a la participación. En consecuencia, cualquier planteo que se haga en esta línea será por la participación y no por la proscripción. Esa es la línea de la Cámara Nacional Electoral, que realmente es la que regulará, en última instancia, este sistema.

Por ende, no creo que haya ningún riesgo para la República; considero que lo de la relatora ha sido una operación menor, por supuesto magnificada, y creo que la ONU no se preocupó por el tema judicial. Acá, en la Argentina, no se persiguen fiscales ni se matan jueces, como ocurre en otros países del África. La relatora debería estar preocupada por lo que sucede en algunos países de Centroamérica, en orden a cómo funcionan los sistemas de las mafias o las maras, que cuando no les gusta un juez van y lo "limpian". Pero aquí, en la Argentina, no ocurre nada de eso. Hay un sistema que está garantizado, en virtud del cual el juez es la última instancia de revisión de cualquier norma en el plano de la constitucionalidad, y la Corte es el máximo estamento que, incluso, opera en la revisión de la destitución de un juez por vía del recurso extraordinario. Por lo tanto, quiero llevarle tranquilidad a la sociedad: los tribunales van a seguir funcionando y dictando sentencias, no va a haber ningún tipo de situación anómala ni nadie podrá controlar a los jueces. Los jueces continuarán actuando con independencia y con autonomía, tal como lo han hecho hasta ahora.

Esperemos que este instituto, con voluntad popular incorporada y con una visión

fuera de la estructura de los colegios de abogados y de los jueces –con una mirada más popular en su integración, más de pueblo–, funcione; a lo mejor, funciona. Esperemos que mejore y sea más rápido y efectivo en la designación de los jueces y, también, en la remoción de los malos magistrados, de los jueces que dañan a la propia institución. No creo que el Poder Judicial sea malo. Considero que la inmensa mayoría de los jueces trabaja digna y responsablemente, que se esfuerzan y hacen un trabajo con muchas limitaciones.

Tenemos una Corte que, realmente, es muy buena. Nunca reniego de lo que hemos hecho. Me parece que el Gobierno del doctor Néstor Kirchner tuvo un logro importante, pues conformó una Corte ejemplar. Nosotros no andamos haciendo denuncias ni vertiendo cicuta o ácido para que se corroan los espíritus de los ciudadanos argentinos, diciendo que hubo un acuerdo entre el doctor Lorenzetti y la presidenta. Yo creo que la Corte ha defendido el espacio de la administración y de la superintendencia, facultades que ya venía ejerciendo.

Por ejemplo, cuando asumí como consejero, en 1998 –la primera integración del Consejo de la Magistratura–, se planteó esa controversia. Hubo acordadas de la Corte del doctor Nazareno en defensa de la administración y la superintendencia, y el Consejo, inteligente y sabiamente, fue aceptando esa realidad. También hubo resoluciones del Consejo para tratar de hacer valer su autoridad pero, finalmente, se llegó a un marco de funcionamiento razonable, en el que la estructura de la administración la tenía la Corte. De todas maneras, el Consejo tenía un secretario de administración que trabajaba en línea. Además, la Corte confeccionaba el presupuesto y se lo enviaba al Poder Ejecutivo. Asimismo, el Poder Ejecutivo nunca se quedó con la plata de la Corte.

Siempre se construyen ficciones en la Argentina. Siempre hay que construir también un relato opositor dramático para que la gente crea que el mundo se termina.

Cuando cerré el debate, no hablé de este tema. No mencioné esta cuestión de las atribuciones porque lo viví y porque creo que actualmente funciona de esta manera. En este Consejo y en el anterior, funciona de esta manera: acordado. Me parece innecesario ponerlo en la norma. Considero que éste era un acuerdo tácito, pero lo que estamos haciendo es reafirmar en la norma esta voluntad de no entrometernos en el principio de funcionamiento de la Corte, en la autonomía de la Corte, en los recursos que se utilizan, en todo lo que la Corte ha hecho para modernizarse; también en los esquemas de superintendencia. ¿Qué va a estar haciendo el Consejo, tratando un problema de disciplina de un empleado de Mendoza, del Neuquén o de Río Negro, o de un secretario? ¡De ninguna manera! Eso lo tiene que hacer la Corte. Son tareas propias y específicas que se venían haciendo con la primera ley y con la segunda. Ahora, lo que estamos haciendo es ratificarlo para dar tranquilidad.

De los otros temas, la Corte no opinó porque tiene razón de no opinar. No es imprudente como esta Cámara Civil que opinó hoy y lo hizo ante la opinión pública. La Corte es prudente porque sabe que es el último tribunal, la última palabra, en materia de constitucionalidad respecto de temas donde, seguramente, puede haber controversias. Tal es el caso; de hecho, se están apurando a hacer una presentación sin causa en el medio. Quieren declarar la inconstitucionalidad de la norma de manera abstracta, sin que haya litigio o controversia de parte. Ayer, una jueza en lo contencioso administrativo –no recuerdo el nombre– lo resolvió razonablemente. Dijo que tenía que haber causa. Era una declaración de inconstitucionalidad en abstracto.

Estos son los fundamentos. Nosotros vamos a votar las reformas. Creemos que el proyecto es razonable. Lo vamos a ver andando en el tiempo y de ninguna manera es un

hecho dramático para las instituciones de la Argentina. Al contrario, por ahí entra un poco de aire fresco, una mirada más popular sobre un Poder que, indudablemente, tiene una mirada más para adentro. Es una característica; tampoco es un demérito. Tiene el cargo vitalicio. Miren si será vitalicio que hay jueces que tienen una edad interminable; ojalá vivan muchos años más.

Con estos fundamentos, vamos a votar positivamente. Le pido que revisemos bien el tablero para votar, que todos los senadores estén habilitados y que pongamos en votación en general y en particular.

Sr. Presidente. – No corresponde.

Finalizado el debate, en términos del artículo 81 de la Constitución Nacional, vamos a hacer una sola votación por la aceptación o por el rechazo de las modificaciones que vienen de la Cámara revisora. Así que este va a ser el mecanismo que vamos a utilizar.

Están todos identificados. Por lo tanto, procedemos a votar.

– *Se practica la votación por medios electrónicos.*

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38 votos afirmativos y 30 votos negativos.

– *El resultado de la votación surge del acta correspondiente.*¹

Sr. Secretario (Estrada). – Se han superado las mayorías previstas en el párrafo segundo del artículo 77 y en el artículo 114 de la Constitución Nacional.

Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.¹

¹ Ver el Apéndice.

INSERCIONES

Las inserciones remitidas en formato digital por los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos al momento de la publicación de la Versión Taquígráfica en Internet, son las siguientes:

1

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA CORREGIDO

**Modificación de la ley de creación del Consejo de la Magistratura
(O.D. N° 136/13)**

Señor presidente: lo primero que quiero decir es que celebro esta discusión. Los proyectos presentados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner han generado debate y se han sumado aportes para avanzar en un proceso que sume al Poder Judicial a la democratización de las instituciones.

Un gobernador, intendente, legislador y presidente es validado o removido directamente por el pueblo mediante el voto popular según haya sido su desempeño en su gestión. Un juez, en cambio, retiene su cargo de modo vitalicio amparado por un sistema judicial cerrado con reglas del siglo XIX y manejado por la familia judicial. Y así, tenemos en el Poder Judicial magistrados que colaboraron con la dictadura, con grupos económicos que logran fallos a favor y en contra de los intereses de la sociedad.

Vemos absoluciones confusas; soportamos medidas cautelares que se extienden en el tiempo a favor de grupos económicos que van a contrapelo de los derechos de los argentinos, y un sistema corporativo que aleja al Poder Judicial y a la Justicia de los ciudadanos.

Definir al Poder Judicial como un poder político es una cuestión fundamental; siempre fue así y no cabe duda de que es así. Reconocer que el Poder Judicial es un ámbito de intensa disputa política es absolutamente necesario. La forma de selección de sus integrantes, las decisiones del Poder Judicial en tanto resuelven o no algún conflicto, las sanciones o expulsiones de sus miembros, las vinculaciones con los otros poderes y con los ciudadanos, y las decisiones que toman nos conducen a concluir que el Poder Judicial actúa en términos políticos.

Otro tema fundamental es cómo se expresa el Poder Judicial. Las decisiones en el Poder Judicial las toman los abogados, y quienes hacen los planteos, los que ganan, los que pierden, o los que consensuan también son abogados. Para terminar con esa lógica, si queremos un marco de derecho con cierto contenido social en términos ideológicos, hay que trabajar ya en las universidades los planes de estudio para que se adecuen a los tiempos que corren.

La Ley de Reforma del Consejo de la Magistratura amplía la cantidad de miembros a un total de 19 y propone la elección de sus miembros por el voto popular conforme al sistema de las PASO, de acuerdo con el artículo 38 de la Constitución Nacional, garantizando la igualdad en la composición: 6 representantes del Poder Legislativo, 6 profesionales del Derecho (3 jueces y 3 abogados), 6 ciudadanos del ámbito académico y científico, y 1 representante del Poder Ejecutivo Nacional, respetando siempre la relación 2:1 para las mayorías y las minorías. Esto constituye una decisión política que se inscribe en un modelo que concibe a la participación ciudadana y la inclusión social como ejes estructurales de este gobierno nacional y popular. Entonces, los abogados, los jueces y los académicos y científicos, los elegidores de jueces serán elegidos por el pueblo de la Nación Argentina en elecciones nacionales y por la vía de los partidos políticos que, como bien dice el artículo 38 de la Constitución Nacional, son instituciones fundamentales del sistema democrático que garantizan la representación de las minorías y la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos.

Además, se elimina la exigencia para los legisladores de ser abogados para integrar el Consejo de la Magistratura e impide que se puedan presentar a concurso quienes hayan desempeñado cargo o función

durante la última dictadura cívico militar.

Aquellos que se rasgan las vestiduras diciendo que se atenta contra la República, en realidad se oponen a la participación popular y pretenden que sigan siendo los grupúsculos de asociaciones de magistrados, colegios de abogados y decanos de las universidades los que continúen eligiendo a los administradores de la Justicia. Se oponen a que el pueblo participe en la administración de justicia; se oponen al voto popular con el mismo criterio elitista con que un sector de la sociedad en la Argentina hace más de 100 años se opuso a la Ley Sáenz Peña, que estableció el voto secreto y universal, y al voto femenino en el año 1947, durante el primer gobierno de Perón, y al voto de los 16 en el 2011, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ambos gobiernos con gran apoyo popular que lucharon y luchan por la soberanía política, la independencia económica y la justicia social.

Los jueces tienen una función en la democracia, por lo tanto su conducta pública, como la del resto de los funcionarios públicos, debe estar sujeta al voto popular, y sus declaraciones juradas patrimoniales también deben ser de carácter público y de libre accesibilidad.

Elegir por el voto popular a los miembros del Consejo de la Magistratura legitima a los que eligen jueces.

En esta discusión se pone en evidencia cómo nos representamos el Poder Judicial, cómo lo concebimos, qué esperamos de él y cómo deben ser escogidas las personas que lo integrarán. El debate se resume en la pregunta ¿cuál es el rol de la Justicia? Se perciben al menos dos perspectivas diferentes: el modelo de Justicia que se apoya en el economicismo, la antipolítica, el mercado, el poder de las corporaciones frente al Estado mínimo, el que defiende la eficiencia; y el otro, el que propone nuestra presidenta, el que defiende la dignidad.

Recordemos, entonces, la visión economicista que sufrimos en nuestro país en los 90, que consolidó el modelo de la revolución del 55 y de la dictadura militar del 76 que nos llevó al endeudamiento, al desempleo, a la desigualdad y a la pobreza, con la consecuente pérdida de soberanía y renuncia a los tribunales argentinos.

Es curioso que nadie haya reclamado por la independencia de la Justicia cuando no se hacían juicios por los derechos humanos, o cuando el país renunció a su soberanía renunciando al funcionamiento autónomo de sus tribunales para tomar deuda externa. Vendimos el país y cerramos nuestros tribunales, y por eso nos hacen juicios en el mundo: porque no éramos un país soberano. No querían esos juicios por un endeudamiento escandaloso y que a espaldas del pueblo se discutieran en nuestros tribunales. Ese modelo, de la mano de la impunidad, le quitó legitimidad al Estado.

A propósito de la discusión que plantean sectores de la oposición en concordancia con algunos sectores periodísticos que nos quieren imponer una devaluación de la moneda, Aldo Ferrer, el economista del Plan Fénix, hoy embajador argentino en Francia, llamó para evitar que la discusión del tipo de cambio enmascare la pretensión de un regreso a las políticas neoliberales y destacó que a los únicos países que les va bien es a los que ejercen su soberanía.

Este modelo de Justicia que nos propone nuestra presidenta rescata la identidad, la heterogeneidad, la palabra, nuestra historia, nuestra cultura, la memoria. Nos posibilita recuperar la justicia como el bien soberano; rescata el rol igualador del Estado. Esta es la posibilidad por la que estamos luchando. La memoria reconstruye un nuevo derecho, una nueva voz, un nuevo camino: el camino del humanismo, de la identidad y de la soberanía. Lo importante es consolidar lo que se ha logrado en esta década ganada.

Estos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo no son los primeros actos de democratización de la Justicia impulsados por este gobierno. En el año 2003 Néstor Kirchner dictó los decretos 222/03 y 588/03 que permitieron a los ciudadanos emitir opinión para la elección de los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y demás magistrados inferiores nacionales y federales, y constituyó una modificación sustancial histórica en el momento en que fue puesto en práctica.

Además, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos orientó su gestión al acceso a la Justicia en un sentido amplio para que el acceso a los Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales de toda la población, y en especial de los sectores más postergados, sean posibles. Para ello se instalaron 35 centros de acceso a la justicia que funcionan en zonas de alta vulnerabilidad de todo el país, atendiendo consultas jurídicas, realizando mediaciones comunitarias y facilitando trámites en distintas áreas del Estado.

En el mismo sentido y con el fin de democratizar el acceso a la información jurídica, se creó la Editorial Jurídica del Estado, INFOJUS, que es una extensa biblioteca digital permanentemente actualizada que tiene normativa, jurisprudencia y doctrina y a la que se accede en forma gratuita.

Este debate puso en evidencia viejos dilemas que quizás sea el momento de que los argentinos y

argentinas pensemos y discutamos. Es el mejor momento; nunca hubo tanta libertad en este país. Uno de ellos, que quiero plantear hoy aquí, es cómo es posible que una ley aprobada por los representantes del pueblo, por los representantes de las provincias y promulgada por el Poder Ejecutivo, validados por el voto del pueblo por amplia mayoría, y que juntos Poder Ejecutivo y Poder Legislativo son los que establecen las políticas públicas que conducen el destino de la Patria y la felicidad del pueblo, sea declarada inconstitucional por un juez o un tribunal que no se somete a la voluntad popular.

2

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR RACHED

Modificación de la ley de creación del Consejo de la Magistratura

(O.D. N° 136/13)

En primer, lugar quiero resaltar que la creación del Consejo de la Magistratura en la reforma constitucional de 1994 tuvo el propósito de atenuar el presidencialismo y generar un organismo técnico y político que “despartidizara” la designación y remoción de los jueces.

Sin embargo, el oficialismo hoy da una vuelta de página, desconoce el texto constitucional y pretende transformarse en poder constituyente para dictar nuevas reglas de juego de manera unilateral.

Esta ley, en materia de selección de los consejeros, contiene una violación al principio de la representación “estamentaria” que establece el artículo 114 de la C.N. Lo hace al establecer la posibilidad de elección los Consejeros que representan a los jueces y a los abogados de la matrícula federal a través de un partido político.

La composición que el oficialismo propone junto al cambio de mayorías necesarias para designar y para acusar jueces, le da al partido mayoritario el control total del Consejo y altera el equilibrio previsto en el texto constitucional.

Esto no sólo lo advertimos nosotros, también está siendo cuestionado en el ámbito internacional como consecuencia de las declaraciones que formuló la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de la Justicia.

La comunidad internacional advirtió al Estado argentino que esta reforma judicial sería violatoria del derecho internacional.

La propia relatora ha señalado que “Al otorgar la posibilidad a los partidos políticos de proponer y organizar las elecciones de los consejeros, se pone en riesgo la independencia de los miembros del Consejo de la Magistratura, lo que compromete seriamente los principios de separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial, elementos fundamentales de toda democracia y de todo Estado de Derecho”.

Además, indica que el texto de este proyecto de ley “es contrario al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”.

Hablamos de “reforma judicial” porque la relatora no sólo se refirió a la reforma del Consejo, sino también al proyecto de ley de regulación de medidas cautelares.

En este sentido, la relatora señaló que “el uso y el período de vigencia de las medidas cautelares contra el Estado no pueden ser restringidos. En caso contrario, el acceso a la justicia no se encuentra plenamente garantizado...”

Que dichas limitaciones son contrarias a “los artículos 2 (3) y 14 (1) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros estándares internacionales relevantes”, alertó la relatora especial de la ONU.

Señor presidente: estas leyes que ustedes pretenden aprobar son un agravio a la independencia del Poder Judicial y, por lo tanto, a la República, y van a terminar perjudicando a toda la sociedad.

Por todo lo expuesto, voto en contra.

ANEXO

Artículo 14:

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.

Artículo 2:

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales.

3

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA CORRADI DE BELTRÁN

Modificación de la ley de creación del Consejo de la Magistratura

(O.D. N° 136/13)

Señor presidente: hoy nos encontramos en el último tramo de debate y tratamiento de este paquete de leyes que hacen a la democratización del Poder Judicial.

El Consejo de la Magistratura es un órgano constitucional de integración multisectorial, con la función primordial de promoción y remoción de los jueces nacionales y federales.

No se habla del Poder Judicial; no se cuestiona su estructura ni los jueces que imparten justicia sino a partir de algún fallo que deje en evidencia la parcialidad, el modo de actuar corporativo de algunos representantes del Poder Judicial, tal como ocurrió con la sentencia dictada para el caso de Marita Verón.

La iniciativa que estamos debatiendo tiene por objeto, justamente, impedir el funcionamiento corporativo del Poder Judicial, de los jueces, brindando un marco de legitimación a través del voto popular. El voto popular obliga a los consejeros, como a los jueces, a perfeccionar su trayectoria profesional, a hacer bien las cosas.

La elección de los miembros del Consejo de la Magistratura se hará conforme las normas del Código Electoral; de la Ley Orgánica de Partidos; de la Ley de Financiamiento; de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral; y de la Ley de Cupo Femenino, lo que garantizará el ingreso femenino al Consejo de la Magistratura, ya que hasta el momento, en cuanto a los representantes jueces, hubo sólo una mujer consejera jueza.

Aumentar el número de miembros de trece a diecinueve se fundamenta en la representación dentro del Consejo de las mayorías y las minorías –tres jueces: dos de la mayoría y 1 de la minoría; tres abogados, ídem; tres diputados, ídem; tres senadores, ídem; seis académicos: cuatro mayoría y dos minoría.

Democratizar la Justicia es poner su administración al servicio de nuestro pueblo; saber quiénes son electos, sus cualidades, conocimientos e idoneidad para las distintas consideraciones que forman parte de la vida republicana y federal. Incorporar sujetos expertos en otras disciplinas constituye, además de una necesidad, una realidad que debe ser tenida en cuenta a los fines de considerar todos los temas que atañen a un país.

Es importante que los consejeros sean electos en el marco de los partidos políticos, porque ése es el único mecanismo que la Constitución establece para la participación por el voto popular. Ello instrumentado de manera que en las boletas de cada partido político figuren tres candidatos a consejeros en representación de los jueces, tres de los abogados y seis académicos, que se agregarán a los seis legisladores que el Parlamento selecciona para el organismo y al representante del Poder Ejecutivo.

Por todo lo expuesto y con la convicción de que vamos avanzando en este proceso democrático, es que votaré positivamente el presente proyecto de ley.

4

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ

Modificación de la ley de creación del Consejo de la Magistratura

(O.D. N° 136/13)

Señor presidente: el 17 de abril expresé, con absoluta convicción y firmeza, mi voto afirmativo por el expediente proveniente del Poder Ejecutivo, cuyo número es 5/13. En su momento, hace tres semanas, –y hoy

mismo– consideré que es un gran paso para profundizar el proceso de democratización que se viene registrando en múltiples ámbitos, “empoderando” a la gente.

Gracias a la Ley de Medios, ahora podemos escuchar cada vez más voces, distintas, polifónicas. Gracias a las medidas adoptadas desde este gobierno –del que formo parte–, la población en general tiene mayor posibilidad de expresarse, de participar en su destino, en la construcción diaria del país que todos habitamos. A partir de la aplicación de la mencionada ley, existen 1256 nuevas radios, canales de TV de aire y de cable; algunos privados, otros estatales de los distintos niveles –municipales, provinciales y nacionales– y muchos otros cooperativos.

Gracias al “Programa Conectar Igualdad” se está democratizando el acceso a educación de calidad y se han entregado casi 2.500.000 notebooks. Hoy los chicos de los rincones más recónditos del país, más humildes, tienen el mismo acceso que los chicos de la Capital Federal a esta tecnología educativa.

A su vez, considero que las modificaciones que se le hicieron al proyecto P.E.-5/13 en la Honorable Cámara de Diputados –proyecto que estamos debatiendo– fueron de forma, sin alterar el espíritu del texto. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de mantener en órbita la administración del Poder Judicial y las facultades de superintendencia sobre su personal, me parecen entendibles y aceptables. Los cambios introducidos al proyecto no modifican los puntos centrales de la propuesta, que es la elección directa de los consejeros, las mayorías para designar y suspender a un juez y los concursos preventivos para cubrir vacantes; reafirma la convicción que tenemos de que más participación popular es mejor democracia.

Quiero recordar que hace unas semanas dijeron, desde los medios masivos de comunicación, basados en dichos de algunos legisladores de la oposición, que estos eran proyectos que se votarían a libro cerrado, sin ningún tipo de modificación ni discusión. Incluso muchos legisladores se negaron a participar en las reuniones de comisión. Resultó extraño ver a parlamentarios que no quieren debatir. A estos proyectos que –según algunos– no sufrirían modificaciones, los modificamos, mejorándolos gracias a las opiniones de los mismos integrantes del bloque oficialista y de distintas organizaciones no gubernamentales que no tuvieron problemas en venir al Senado a exponer su punto de vista, su visión. Es más, desde el oficialismo recogimos esas opiniones, las analizamos y modificamos los proyectos, siempre pensando en lograr la mejor ley posible.

La grandeza del país necesita que más personas participen, que más personas puedan elegir. Sin lugar a dudas, que millones de personas puedan elegir a los integrantes del Consejo de la Magistratura es muchísimo más democrático que si lo hacen 20.000. Hay que confiar en el voto popular. Nosotros estamos aquí debatiendo, trabajando, gracias a la confianza que nos han depositado. Creamos en la gente; ellos creen en nosotros. Es por ello que le doy todo mi apoyo a este proyecto.

5

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA HIGONET

Modificación de la ley de creación del Consejo de la Magistratura

(O.D. N° 136/13)

Tratamos nuevamente en el Senado este proyecto de modificación de la “Ley de creación del Consejo de la Magistratura” considerando las reformas que se realizaron desde la Cámara de Diputados, algunas de las cuales surgen a partir de la Carta enviada por los Magistrados Judiciales.

Reafirmo mi convencimiento de que estas leyes que el Ejecutivo ingresó en el Congreso tienen en su esencia la búsqueda de una mayor democratización de la Justicia, es decir, una verdadera extensión en la participación de los ciudadanos, una mayor transparencia en la gestión judicial y un mayor control, información y seguimiento de las decisiones de los jueces.

Las modificaciones que realizó la Cámara de Diputados se basan en dos grandes puntos: la administración financiera del presupuesto y el ejercicio del poder de superintendencia y en el sistema que se utilizará para la elección de sus miembros.

Es así que la Corte Suprema continuará administrando el presupuesto del Poder Judicial, manteniendo el poder de superintendencia, mientras que el Consejo de la Magistratura manejará sus propios recursos presupuestarios. Recordemos que el Consejo hasta hoy necesitaba de la firma del Presidente de la Corte para poder nombrar a sus empleados.

En este sentido, la Corte continuará designando los secretarios y el personal auxiliar. El Consejo de la Magistratura sólo cumplirá funciones de contralor sobre el acceso igualitario y por concurso a la carrera

judicial, mientras que el Consejo de la Magistratura manejará la designación de su personal.

Como cabeza del Poder Judicial, la Corte seguirá fijando las remuneraciones de magistrados, funcionarios y empleados de la Justicia, continuará fijándose sus horarios de jornada laboral, límites de licencia y habilitación de días de funcionamiento de los juzgados; mientras que el Consejo de la Magistratura manejará su administración.

En este sentido, se agregan diecisiete pautas que debe respetar el Poder Judicial para una mejor administración de justicia, como el reglamento que actualmente está vigente también tendrá que ser modificado; le indicamos a la Corte las pautas sobre la base sobre las cuales deberá hacer dicha reglamentación, que son las siguientes: fijación de horarios mínimos de jornada laboral para magistrados, funcionarios y empleados -ojalá la Corte escuche y lo amplíe a ocho horas-; limitación de licencia por vacaciones a los períodos establecidos en las ferias judiciales de verano e invierno, que podrán ser exceptuadas con carácter excepcional por razones de salud o de servicio; criterio amplio de habilitación de días y horas de funcionamiento para garantizar la tutela judicial efectiva; desempeño ético en el ejercicio de la función; prohibición de ejercer la docencia en el horario judicial; presencia efectiva de los magistrados y funcionarios en todos los actos procesales en los que la ley así lo requiera; celeridad en la respuesta jurisdiccional; trato digno e igualitario a todos los actores vinculados con el proceso; transparencia en la gestión; publicidad de los actos; mecanismos de control de gestión.

La otra modificación tiene que ver con la elección popular de los magistrados. Al ser el Consejo un órgano público de naturaleza constitucional, los consejeros ocupan cargos públicos electivos.

La fuente del mandato electivo de los consejeros, que hasta ahora era sectorial, corporativo, ahora pasa a ser del cuerpo electoral, el que inviste a los consejeros en los términos del artículo 33 de la Constitución nacional. La expresión técnica del cuerpo electoral es el padrón nacional de electores.

Para una elección donde se expresa el padrón nacional de electores y se eligen cargos públicos electivos, el artículo 38 de la Constitución Nacional determina que la competencia o monopolio para la postulación de candidaturas a cargos públicos electivos corresponde a los partidos políticos.

Esto hace que la normativa aplicable sea el Código Electoral Nacional, la ley 23.298, la 26.571 de primarias y la de financiamiento 26.215.

Atento a que la jurisdicción del Consejo de la Magistratura es nacional, la ley determina que la elección se hará simultáneamente con las elecciones presidenciales, las que también son nacionales. Se trata de una elección de distrito único, para lo cual el Código Electoral determina que la autoridad de aplicación será el juzgado federal con competencia electoral de Capital Federal y la instancia revisora es la Cámara Nacional Electoral.

Como se establece que el acto eleccionario para la designación de consejeros se realizará excepcionalmente en 2013, la elección deberá ser simultánea con la de renovación de cargos legislativos. Vale decir que coexiste una elección de distrito único junto a veinticuatro elecciones legislativas locales. Por lo tanto, debe preverse que la representación de cada fuerza política en cada provincia pueda integrarse en un mismo cuerpo de boleta con la de consejeros a nivel nacional. A ese efecto en el texto se insertó una cláusula transitoria donde se incluye una regulación de esta situación de excepción indicando que "...la oficialización de listas de candidatos a consejeros del Consejo de la Magistratura para las elecciones generales podrá hacerse en esta oportunidad por cualquier partido, confederación o alianza de orden nacional...". Esto significa que un partido nacional integrado con al menos cinco partidos de distrito puede presentar candidatos a presidente y vice del mismo modo que ahora también pueden hacerlo a consejeros de la Magistratura en las veinticuatro provincias.

Atento a las dificultades de interpretación que pudieran presentarse en las veinticuatro jurisdicciones respecto a la adhesión de boletas, se aclara expresamente en la ley cuál es el mecanismo de adhesión a utilizarse: "A los fines de la adhesión de los cuerpos de boleta de la categoría de consejeros del Consejo de la Magistratura con la de legisladores nacionales de cada distrito, se requiere la comprobación de la existencia de que en al menos dieciocho de los veinticuatro distritos la mencionada adhesión se realiza exclusivamente con agrupaciones de idéntica denominación".

La única exigencia de la ley para la adhesión es que la agrupación tenga una denominación común en los dos cuerpos de boleta (Consejo de la Magistratura y legisladores nacionales) en al menos dieciocho de los veinticuatro distritos, sin perjuicio de que los que compongan las formaciones políticas sean distintos partidos. El único requisito que establece la ley es que las agrupaciones tengan el mismo nombre.

Por otra parte, se flexibiliza el requisito de la norma al establecerse que "en el resto de los distritos, podrá adherirse mediando vínculo jurídico entre las categorías de listas oficializadas".

Se introduce el concepto de vínculo jurídico, que posiblemente resulte novedoso para la mayoría; el

concepto no existía en la legislación como una norma positiva, pero era una creación jurisprudencial que permitía facilitar la interpretación de la existencia de frentes, y en estos la posibilidad de adherir boletas en un mismo cuerpo.

Para poder adherir boletas en un mismo cuerpo la Cámara Electoral ha dicho reiteradamente –en forma continua, no en esta elección sino con anterioridad- que debe existir un vínculo jurídico previo. Naturalmente el frente electoral requiere que en su conformación se haya previsto esta situación.

Explicitado esto en forma aclaratoria, permite a quienes participen de la elección tener una norma clara para no discrepar de lo que debe ser la adhesión. Esto significa que en los seis distritos restantes la propuesta podrá no tener una denominación común entre la boleta de la agrupación que registra candidatos a consejeros y la que registra legisladores. La ley exige en ese caso que para poder adherir la boleta exista un vínculo jurídico previo entre la agrupación local que compite para legisladores nacionales y la que compite por el Consejo de la Magistratura.

Todas estas modificaciones no hacen más que profundizar en el sentido republicano de la reforma y es un paso más en el fortalecimiento de la Nación, proceso iniciado en 2003 con el presidente Néstor Kirchner, que hoy continúa nuestra presidenta.

6

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR REUTEMANN

Modificación de la ley de creación del Consejo de la Magistratura

(O.D. N° 136/13)

Ingreso democrático al Poder Judicial

(O.D. N° 135/13)

Publicación en Internet de decisiones de la Corte Suprema

(O.D. N° 124/13)

Carácter público de declaraciones juradas de patrimonios de funcionarios públicos

(O.D. N° 123/13)

Señor presidente: volvemos a considerar el proyecto de ley de modificación del Consejo de la Magistratura, junto a otras iniciativas, que cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados en el marco de la proclamada, aunque inexactamente denominada, democratización de la Justicia.

Existe un amplísimo consenso social y político en la Argentina sobre que es necesario llevar adelante una profunda reforma judicial, que sea respetuosa de la independencia de poderes y la constitucionalidad.

No cabe duda de que hay que agilizar la justicia, hacerla más accesible para todos los ciudadanos y especialmente para los sectores más vulnerables. Coincidimos en que no hay que ocultar información. Necesitamos una justicia más eficiente.

Digámoslo claramente, señor presidente: no se pretende democratizar la justicia; sólo se busca tener un Poder Judicial que le sea funcional al Poder Ejecutivo nacional. Tras un propósito se esconde otro. Por eso no estamos ante una reforma seria y necesaria. Otra vez este gobierno demuestra operar en la coyuntura y no en la estructura; otra vez este gobierno dice una cosa para hacer otra.

Así se logró la aprobación de la ley por la que se crean Cámaras de Casaciones, que están mal diseñadas y que sólo producirán mayores demoras en la administración de la Justicia; así se ha logrado alterar la naturaleza de los amparos judiciales, limitando su acceso por parte de los ciudadanos, y cuya inconstitucionalidad ha sido planteada ya en sede judicial; así se intenta terminar de lograr hoy una pésima reforma del Consejo de la Magistratura, que expone a sus integrantes a una lógica partidaria que les debe ser ajena, permitiendo que una mayoría circunstancial pueda imponer su voluntad en desmedro de las minorías. Los cambios introducidos en Diputados, y que estamos considerando, poco han hecho para revertir estos conceptos.

Hoy se suman otros tres proyectos en la misma línea, sobre el ingreso de personal al Poder Judicial de la Nación, la publicidad de declaraciones juradas de los funcionarios públicos y la publicidad de sentencias. Dichos proyectos, si bien plantean objetivos que se comparten, avanzan sobre facultades que son propias del Poder Judicial de la Nación, y en algunos casos son redundantes o implican un retroceso respecto de procedimientos ya vigentes en dicho ámbito.

Con el producto de esta reforma, el escenario que se plantea, desde una perspectiva republicana, es

preocupante y temible.

Creo no exagerar cuando la Organización de Naciones Unidas, a través de la relatoría especial por la independencia de la Justicia, ha expresado su profunda preocupación, solicitando a su vez que no se avance en esta reforma judicial, teniendo en cuenta que pueden llegar a verse afectadas las garantías del ciudadano de acceder a un juez imparcial e independiente para decidir y juzgar cuando sus derechos sean violados.

Es que esta embestida legislativa se da pese a la falta de un acuerdo de fondo, y pese a los evidentes defectos constitucionales de un paquete de leyes propiciado por el Poder Ejecutivo nacional. No se ha escuchado con atención lo que opinan los legisladores y dirigentes políticos; no se ha atendido lo que han opinado numerosas entidades, organizaciones, académicos y especialistas; no se ha, tampoco, valorado la recomendación de la Iglesia Católica Argentina que pidió una reforma judicial producto del consenso para no debilitar la democracia.

Todo se dio pese al claro repudio de una sociedad ávida de justicia, ávida de que se le resuelvan sus problemas reales, ávida de que no se toquen las instituciones y no se avasalle la Constitución, ciudadanía que se expresó en las calles de todo el país, y que seguramente lo seguirá haciendo.

El federalismo ha sido ignorado, ya que no se ha contemplado la perspectiva de las jurisdicciones provinciales. Nuevamente, se ha dado en el Congreso de la Nación, en un tema tan delicado, un debate de poca calidad y apresurado. Sólo hubo premura y un avasallamiento a las instituciones republicanas.

Por todo ello, señor presidente, es que me opongo a estos proyectos de una supuesta democratización de la Justicia.

7

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MONLLAU

Modificación de la ley de creación del Consejo de la Magistratura

(O.D. N° 136/13)

Ingreso democrático al Poder Judicial

(O.D. N° 135/13)

Publicación en Internet de decisiones de la Corte Suprema

(O.D. N° 124/13)

Carácter público de declaraciones juradas de patrimonios de funcionarios públicos

(O.D. N° 123/13)

Señor presidente: esta llamada democratización no es tal. Es más bien una domesticación. Es un intento -concretado, prácticamente- de manipulación de la justicia.

En países como Alemania y Rusia la Constitución –en un tiempo- sirvió como coartada para la tiranía. Y es que, señor presidente, las tiranías modernas no apelan a la abolición de la Constitución, sino que encuentran allí los medios legales de su tiranía (las delegaciones de poder, legislaciones especiales, poderes especiales, etcétera).

La administración central, extendida a todo el cuerpo social, brinda al tirano los medios técnicos para una opción organizada y duradera. En el “vamos por todo”, con el que la presidenta exhortó a sus dirigidos, nos permite advertir –con angustia y pesar- que los monopolios concentrados en manos del Estado lo convierte en un poder considerable y temible detrás de muchas de las medidas de este gobierno y de muchos de estos proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo, hay un aparente interés por corregir las injusticias, pero -como dice Paul Ricoeur- podemos concebir un régimen que se proponga corregir las injusticias económicas y sociales, pero que represente un problema patológico en el orden político.

Señor presidente: el denominado paquete de leyes denominado “democratización de la justicia”, constituye de hecho una reforma a la Constitución y la constitucionalidad es la expresión legal de ese movimiento por el que la voluntad del Estado se estabiliza en una ley que define el poder, lo distribuye y lo limita.

Está claro, señor presidente, que el Poder Judicial que quiere el gobierno es el que garantiza la impunidad para la corporación política gobernante. La ley sólo para los enemigos. Pero ya no sólo se mueven siguiendo la lógica amigo/enemigo, sino que ya nos colocan en la dialéctica de esclavo/amo.

La tentación del populismo es hacer de modo que el gobierno y el Estado se vuelvan y parezcan casi una misma cosa. Con frecuencia, se dice que el populismo pervierte todas las formas de representación social, a partir del momento en que las integra en un sistema único de poder. En cambio, la democratización prohíbe que se descargue sobre los hombres un poder único capaz de decidir acerca de todo y de encarnar a la Nación.

Siento, con mucho pesar, que muchos de mis pares sienten que están ante un día supremo para quien el poder se confunde con el pueblo, se separa de la sociedad y se coloca por encima de ella.

Hasta esta altura de la contingencia histórica, han colocado como norma estado de excepción, nos han entrampado en una transitoriedad jurídica que se ocupa más de las singularidades que de lo social. Un Estado que sólo avanza en soluciones transitorias jaqueado por y desde aquellos neoliberales peronistas de los 90 hoy reconvertidos y progresistas, populistas, de matriz smithiana.

Señor presidente: están hiriendo de muerte al constitucionalismo, están rompiendo el mecanismo deductivo de ley. Hoy la legitimidad y la eficacia del derecho se distancia cada vez más. Hoy la Constitución Nacional está relativizada a niveles extremos. Aquí no se defiende a la ciudadanía y, menos aún, a los ciudadanos vulnerables; aquí se defiende a un Estado torpe que hará más lento los tribunales, con mayor gasto operativo, con inflación jurídica y beneficios para la corporación jurídica gobernante.